

Responsabilidade Social e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

Conexões e Diálogos

Dimas de Oliveira Estevam
Maria João Santos
Caroline da Graça Jacques
Fernando Miguel Seabra
Organizadores



2021©Copyright UNESC – Universidade do Extremo Sul Catarinense
Av. Universitária, 1105 – Bairro Universitário – C.P. 3167 – 88806-000 – Criciúma – SC
Fone: +55 (48) 3431-2500 – Fax: +55 (48) 3431-2750

Reitora

Luciane Bisognin Ceretta

Vice-Reitor

Daniel Ribeiro Preve

Conselho Editorial

Dimas de Oliveira Estevam (Presidente)

Angela Cristina Di Palma Back

Cinara Ludvig Gonçalves

Fabiane Ferraz

Marco Antônio da Silva

Merisandra Côrtes de Mattos Garcia

Miguelangelo Gianezini

Nilzo Ivo Ladwig

Rafael Rodrigo Mueller

Reginaldo de Souza Vieira

Ricardo Luiz de Bittencourt

Richarles Souza de Carvalho

Vilson Menegon Bristot

Responsabilidade Social e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

Conexões e Diálogos

**Dimas de Oliveira Estevam
Maria João Santos
Caroline da Graça Jacques
Fernando Miguel Seabra**
Organizadores

Criciúma
UNESC
2021

Editora da UNESC

Editor-Chefe: Dimas de Oliveira Estevam

Preparação: Margareth Maria Kanarek

Revisão ortográfica e gramatical de língua portuguesa: Margareth Maria Kanarek

Revisão ortográfica e gramatical de língua espanhola: José Luis Fernández Fernández (Prólogo I) e Nora Gorrochategui (Prólogo II)

Projeto gráfico, diagramação e capa: Luiz Augusto Pereira



As ideias, imagens e demais informações apresentadas nesta obra são de inteira responsabilidade de seus(uas) autores(as) e organizadores(as).

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação

R434 Responsabilidade social e objetivos do desenvolvimento sustentável [recurso eletrônico] : conexões e diálogos / Dimas de Oliveira Estevam ... [et al.], Organizadores. - Criciúma, SC: UNESC, 2021.
188 p. : il.

Modo de acesso: <<http://www.unesc.net/portal/capa/index/300/5886/>>.

ISBN: 978-65-87458-40-3

DOI: <http://dx.doi.org/10.18616/respon>

1. Desenvolvimento sustentável. 2. Responsabilidade social da empresa. 3. Catástrofes naturais. 4. Direitos humanos. 5. Políticas públicas. 6. Participação popular. 7. Práticas colaborativas. 8. Sustentabilidade. 9. Governança corporativa. 10. Responsabilidade social universitária. I. Título.

CDD - 22. ed. 333.7

Bibliotecária Eliziane de Lucca Alosilla - CRB 14/1101
Biblioteca Central Prof. Eurico Back - UNESC

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta obra poderá ser reproduzida, arquivada ou transmitida, por qualquer meio ou forma, sem prévia permissão por escrito da Editora da Unesc.

Prólogo I

El reto de la colaboración, una exigencia ética para conseguir los ODS

José Luis Fernández Fernández

Cátedra Iberdrola de Ética Económica y Empresarial

Universidad Pontificia Comillas - Madrid

Hay que empezar reconociendo que la denominada Agenda 2030, en la que se insertan los diecisiete Objetivos del Desarrollo Sostenible – ODS, en español; SDG, por sus siglas en inglés, Sustainable Development Goals –, constituye uno de los mayores triunfos del multilateralismo de los últimos tiempos. Su propuesta, en 2015, representó un signo de unidad sin precedentes entre los Estados miembros de la ONU, comprometidos expresamente a colaborar en la erradicación de la pobreza extrema, en la reducción de la desigualdad; y unidos en esfuerzos conjuntos, para proteger el medio ambiente. Es decir, dispuestos a empeñarse por la humanización del mundo y por la consecución de una vida digna para los humanos: tanto para los que vivimos hoy, cuanto para las generaciones futuras.

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen, pues, una verdadera oportunidad para que, entre todos, pongamos manos a la obra de construir un mundo mejor. Es decir, más justo, munificente y bello; en el que todas las personas puedan tener la ocasión de vivir una vida lo más plena posible; y donde encuentren ocasión de florecer, desplegando hasta el máximo límite alcanzable todas sus capacidades: físicas, psicológicas, sociales, anímicas, espirituales.

Por consiguiente, hay que congratularse de que, cuando menos, se haya podido llegar a establecer – y casi nemine discrepante – el listado de las

cosas que habría que hacer – la agenda – en los próximos años, para sentar las bases que nos permitan a todos, como especie, aproximarnos a aquella utopía de un mundo, no sólo global, sino también verdaderamente compartido.

Ahora bien, la irrupción de la pandemia que nos azota a escala mundial en el año 2020 obligó a establecer nuevas prioridades en la agenda global. A este respecto, resulta sorprendente, cuando se coteja el tenor de los informes anteriores – por ejemplo, los del World Economic Forum (WEF) –, observar cómo una eventualidad pandémica como la que la humanidad viene sufriendo desde hace ya más de un año, no figurara identificada como riesgo probable – posible, siempre es cualquier cosa –; siendo así que el acento se ponía entonces, sobre todo, en el del cambio climático. Como sabemos, desde que la pandemia empezó a mostrar toda su virulencia, el importante y controvertido asunto del cambio climático hubo de hacerse a un lado y de ceder protagonismo – mediático, político, económico – al más urgente problema de la lucha contra el virus del Sars-Cov-2.

En todo caso, el balance que cabría hacer tras los cinco años que ya van transcurridos desde que se formularan los ODS, habría de recoger el dato de cómo, en efecto, se pueden identificar ya ciertos avances e indiscutibles pasos adelante en la consecución de aquellos objetivos. Sin embargo – principalmente, como queda dicho, al haber tenido que hacer frente al insólito problema sanitario que nos aflige –, cabe afirmar sin miedo alguno a errar en la previsión que aún queda un largo camino por recorrer; y que resulta urgente concitar la voluntad política y la colaboración interinstitucional para elaborar proyectos que se sustancien en la puesta en marcha de acciones que contribuyan a acelerar el proceso de avance para conseguir todas las metas propuestas.

Sea dicho ello, sin perjuicio de afirmar que, incluso, no se tiene por qué excluir siquiera la opción estratégica de diseñar el avance – con las cautelas que exige la tensión entre la realidad y la utopía que anima a llevar a efecto el siguiente paso posible – hacia un modelo económico y social, si no alternativo, cuando menos, mejor que el que tenemos. No se habla de revolucionar, de tirar abajo, de prescindir del que rige en el marco de la globalización: se habla,

en todo caso, de llevar a efecto una especie de Great Reset... Se quiere seguir contando con los puntos fuertes – indiscutibles, de cara al crecimiento – que el mercado, la libre empresa y el ánimo de lucro representan; pero se busca cohesionarlos con providencias y mecanismos que – paliando los daños colaterales del puro crecimiento económico orientado al corto plazo y a favor de un exclusivo grupo de interés – consigan embridar y orientar las dinámicas económicas hacia un escenario más sostenible, equitativo y donde el progreso vaya más allá del rubro económico y favorezca los intereses de muchas más personas. Esta apelación a la justicia que apunta hacia la distribución y el disfrute universal de los bienes naturales y económicos, exigiría una reflexión axiológica a escala global, dispuesta a entrar en los dominios de la Ética, yendo más allá de la mirada estrictamente económica que, necesariamente, se debe atener a una consideración causal de los procesos necesarios para obtener una producción eficiente a partir de los recursos naturales, por definición “económicos”. Es decir, escasos y susceptibles de usos alternativos.

Ahora bien, si bien parece obvio que conseguir los 17 objetivos propuestos, va a resultar extremadamente difícil desde un punto de vista técnico; resultará absolutamente imposible sin la opción moral por empeñarse a fondo en aquella apuesta por los valores meta-económicos que apuntan, entre otras cosas, a la consecución de un nivel de suficiencia básico e innegociable, como imprescindible que es, para todas las personas. Se trata de una tarea global que demanda una apuesta ética. Por ello, no se conseguirán avances significativos, sin la voluntad firme y perseverante de implicarse a fondo, con la expresa opción por colaborar con agentes de diversos ámbitos: se requiere el concurso de los Organismos Multilaterales, así como de los Estados y de las Administraciones Públicas. También se precisa de la implicación de la Sociedad Civil – ONG, Universidades, Iglesias... – y de los ciudadanos particulares. Y, por supuesto, todo ello tendría que estar también contemplado expresamente en la estrategia de las empresas y en la agenda de todas las organizaciones económicas. Sin el concurso de estos agentes, poco será lo que se pueda conseguir.

Por consiguiente, ante las empresas y las organizaciones económicas en general se abre un reto que – con la capacidad de innovación que las caracteriza y desde la oportunidad de aprovechar los nichos que lo verde y lo digital les ofrece – aparte de nuevos modelos de negocio, podría estar sirviendo de entrada para una sociedad más resiliente a escala planetaria; y, sobre todo, más justa y sostenible. Sin embargo, no estamos ante un desafío fácil de acometer, por más que la retórica al uso empiece a dar la impresión de que las cosas se arreglan por el simple hecho de ponerles etiquetas. Hay una especie de pensamiento mítico que parece tener asumido que, con utilizar a modo de talismán y fetiche unos conceptos determinados – sostenibilidad, ODS, Triple Cuenta de Resultados, RSE... – las cosas habrán de resolverse como por taumaturgia prodigiosa. Nada más lejos de la realidad.

Por ello, quizás, una de las contribuciones mayores que desde el mundo académico las universidades y escuelas de negocio habrían de aportar en todo este proceso, sería la de llamar la atención y poner a la gente en guardia ante este tipo de ingenuidades. El pensamiento crítico, la voluntad sistemática de inquirir con rigor, de analizar los discursos y de cuestionar unos relatos excesivamente pretenciosos – a veces ideológicos y siempre, inevitablemente, interesados – deberían ser herramientas con las que situarse a la hora de analizar y ponderar las propuestas, las acciones y, sobre todo, los resultados. Porque pudiera ocurrir que, si no se prestare la atención debida, podríamos dejar pasar una excelente ocasión para seguir humanizando el mundo, tornándolo un lugar mejor para todos, donde cada persona pudiera encontrar el modo de desplegar sus capacidades y de colmar su destino.

A este respecto, no cabe sino dejar anotado cómo la perplejidad hace acto de presencia desde el propio instante en que la reflexión crítica se enfrenta de manera sosegada con los diecisiete Objetivos del Desarrollo Sostenible y las 169 metas en que se explanan aquellas aspiraciones. Recuérdese que los anteriores Objetivos del Milenio a los que éstos de ahora dan continuidad, eran solamente ocho... ¡y ya parecían muchos!

¿Qué sistemática guio la propuesta de la Agenda 2030, con los 17 ODS y las 169 metas? ¿Qué valores éticos están siendo asumidos – de manera más o menos expresa, de forma más o menos crítica – como fundamento de la proposición? ¿Cómo se gestó el consenso? ¿Qué prioridades y qué orden jerárquico cabría establecer en la escala axiológica entre los distintos Objetivos? ¿Resultan unos más fuertes, exigibles e innegociables que otros? ¿Están todos al mismo nivel o hay unos más elevados o débiles que otros? ¿Tiene la Agenda 2030 conexión con algún otro tipo de declaraciones, grandilocuentes en el tono, pero insuficientes e incompletas en la práctica, desde hace decenios, tal como, por caso, la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la de los Derechos del Planeta? ¿En qué se está avanzando – y cómo –, con el nuevo listado de aspiraciones? ¿Qué valor cabe atribuir a suscripciones tan loables, por parte de algunos Estados, conocidos, precisamente, por implantar políticas o mantener inercias culturales, bien alejadas de alguno de aquellos fines, susceptibles de ser considerados, en todo caso, como más cruciales y significativos de entre los diecisiete? ¿Resulta creíble, en definitiva, la declaración de que tantos suscriptores están decididos, seriamente, a luchar por conseguir la igualdad y a pelear con la integración de lo distinto en las dinámicas sociales al uso, reconociendo como válido y deseable el valor de lo otro y de la diversidad?

Todos, los diecisiete, son grandes retos; ninguno parece estar de sobra. Sin embargo, cabe, cuando menos, tratar de llevar a efecto algún tipo de taxonomía entre ellos. Por ejemplo, ensayando una suerte de matriz con cuatro áreas, a partir de dos ejes: alcance espacial, en el eje de ordenadas; grupo afectado de manera inmediata por la situación, en el de abscisas.

Cabría, en consecuencia, identificar una suerte de ventana con cuatro cuadrantes que habrían de estructurar ámbitos distintos que, en consecuencia, precisarían de abordajes y estrategias peculiares para cada supuesto. Así, por ejemplo, desde un punto de vista geográfico, se podría distinguir entre retos, desafíos o problemas que impacten a nivel mundial o, en su caso, a una gran región geográfica. En el mismo eje de ordenadas donde se ubicaría la distinción

del alcance espacial, cabría, por otro lado, identificar otros desafíos, problemas y retos que fuera posible circunscribir como propios de un país o de una región no excesivamente grande.

Desde la perspectiva que aporta la distinción, en el eje de abscisas, respecto de si el afectado principal es un único Stakeholder – o un sector industrial determinado, o si se trata de un asunto específico y bien aislable –; o si, por el contrario, el asunto tiene que ver con una más amplia pluralidad de agentes implicados. Saldrían, en consecuencia, cuatro tipos de retos, cada uno con sus peculiaridades y que – para su resolución – habrían de requerir un abordaje desde modos y métodos específicos y singularizados.

Y por lo que hace a las empresas – por poner en foco en el agente que más protagonismo parece querer asumir – la pretensión de acometer querer – o de decir que se van a acometer – todos los ODS, equivaldría a no implicarse en serio con ninguno. De lo que se trata, a este respecto, es de nunca abdicar del hecho de ser empresa; y de, siéndolo, contribuir a la consecución de alguno de aquellos ODS, ubicables en alguno de los cuadrantes a los que acabamos de aludir.

¿De cuál o de cuáles de los ODS debiera ocuparse una empresa determinada?: De los que se conecten de manera más inmediata con su propósito organizativo, con el core business de cada organización; y, en definitiva, de lo que se denomina la materiality propia de cada empresa u organización en concreto. Pero insistamos, una vez más: sin tener que dejar de ser empresa – agente que compite en el mercado, movido por la regularidad causal de la eficiencia y, con gran probabilidad, motivado desde el ánimo de lucro –; y sin tener que aspirar a convertirse ni en una ONG ni en una agencia gubernamental... El reto, pues, habida cuenta de la magnitud de los problemas que nos va a tocar tratar de resolver entre todos, estará en aprender a colaborar unos con otros, en aras de un objetivo común... Haciéndolo, las empresas, sin dejar de ser empresas, ni sin tener que prescindir del ánimo de lucro y de la voluntad de obtener el mayor beneficio posible – no sólo económico, cierto es, puesto que también cabe implicarse en el incremento del capital social y por la preservación del ecológico; pero tampoco sin él.

¿Será ello posible? Algunos negarán la mayor; otros sonreirán con un escepticismo fronterizo al cinismo; otro, incluso, acabarán pensando que “¡tal vez!”... En todo caso, lo que sí parece claro es que el empeño no habrá de resultar sencillo ni que se vaya a conseguir con poco esfuerzo.

La pregunta ética es y será siempre la misma que ya Kant nos había formulado hace casi dos siglos y medio. Era la segunda en la nómina de aquellas tres que, según su criterio, constituirían el programa concreto de la tarea intelectual que la Filosofía habría de llevar a cabo. Aunque parezca que no quepa formularla con mayor laconismo, ni con exactitud más afinada, – pues, ciertamente, el “Was soll Ich tun?”; ¿Qué debo hacer?, no es fácil mejorarlo –; sin embargo, siempre es pensable alguna variación sobre el tema que, tal vez, pueda darnos intuiciones novedosas o pistas innovadoras de cara a la acción. Se podría, por ejemplo, experimentar con una suerte de modulación en el tono de la pregunta. Así, con una inflexión mínima, se estaría abriendo el campo teórico, y dando con ello, tal vez, cauce a nuevos proyectos o, en todo caso, voz a subrayados algo distintos de los habituales.

Eso es lo que ocurre cuando, en vez de redactar la pregunta en singular, lo hacemos en plural; o si a un verbo – como el verbo deber – de tan honda raíz moral y jurídica, lo sustituimos por otro, algo menos taxativo y rotundo, tal como, por ejemplo, el verbo poder, entendido en el más neutro sentido de posibilidad con la que ensayar nuevos enfoques y experimentos en forma de proyectos innovadores.

La venerable formulación de la segunda pregunta kantiana podría entonces conocer una redacción complementaria, quizás, en términos parecidos a los siguientes: ¿Qué debemos hacer? O, incluso: ¿Qué *podemos hacer* (juntos, entre todos)?

Como se observa, la tarea, así planteada, de un lado, se entiende compartida y compartible; y esto ya marca una diferencia en el diseño del abordaje. De otra parte, queda implícito el hecho de que la manera de acometer aquella labor requerirá la exploración de caminos para los cuales no hay un itinerario único, ni fijado a priori de manera rígida. Al contrario, seguro que

somos capaces, entre todos, de encontrar vías inéditas y propuestas insólitas que, con esfuerzo y algo de suerte, podrían acabar redundando en una mejora del entorno, de las circunstancias y de los contextos en los que emerge, se despliega y se desarrolla la vida humana.

En todo caso, lo cierto es que la agenda parece clara. Agenda es el nominativo neutro plural del participio – *agendus-a-um* – del verbo *ago-is-ere-agi-actum*, que, en español, se vertería por “las cosas que deben ser hechas”; o, de manera más inmediata, por: “lo que hay que hacer”.

¿Y qué es lo que hay que hacer?

Son muchos los estudios que nos vienen advirtiendo desde hace tiempo acerca de cuáles debieran ser las tareas que habríamos de acometer como humanidad. Naturalmente, siempre y cuando decidamos que merece la pena apostar por el Bien Común para así seguir disfrutando en el futuro de un planeta habitable; siempre que convengamos en que es necesario diseñar y poner en funcionamiento unas condiciones sociales objetivas que posibiliten y favorezcan el desarrollo de toda la persona y de todas las personas; y con tal de que estemos orientados hacia la consecución de un desarrollo económico que, de una parte, genere riqueza de manera eficiente y sostenible; y que, por otro lado, la distribuya, axiológicamente, de forma suficiente y equitativa entre todos los pueblos.

La envergadura de los problemas a los que aludimos es formidable y no nos queda otra sino agruparnos y ponernos a colaborar – *cum-laborare*: esto es, a trabajar juntos... ¿Quiénes?: Como decíamos párrafos atrás, ¡todos juntos y en unión!... Porque no se trata ya solamente de que, para acometer la resolución de los graves problemas que nos rodean debamos arrimar el hombro todos – ciudadanos particulares, administraciones públicas, instituciones de la sociedad civil; y, por supuesto, empresas... –; sino que, además – también quedó ya dicho más arriba – deberíamos entrenarnos en hacerlo de manera innovadora y colaborativa. Para ello, podría ser una buena pista ensayar variaciones sobre el tema y buscar compañeros de viaje poco habituales. Tal vez acabaríamos sorprendiéndonos y encontrando nuevas perspectivas.

La necesaria colaboración público-privada, en este período histórico, resulta mucho más prometedora que la consigna contraria. Porque, en los tiempos que corren, ya no nos sirve con acopiar más de lo mismo, en cantidad... Lo que se necesita es otra cosa, algo nuevo, un salto cualitativo que dé lugar a formas más adecuadas de afrontar los problemas. O sea, unos odres nuevos para un vino nuevo...

Para ello, la estrategia mejor que a nuestro alcance se ofrece va en la línea de la búsqueda de sinergias – sin ergon, del griego: una vez más, colaborar –: y éstas sólo afloran si se juntan, si nos juntamos en alianzas estratégicas y nos decidimos a trabajar unidos gentes e instituciones de diversos niveles, sectores y rangos.

El ODS número 17, por ello, está muy bien traído. Aunque no goce del relumbrón y la prestancia con que algunos otros de sus compañeros están adornados, no cabe duda de que, con el último de los objetivos – pero no por ello el menos importante –, se está trazando la vía más adecuada para el avance hacia la construcción de un mundo mejor, una sociedad más justa, una economía responsable y un entorno ecológico sostenible.

Madrid, marzo de 2021

Prólogo II

Nora Gorrochategui

Doctora en Administración, Facultad de Ciencias Económicas
Universidad de Buenos Aires(UBA)

Los trabajos que configuran este libro son, en primer lugar, el resultado de los esfuerzos, la dedicación y los análisis de cada uno de los autores. Ellos han atravesado el proceso de creación intelectual que Gabriel García Marquez solía calificarlo, como el más misterioso y solitario de los oficios humanos. Sin embargo, el producto final, el libro, es el fruto de la acción mancomunada y sostenida en el tiempo de la comunidad epistémica, que comparte su interés común por la responsabilidad social y el desarrollo sostenible. Esta comunidad se nutre de los lazos personales de amistad académica entre especialistas de Portugal, España y América Latina, que en esta oportunidad, ha encontrado su punto de encuentro en el CRIARS 4º Congresso Ibero-Americano de Responsabilidade Social, realizado en el marco de la Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), en Criciúma/SC, Brasil.

El libro desde su título pone de manifiesto la relación entre la Responsabilidad Social (RS) y los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). Tema de preocupación global con especificidades locales de Brasil, situación ésta que constituye el planteo general de cada uno de los estudios que conforman el texto.

El libro se abre con una evolución de las ideas y el señalamiento de hitos internacionales que ayudan a comprender las claves de los principios y los procesos que han tenido incidencia en la transformación de las modalidades de gestión de las organizaciones, desde la incorporación de la responsabilidad social hasta la exigencia mayor de contribuir al logro de niveles de desarrollo sostenible. Esto ayuda a explicar las decisiones sobre los tipos de gestión que han prevalecido en contextos determinados y, si bien, no muestra las causas de

los problemas actuales, contribuye a comprender la complejidad creciente de las situaciones que atraviesan las organizaciones, especialmente las empresas.

Queda planteada la necesidad de un cambio paradigmático de la gestión de las organizaciones, de tal modo que la responsabilidad social sea “[...] un instrumento para alcanzar mayores niveles de desarrollo sostenible a nivel global”. Esta afirmación deja en claro que la relación conceptual entre responsabilidad y desarrollo sostenible está en pleno desarrollo y que continuará el proceso de adaptación de ideas y procedimientos a cada época, con características específicas que abren posibilidades a la creación de iniciativas en cada contexto.

En la primera parte del libro se presentan estudios de casos de Brasil, en los que se destaca su relación con los objetivos del desarrollo sostenible.

Uno de ellos, trata una inundación, limitada en tiempo y lugar, en Tubarão-SC una localidad de Criciúma, Brasil, ocurrida en 1974. El trabajo ahonda en la reflexión sobre si es un desastre natural o si es ocasionado por la acción humana. Expone los planteamientos centrales que se encuentran en el ODS 11. “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles [...]” (NACIONES UNIDAS, 2015, p. 16) y aún más específicamente, con la meta 11.5 que tiende a

[...] reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad. (NACIONES UNIDAS, 2015, p. 25).

Quedan planteados dos interrogantes. Uno, si la memoria colectiva sobre las consecuencias negativas de los desastres logran modificar la conducta de la población para el traslado a zonas más seguras. El otro, si las acciones

preventivas en materia de obras públicas serán suficientes para mitigar los impactos de un nuevo desastre, que los avances científicos ya están en condiciones de anunciar su ocurrencia.

Un segundo caso, parte de la afirmación de que “[...] las políticas públicas (en Brasil) orientadas a promover el desarrollo humano y garantizar la ciudadanía plena de las personas a través de la educación se articulan con las orientaciones de los organismos internacionales [...]” en la materia. Esto tiene relación directa con el ODS 4. “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” (NACIONES UNIDAS, 2015, p. 16). A partir de allí, se exponen diversos programas, unos relacionados con metas específicas del objetivo sobre la educación, así como de éste con otros que revelan el carácter integrado e indivisible de los ODS. Por ejemplo, el “Programa de Gestión Educativa” orientado a brindar apoyo técnico para la elaboración de lineamientos e instrumentos para la ejecución e implementación de metas, así como para la construcción de instrumentos para la elaboración de planes de acción y diagnósticos de la situación educativa a nivel nacional, estatal y municipal. El “Programa Educación para la calidad” tiene vinculación con la meta: 4.1. y 4.2 relativas a asegurar a niñas y niños la enseñanza gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. El “Programa de Educación Inclusiva” tiene como objetivo desarrollar mecanismos en alianza con los distintos actores que conforman la educación para combatir las desigualdades sociales, étnicas y económicas, quedando claramente expresada su relación con el ODS 17.17. “Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas” (NACIONES UNIDAS, 2015, p. 31). El Programa “Educación en Salud y Bienestar” tiende a lograr cooperación entre dos campos de acción, educación y salud, ayudando a desarrollar acciones que promuevan el acceso al conocimiento en salud en los espacios escolares y también de manera informal. Claramente, el ODS 3, Garantizar vida sana y el ODS 4. Garantizar educación para todos quedan enlazados en este programa. Por último, El “Programa Educación para el

Desarrollo Sostenible” que se propone generar cambios de comportamiento en términos de sostenibilidad social, económica y ambiental, está explícitamente vinculado a la Agenda 2030.

El alineamiento de las políticas públicas con las orientaciones internacionales, la coordinación y transversalidad de la acción gubernamental y la concientización sobre la problemática del Desarrollo Sostenible demuestran la acción gubernamental transformadora aunque queda pendiente la ponderación de su contribución.

El tercer caso expone, en el contexto de la democracia electrónica y la legitimación de las políticas públicas, los mecanismos de participación popular a través de medios electrónicos existentes en la formulación de políticas públicas en tres municipios. Se afirma que “[...] la participación popular electrónica en el ciclo de las políticas públicas está relacionada con los ODS [...] ya que la interacción popular, la transparencia de la información pública, la apertura de canales de comunicación y participación, contribuyen a la construcción de instituciones efectivas, responsables e inclusivas en todos los niveles (ODS 16), alcanzando, entre otros puntos fijos, la garantía de una toma de decisiones receptiva, inclusiva, participativa y representativa en todos los niveles (16.7); ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza global (16.8) y garantizar el acceso público a la información (16.10)”.

Este caso se encuadra en una reflexión más amplia, vinculada a la crisis de la democracia, en el que la participación popular y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), colocan en agenda la participación directa de la ciudadanía en los asuntos públicos, interrogándose acerca de si esa interrelación dará lugar al surgimiento de una modalidad de democracia digital.

El último caso de esta parte, plantea un problema puntual a nivel micro, con repercusiones sociales, tal como es la finalización de la relación conyugal, en cuanto al cambio de identidad, en especial en las mujeres en relación con sus familias y su medio social. Se proponen prácticas colaborativas como un método adecuado en la transformación de conflictos, con características no

antagónicas e interdisciplinarias, que involucran, además de abogados, el trabajo conjunto de profesionales de la salud, tal como, psicólogos o psiquiatras, y de las áreas de economía, administración, finanzas y/o contabilidad. Esta situación se vincula con el ODS 5. “Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas [...]” (NACIONES UNIDAS, 2015, p. 16) y con la meta 5.c “Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles” (NACIONES UNIDAS, 2015, p. 21). En cuanto a las prácticas colaborativas, están vinculadas, en sentido lato, al trabajo en alianza expresado en el ODS 17.

La experiencia abre el debate sobre si la forma de operación en niveles micro, como por ejemplo en la familia, que tienden a resolver problemáticas que afectan a la vida cotidiana de las personas, producen efectos suficientes para producir transformaciones sociales para generar sociedades más pacíficas, libres de temor y violencia.

La segunda parte del libro se dedica a la exposición de cómo se operacionaliza la responsabilidad social en las organizaciones, dedicándose tres capítulos a la experiencia de empresas y uno, a la universidad.

El primer estudio, sobre la empresa Natura versa sobre los principios del gobierno corporativo que orientan la gestión empresarial, en las clásicas dimensiones económico-financieras, social y ambiental. El caso es presentado desde una perspectiva diacrónica, analizando la forma cómo ha ido incorporando diversos instrumentos de gestión responsable, en aspectos vinculados a la ética en los negocios, la transparencia y rendición de cuentas, así como la integración de programas que atienden las necesidades sociales de la comunidad en la que operan. Se destaca que la empresa también invierte en innovación para minimizar los impactos negativos de sus acciones sobre el medio ambiente, llevando adelante programas que mejoran la conservación de la biodiversidad amazónica y reducen la emisión de gases de efecto invernadero. Esto ha generado para la empresa el reconocimiento de una sólida reputación que ha incidido en múltiples reconocimientos a la gestión sustentable y en asociaciones comerciales que han permitido su expansión.

Es un ejemplo, que podría ser tomado como referencia internacional de la correlación entre la aplicación de políticas de responsabilidad social orientadas al desarrollo sustentable y el rendimiento económico, tema de debate académico no resuelto integralmente.

El segundo estudio analiza la información sobre las prácticas sociales que suministran las empresas distribuidoras de electricidad del sur de Brasil. Así, pone en el tapete el análisis de los informes de sustentabilidad, que son tema de preocupación académica, por constituirse en fuente estratégica de datos para la realización de investigaciones. Se revisan las argumentaciones dominantes en la literatura especializada sobre las motivaciones de las empresas para implementarlas, la naturaleza de su contenido y los canales de divulgación. La conclusión del estudio es el mimetismo institucional que se registra entre los informes de sustentabilidad que presentan las empresas del sector analizadas.

Algunas investigaciones académicas sobre empresas del sector eléctrico en otras zonas de Brasil llegan a conclusiones similares. Esto lleva a interrogarse sobre la influencia que ejercen los suplementos específicos diseñados por iniciativas internacionales, sobre la forma en que las empresas informan sobre la responsabilidad social. El Global Reporting Initiative (GRI), ha desarrollado un suplemento para el sector eléctrico, que data de 2011. En el lapso de diez años, el suplemento del sector eléctrico parece haber logrado homogenizar la forma de presentación de los informes de las empresas, en cuanto a su materialidad y exhaustividad posibilitando la comparabilidad. Queda aún un interrogante sobre si los informes del sector eléctrico dan cuenta de los avances en el logro del ODS 7, que tiende a garantizar el acceso a la energía, la mejora de la eficiencia energética y la transición hacia fuentes de energía renovables.

El tercer estudio analiza las prácticas y acciones sociales y ambientales de las empresas de carbón en el sur de Santa Catarina (SC) y Rio Grande do Sul (RS). El tema es significativo, puesto que “en los municipios donde opera, la minería del carbón, considerada una actividad económica importante en la matriz energética brasileña, contribuye al desarrollo socioeconómico”. El estudio concluye que las acciones desarrolladas por las empresas tienen un carácter filantrópico, orientadas en primer lugar, a lograr el bienestar de los

empleados y su familia, y luego, al desarrollo de la comunidad donde se insertan las unidades productivas. Se señala que el nivel de compromiso de la empresa con la comunidad se limita más a la disponibilidad de recursos de la empresa que a las necesidades de la comunidad.

Esto lleva a la reflexión sobre diversos asuntos. Uno, el hecho de que existe una relación de recurso dependencia, entre la empresa y la comunidad pequeña, cuya principal fuente de trabajo se deriva de la actividad controversial como la extracción del carbón.

Esta relación de dependencia mutua, explicaría parcialmente, el dominio de acciones en la dimensión social, de carácter más filantrópico, centradas en el primer nivel de responsabilidad de la empresa, o sea los empleados y sus familias. La limitación de recursos de las empresas, también podría aportar elementos para la comprensión de las razones por las que se subordinan las necesidades de la comunidad a la disponibilidad de recursos de las empresas.

El debate que subyace es cómo implementar la responsabilidad social en una actividad controversial. La peligrosidad de la minería y el impacto ambiental que produce sigue siendo un tema no resuelto en comunidades pequeñas, cuya fuente principal de subsistencia, la extracción del carbón, sigue siendo rentable pero nociva. El desafío está en resolver, por un lado, la matriz económica de esas poblaciones y, por otro lado, en la sustitución de la actividad económica de producción de energía renovable, por no renovable. Estos procesos de transición son graduales y aunque la tendencia es a limitar la actividad de empresas carboníferas, existen ejemplos muy actuales, tal como el de la reserva de carbón en el noroeste de Australia, que demuestran su vigencia y dan cuenta de la tensión entre logro de la rentabilidad hoy versus cambio climático, en un momento en el futuro.

El último caso, dedicado al análisis de la responsabilidad social universitaria (RSU) en Brasil resulta particularmente interesante por el contenido informativo y el análisis crítico. Se señala que, a partir de 2004, un factor de la rápida difusión de la RSU es que ha sido considerada un parámetro de la evaluación de la calidad institucional en las funciones de docencia, investiga-

ción y extensión, dentro del Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Superior (SINAES). Las universidades adoptaron, en principio, el modelo de RSU de la Universidad de Coimbra, que tal vez no ha resultado totalmente adaptado a las condiciones de las universidades de Brasil, manifestándose una brecha entre la aspiración y la realidad, respecto a la consolidación del conocimiento y el fortalecimiento de su función social de las universidades.

Si bien se ha dado un profundo proceso de acceso y democratización de la enseñanza universitaria todavía falta la promoción del conocimiento “en el lugar”, el aprendizaje “[...] como forma de ejercitar las habilidades técnicas adecuadas para la realización de acciones sociales que apunten a un fortalecimiento de prácticas socialmente responsables”.

El trabajo plantea una reflexión sobre dos temas centrales. Uno, la importancia de incorporar, desde lo institucional, la temática del desarrollo sustentable y la responsabilidad social como criterio de evaluación de su calidad de las universidades. El otro, la necesidad de generar conocimientos adaptados a la realidad latinoamericana y local sobre prácticas sustentables y responsables.

Pondero el valor del libro a partir de repensar ejes del debate global sobre la implementación del desarrollo sostenible y la operacionalización de la responsabilidad social, a partir de análisis basados en la realidad y capacidades locales, teniendo en cuenta las políticas y las prioridades de Brasil, todo lo cual está en armonía con las intencionalidades de la Agenda 2030. Para la academia, pensar los desafíos globales en clave local, es un modelo digno de emular, que seguramente alumbrará el camino de los cambios posibles, para lograr sociedades más sustentables en América Latina.

Buenos Aires, Marzo 2021

REFERÊNCIA

NACIONES UNIDAS. **Transformar nuestro mundo:** la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Res.70/1. Distrito General, 21 oct. 2015. 40 p. Disponible: https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares70d1_es.pdf. Acceso en: mar. 2021.

SUMÁRIO

Capítulo 1	...25
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS ORGANIZAÇÕES <i>(Caroline da Graça Jacques, Dimas de Oliveira Estevam, Maria João Santos e Fernando Miguel Seabra)</i>	
I PARTE	...44
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	
Capítulo 2	...45
A ENCHENTE DE 1974 EM TUBARÃO, SC: A CONSTRUÇÃO DE UM DESASTRE NATURAL <i>(Maicon Marques Frasson)</i>	
Capítulo 3	...61
O COMPASSO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO BRASILEIRO COM OS DOCUMENTOS INTERNACIONAIS DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS <i>(Arnaldo Fabiano Fenner e Reginaldo de Souza Vieira)</i>	
Capítulo 4	...77
MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA ETAPA DE FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO CONTEXTO DA DEMOCRACIA ELETRÔNICA <i>(André Afonso Tavares e Reginaldo de Souza Vieira)</i>	

Capítulo 5	...96
RECONSTRUÇÕES FEMININAS PÓS-SOLVÊNCIA CONJUGAL: NA PERSPECTIVA DAS PRÁTICAS COLABORATIVAS	
<i>(Jamile Garcia De Lucca, Ana Paula Costa e Camila de Bona)</i>	
II PARTE	...114
Responsabilidade Social das Organizações	
Capítulo 6	...115
SUSTENTABILIDADE E GOVERNANÇA CORPORATIVA: CONTRIBUIÇÃO DO <i>TRIPLE BOTTOM LINE</i> PARA GERAR LEGITIMIDADE, O CASO DA EMPRESA NATURA COSMÉTICOS S.A.	
<i>(Mayara Pereira de Souza e Samuel Henrique Colombo da Luz)</i>	
Capítulo 7	...132
PRÁTICAS SOCIAIS NAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIÃO SUL DO BRASIL	
<i>(Sérgio Mendonça da Silva e Sílvio Parodi Oliveira Camilo)</i>	
Capítulo 8	...149
PRÁTICAS E AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DE EMPRESAS CARBONÍFERAS	
<i>(Eduardo Netto Zanette e Sílvio Parodi Oliveira Camilo)</i>	
Capítulo 9	...167
RESPONSABILIDADE SOCIAL UNIVERSITÁRIA NO BRASIL: PERSPECTIVAS PARA O SÉCULO XXI	
<i>(Fernando Locks Machado e Kelly Gianezini)</i>	
SOBRE OS(AS) AUTORES(AS)	...182

Capítulo 1

Desenvolvimento Sustentável e Responsabilidade Social das Organizações

DOI: <http://dx.doi.org/10.18616/respon01>

Caroline da Graça Jacques

Dimas de Oliveira Estevam

Maria João Santos

Fernando Miguel Seabra

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: CRONOLOGIA DO CONCEITO

Do Clube de Roma à Agenda 2030

Com o advento da técnica e da ciência, a modernidade traz consigo a sociedade industrial, alicerçada, por um lado, no crescimento econômico ininterrupto e, por outro, na promessa de que o desenvolvimento é sinônimo de bem-estar e progresso. De fato, o projeto iluminista associado à Revolução Científica dos Séculos XVII e XVIII elegeu o pensamento racional, o empirismo e o empreendimento intelectual como as bases de uma civilização esclarecida. O antropocentrismo gerou o sentimento de superioridade e alterou profundamente a relação homem e natureza. Assim, a modernidade e a sociedade industrial inauguraram um projeto de conhecimento e controle sobre o ambiente natural sem precedentes. De fato, “[...] uma das consequências do aumento do ritmo de desenvolvimento industrial e tecnológico tem sido o aumento constante da intervenção humana sobre a natureza” (GIDDENS,

Voltar ao Sumário

2001, p. 67). Pode-se afirmar que a própria estrutura de nossas sociedades contemporâneas está diretamente relacionada à exploração natural: mineração, rodovias, indústrias, urbanização, matrizes energéticas e projetos agrícolas de larga dimensão são apenas alguns exemplos de como o homem impacta o meio ambiente. Portanto, nas palavras do sociólogo: “[...] o resultado coletivo de tais processos tem sido o início de uma destruição ambiental generalizada, cuja causa específica não é conhecida e cujas consequências são igualmente difíceis de calcular” (GIDDENS, 2001, p. 66).

Nesse sentido, é a partir de 1960 que as consequências do modelo econômico e de desenvolvimento orientado por uma racionalidade estritamente econômica passam a ser problematizadas. O paradigma econômico, até então vigente, fundamentou-se com base no investimento de capital financeiro e exploração de recursos naturais. Naquele momento, não havia considerações explícitas em relação à degradação natural, à poluição, ao aquecimento global ou aos desequilíbrios ambientais. Contudo, esse modelo ou paradigma centrado na exploração dos recursos naturais, tal como se fossem infinitos, esgotou-se. Assim, no final da década de 1960, os habitantes dos países europeus industrializados começaram a se preocupar com o impacto negativo dos avanços tecnológicos: chuva ácida, rios poluídos e poluição atmosférica são exemplos dos primeiros sinais da crise ambiental nas grandes cidades europeias. Por outro lado, a sociedade civil passou a se mobilizar e a se organizar para protestar, exigindo controle da poluição, preservação ambiental e maior atenção quanto à natureza. O surgimento de Organizações Não Governamentais (ONGs) relacionadas ao movimento ambiental estava diretamente ligado ao aumento da conscientização sobre os problemas ambientais.

O movimento ambientalista problematiza e questiona o impacto destrutivo da ação do homem, da sociedade e da economia na natureza. O chamado movimento verde declara que as catástrofes ambientais são resultado das intervenções da conduta humana sobre o ambiente natural. Para os ambientalistas, há evidências científicas, políticas e sociais suficientes que demonstram que o modelo econômico não pode seguir sem causar danos diretos ao ser

humano, à fauna, à flora e ao próprio futuro da civilização. Portanto, a reflexão e a ação política em busca por um novo modelo econômico e cultural foram imprescindíveis. Leff (2001 *apud* RECH, 2017) destaca que a crise ambiental promoveu o surgimento, na esfera da política, de novos atores e movimentos sociais que, organizados de forma autônoma em relação aos Estados, com estruturas não hierárquicas, descentralizados e participativos, trazem consigo uma nova cultura política democrática, novos valores e novas perspectivas de ação e de protestos.

Diante do novo cenário social e político marcado pela ampliação dos debates, sobretudo no continente europeu, sobre a urgência da preservação ambiental, algumas mudanças são propostas. No ano de 1972, dois eventos importantes marcaram as discussões sobre a política de desenvolvimento. Em primeiro lugar, a publicação da obra “Os limites do crescimento”, do chamado Clube de Roma e, em segundo lugar, a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano (Estocolmo). Para os pesquisadores do Clube de Roma, o crescimento populacional e a utilização dos recursos naturais necessitavam de mudanças radicais, uma vez que o crescimento indefinido não poderia ser sustentado por recursos finitos (MCCORMICK, 1992). A Conferência de Estocolmo, por sua vez, foi o primeiro fórum internacional de discussão e debates entre países desenvolvidos e em desenvolvimento e entre diferentes grupos de interesses. Na ocasião, o debate se concentrou em um programa de contenção e prevenção da poluição ambiental industrial, em um contexto de equilíbrio de prioridades entre desenvolvimento econômico e proteção do ambiente natural. Como resultado da Conferência de Estocolmo, como ficou conhecida, criou-se o Programa das Nações Unidas para o Ambiente e Desenvolvimento, cujo objetivo é tratar exclusivamente das questões relativas à gestão ambiental.

Em seguida, como resultado do trabalho da Comissão Mundial da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (UNCED), em 1987, na cidade de Estocolmo, aconteceu a divulgação do Relatório Brundtlandt. Nesse importante documento, evidencia-se um conjunto de diretrizes e medidas que devem ser observadas em ní-

vel mundial para a promoção de um modelo sustentável de desenvolvimento (BRUSEKE, 1995). O Relatório Brundtland, também conhecido como “Nosso Futuro Comum”, apresenta o conceito de Desenvolvimento Sustentável (DS). Inspirado no conceito de ecodesenvolvimento, o DS problematiza a visão economicista de desenvolvimento: o primeiro questionamento colocado é, então, o da visão compartimentada ou unilateral dos processos sociais, privilegiando ora um enfoque, ora outro, dependendo do analista. O foco da crítica se localiza especialmente no economicismo presente nas análises e nas políticas de desenvolvimento postas em ação em decorrência dessa ótica. Surge, então, a proposição de uma visão holística. Encarar o conjunto dos aspectos econômicos, políticos, culturais, sociais, ambientais... E, em uma abordagem sistêmica, analisar como as várias dimensões se interpenetram e interdependem (MONTIBELLER FILHO, 1993).

Assim, a noção de desenvolvimento sustentável tem como objetivo primordial criticar o modelo econômico vigente e propor uma nova concepção. Para o documento, a expressão desenvolvimento sustentável significa: “[...] um desenvolvimento que responda às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras para satisfazer suas próprias necessidades” (BRUNDTLAND, 1991, p. 2). Nesse sentido, o documento destaca o paradoxo entre a noção de DS e os padrões de produção e consumo dos países industrializados ao evidenciar a necessidade de uma nova relação entre o meio natural e a ação humana. Para Brunacci e Philippi Júnior (2005, p. 258), o principal objetivo das discussões da UNCED “[...] estava centrado na defesa do meio ambiente humano, no bojo de um problema global mais amplo: os ditames do modelo de desenvolvimento econômico dos países do Primeiro Mundo”, os quais, em determinado estágio da sua industrialização, viram-se na perspectiva da escassez dos recursos naturais, surpreendendo-se diante das limitações do meio ambiente no que dizia respeito à destinação final dos rejeitos – sólidos, líquidos e gasosos – tanto do processo industrial quanto dos hábitos de consumo da população. Portanto podemos afirmar que a emergência do debate sobre a crise ambiental tem como pano de fundo a crítica às consequências do modelo de industrialização de cunho predatório

dos países de capitalismo avançado. Contudo, com o passar dos anos e com o acirramento da crise ambiental em nível mundial, uma nova tomada de ação passa a ser exigida de todos os países.

Em 1989, foi criado o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, em inglês), composto por três grupos de trabalho aplicados na avaliação científica das mudanças climáticas, nos impactos ambientais e socioeconômicos e nas estratégias de resposta, antecipando os diferentes desafios a serem enfrentados pela população mundial no início da última década do milênio.

Contudo, em 1992, vinte anos após a Conferência em Estocolmo, ocorreu a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento na cidade do Rio de Janeiro. Na reunião, que ficou conhecida como Eco 92, ou, ainda, Cimeira da Terra, a comunidade política internacional admitiu que era urgente conciliar o desenvolvimento social e econômico com a utilização dos recursos naturais. Na Conferência da Eco 92, 179 países participantes acordaram e assinaram o documento denominado Agenda 21 Global. O texto, composto por 40 capítulos, foi, de fato, um programa de ações para desenvolver, em escala global, o desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, o desenvolvimento sustentável passou a ser percebido como um modelo de construção de sociedades capazes de conciliar métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. De fato, foi com a Cimeira da Terra que se estabeleceu definitivamente o conceito de DS das sociedades humanas.

Com a preocupação de que o conceito não passasse de uma mera formalidade sem aplicação prática, a Assembleia Geral das Nações Unidas solicitou ao Conselho Econômico e Social na ocasião da 47ª reunião, em janeiro de 1993, a criação de uma comissão de Alto Nível para o Desenvolvimento Sustentável. Nesse sentido, tal grupo teria como missão assegurar o acompanhamento da Conferência da Cimeira do Rio assim como promover a cooperação internacional para a integração das questões ambientais e o desenvolvimento em nível global. A resolução, composta por 34 pontos, reforça a necessidade do empenho de todos os países-membros em manter sob controle a implementação da Agenda 21, reconhecendo que se trata de um programa dinâmico que pode evoluir ao longo do tempo e tendo em conta o acordo para a revisão da Agenda 21 em 1997.

No ano de 2002, trinta anos após a Conferência de Estocolmo e dez anos após a Cimeira da Terra (Rio 92), ocorreu o alargamento das preocupações que deixaram se der estritamente restritas à poluição e à degradação ambiental para incorporar as questões relativas aos chamados pilares do desenvolvimento sustentável, nomeadamente, desenvolvimento econômico, social e proteção ambiental.

Após quase meio século desde as primeiras iniciativas de mobilização global em torno da noção de Desenvolvimento Sustentável, a ONU estabeleceu um programa de ação mundial denominado Metas do Desenvolvimento Sustentável, ou Metas 2030. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são o projeto para alcançar um futuro melhor e mais sustentável para todos. Eles abordam os desafios globais que enfrentamos, incluindo os relacionados à pobreza, à desigualdade, ao clima, à degradação ambiental, à prosperidade, à paz e à justiça. No ano de 2015, diferentes representantes governamentais dos países-membros da ONU se reuniram na cidade de Nova York. Nesse encontro, os líderes mundiais, dentre eles representantes do Brasil, estabeleceram um guia de ações com objetivos ambiciosos: erradicar a pobreza, proteger o meio ambiente e garantir que as pessoas alcancem a paz e a prosperidade. Para a ONU, os ODS são as diretrizes centrais que precisam ser incorporadas pelas políticas públicas estatais, mas também pelas organizações, empresas e famílias e pelos indivíduos em direção a uma sociedade mais justa, próspera e inclusiva. De fato, os ODS associam as dimensões social, ambiental e econômica das tomadas de decisão que tenham impactos, tanto no presente quanto no futuro.

Portanto, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável foram criados pela ONU como desdobramento do conceito de desenvolvimento sustentável, surgido a partir do Relatório Brundtland intitulado “Nosso Futuro em Comum” (CMMAD, 1988). Conforme o mesmo documento, o desenvolvimento deve ser algo planejado a fim de garantir as necessidades da geração presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras.

Conforme o relatório, a sobrevivência global estaria intrinsecamente relacionada ao desenvolvimento desigual, à pobreza e ao crescimento da po-

pulação. Esses temas gerariam grande impacto nos recursos naturais, e deveriam ser levados em conta os alarmes feitos por cientistas sobre o aquecimento global e a necessidade de ação (UN DOCUMENTS, 2018).

Naquela altura, já se percebia que para alcançar o desenvolvimento sustentável seria necessária a cooperação mundial, tendo em vista a interdependência política, econômica e social. Ao mesmo tempo, já se previa como imprescindível a alteração das tendências mundiais de consumo de matérias-primas para que as gerações futuras não fossem comprometidas nem tivessem sua sobrevivência ameaçada. A partir disso, concluiu-se pela necessidade de criação de um Programa sobre Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (UN DOCUMENTS, 2018).

Para a elaboração do referido programa, foram obtidas informações relevantes sobre os temas como saúde, educação, pobreza, meio ambiente, entre outros. Ainda durante a Cimeira da Terra, em 1992, estabeleceu-se a necessidade de criar indicadores para acompanhar se o mundo está mais sustentável. A partir disso, diversos modelos de indicadores foram criados, dentre os quais se destacam: os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O primeiro modelo, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), surgiu no ano 2000 como uma forma de operacionalizar os meios para se alcançar o desenvolvimento sustentável.

Com a operacionalização dos ODM, os resultados surtiram efeitos, ou seja, os níveis de pobreza extrema tiveram recuo, o número de pessoas subnutridas caiu pela metade, a taxa de alfabetização global teve crescimento e a taxa global de mortalidade infantil teve queda considerável (UNITED NATIONS, 2015).

Contudo, em que pese os avanços positivos dos ODM, ainda existem muitos obstáculos a serem superados. Pelos resultados alcançados, ficou evidenciado ser possível alcançar objetivos transnacionais com a mobilização e o compromisso global. Entretanto, foi percebida a necessidade de novas ações à medida que muitas pessoas continuavam em situação de pobreza, fome e vulnerabilidade. Por isso, novas metas e objetivos deveriam ser traçados a fim de caminhar para um mundo mais sustentável e igualitário (UNITED NATIONS, 2015).

Nesse sentido, em 2012, na Cúpula das Nações Unidas Rio+20, colocou-se a proposta de criação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e, no final da conferência, foi elaborado o documento “O Futuro que Nós Queremos”. De acordo com o então Secretário-Geral da ONU, esse documento final “[...] demonstra acordo sobre a criação de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um plano de dez anos para produção e consumo sustentáveis, a importância das questões de gênero, do direito à água e comida, além da urgência em se combater a pobreza” (NAÇÕES UNIDAS, 2012, p. 3).

O documento incluía a criação de um grupo de trabalho aberto, que teria como tarefa desenvolver um conjunto de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O grupo apresentou um primeiro rascunho dos ODS, em julho de 2014, o qual foi aprovado na 68ª sessão da Assembleia Geral da ONU. Em setembro de 2015, foi criada, então, a Agenda 2030, na qual foram instituídos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

A oficialização da Agenda ocorreu durante a Cúpula da ONU sobre o Desenvolvimento Sustentável, por meio do documento intitulado “Transformando Nosso Mundo: Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”. O modelo dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) é formado, portanto, por objetivos e metas elaborados pela ONU, em conjunto com países-membros e sociedade civil, com o intuito de levar o desenvolvimento e a dignidade humana para todas as Nações e todos os Povos do mundo até o ano de 2030 (NAÇÕES UNIDAS, 2018).

A Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) fazem parte da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), criada em 2015 para dar continuidade aos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM). Os ODM foram aprovados na 56ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas,

no ano de 2001, como desdobramento da Cúpula do Milênio, considerado um esforço da ONU no combate à pobreza mundial. A Agenda 2030 é composta por 17 objetivos e um total de 169 metas, que perpassam pelos mais diversos temas e áreas de interesse de forma interdependente, abordando assuntos transnacionais, desde a erradicação da pobreza e da fome até a proteção ambiental.

Os objetivos e as metas dos ODS envolvem áreas ou temas como erradicação da pobreza, segurança alimentar e agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, redução das desigualdades, energia, água e saneamento, padrões sustentáveis de produção e de consumo, clima, cidades sustentáveis, proteção e uso sustentável dos oceanos e dos ecossistemas terrestres, crescimento econômico inclusivo, infraestrutura e industrialização, governança e meios de implantação dessas políticas. Abaixo, a figura 1 apresenta os 17 temas dos ODS.

Quadro 1 - Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável



Fonte: Nações Unidas [Brasil] (2021). Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs> (2021).

A partir de tais objetivos e metas, os Estados nacionais firmaram compromissos de somarem iniciativas, com ou sem apoio internacional, com

o objetivo de melhorar as condições de vida de sua população. Nesse sentido, tais iniciativas buscam envolver a participação social, passando pelas diversas esferas governamentais (federal, estadual e municipal), incluindo atores não governamentais e privados. Dessa forma, a implementação dos ODS depende da governança em diversos níveis para a tomada de decisão, mas não se restringindo apenas aos governos nacionais, pois está dispersa entre os diversos atores subnacionais.

A Agenda 2030 busca a melhoria das condições de vida da população mundial e a dignidade humana por meio de compromissos assumidos pelos países-membros da ONU. De maneira audaciosa, a ONU colocou um prazo curto de 15 anos para alcançá-la, o que é considerado curto por se tratar de temas tão complexos e abrangentes como são os ODS. Devido à sua importância, foi necessário um movimento de adequação quanto às políticas dos atores subnacionais aos ODS por meio de ações que demonstram a indissociabilidade entre o tema desenvolvimento e os conceitos de sustentabilidade e direitos humanos (SEYFRIED, 2019).

Segundo as Nações Unidas (2018b), a Agenda 2030 é composta por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, associados a 169 metas e 303 indicadores. Os objetivos 1 a 6 cobrem temas levantados pela agenda dos ODM, e os objetivos 7 a 17 passaram a abordar novas temáticas. A Organização afirma que eles visam ao benefício de todos, com maior foco nos países menos desenvolvidos e mais vulneráveis, e contam com o engajamento de governos, setores privados, sociedade civil, atores nacionais e subnacionais.

Ademais, tal agenda pretende equilibrar os aspectos sociais, econômicos e ambientais em todos os níveis da sociedade humana, mediante a implementação e o acompanhamento das ações pelos Estados e atores subnacionais. Conforme o Network of Regional Governments for Sustainable Development – NRG4SD (2018, p. 1), a agenda reconhece que sua efetivação tão somente será possível com a capacitação dos governos regionais em sua potencialidade de contribuição e “[...] enfatiza a necessidade de inclusão dos governos regionais como parceiros fundamentais para os esforços nacionais

na implantação e revisão dos ODS”, pois reconhece que os governos subnacionais “[...] são diretamente responsáveis pelas ações necessárias para o alcance dos ODS, como a provisão de serviços básicos, como saúde, educação, água e saneamento [...]” (NRG4SD, 2018, p. 1), além do fato de serem mais eficientes ao adaptarem os objetivos almejados para as especificidades locais.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, por conseguinte, para alcançar o pleno desenvolvimento humano mundial, contam com o comprometimento dos Estados e a colaboração dos atores não governamentais e subnacionais. De fato, os governos locais e regionais estão na linha de frente no combate da maioria das questões abordadas pelos ODS em nosso trabalho diário. Infelizmente, segundo o Relatório Luz, organizado pelo Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030, em 2019, foi verificado um retrocesso na implementação dos ODS em nível nacional. Com maior incidência de violações e “[...] desrespeito aos direitos sociais, ambientais e econômicos em curso no Brasil” (GTSC A2030, 2019, n.p.).

Responsabilidade Social das Organizações e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

O termo Responsabilidade Social (RS) é compreendido, majoritariamente, como um instrumento de gestão empresarial; contudo, ele transcende as teorias organizacionais, políticas e sociológicas contemporâneas por provocar debates e mudanças culturais. A RS tem sido bastante disseminada nas organizações e na sociedade devido à sua capacidade mobilizadora, emergindo como um instrumento para se alcançar maiores níveis de desenvolvimento sustentável em nível global.

Segundo o Instituto Ethos (2021), a RS é uma forma de conduzir os negócios de tal maneira, que a torna parceira e corresponsável pelo desenvolvimento social. A empresa socialmente responsável é aquela que possui a capacidade de ouvir os interesses das diferentes partes (acionistas, funcionários,

prestadores de serviços, fornecedores, consumidores, comunidade, Governo e meio ambiente) e que consegue incorporá-los no planejamento de suas atividades, buscando atender às demandas de todos, não apenas as dos acionistas ou proprietários.

Segundo Ashley *et al.* (2002), responsabilidade social pode ser definida “como” o compromisso que uma organização deve ter para com a sociedade, expresso por meio de atos e atitudes que a afetem positivamente, ou com alguma comunidade, agindo pró-ativamente e coerentemente no que tange ao seu papel específico na sociedade e à sua prestação de contas para com ela, assumindo, assim, além das obrigações legais, obrigações morais. O termo é aplicado, muitas vezes, na tentativa de resgatar a solidariedade e a cidadania, como forma de se buscar a humanização do capitalismo. Nas últimas décadas, esse conceito tem sido revestido de valores morais e cívicos, associado a modelos e a termos antigos, como voluntariado e filantropia. No entanto, entre os teóricos de administração e estudiosos das mais distintas áreas, tem sido aplicado com uma roupagem mais empresarial, tentando se desvincular da identidade filantrópica. No artigo “Corporate Social Responsibility – Evolution of a Definitional Construct”, Carroll (1999) apresenta uma extensa revisão bibliográfica sobre a evolução do conceito. Nesse artigo, Carroll apresenta a publicação do livro “Social Responsibilities of the Businessman”, de Howard R. Bowen (1953), como o marco do início do período moderno do conceito.

Em termos institucionais, na Europa, o conceito de responsabilidade social das empresas sofreu um forte impulso com a publicação do documento “Livro Verde – Promover um quadro europeu para a responsabilidade social das empresas” (COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS, 2001). Nesse documento, a responsabilidade social das empresas foi definida como “[...] um conceito segundo o qual as empresas decidem, numa base voluntária, contribuir para uma sociedade mais justa e para um ambiente mais limpo” (COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS, 2001, p. 4). No entanto, o conceito sofreu nova evolução e, em 2011, com a publicação do documento “A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility”

(EUROPEAN COMMISSION, 2011), a RS surgiu definida como “[...] a responsabilidade das empresas pelos seus impactos na sociedade” (EUROPEAN COMMISSION, 2011, p. 6).

Apesar do contributo que a responsabilidade social das organizações (RSO) pode trazer para a sustentabilidade global, a realidade é que os seus efeitos têm sido evidenciados bastante limitados, e os resultados alcançados são ainda insuficientes. Independentemente dos diferentes entendimentos acerca do modo como as organizações devem exercer a sua responsabilidade social, o fato é que, atualmente, a RSO tem sido orientada para a resolução de problemas pontuais e não de problemas estruturantes. Além disso, frequentemente tem sido considerada um meio para a obtenção de vantagens competitivas: ganhos de imagem e reputação, motivação e retenção de talentos, minimização do risco, satisfação dos *stakeholders*, ecoeficiência, não raramente partindo do pressuposto de que as empresas podem “fazer o bem” enquanto, simultaneamente, beneficiam o seu próprio negócio. Os conceitos de *triple bottom line* e de *win-win* são um exemplo bem paradigmático dessa lógica argumentativa.

Entretanto, essa estratégia de atuação tem reduzido as ações de responsabilidade social a iniciativas voluntárias, fragmentadas, com baixo nível de comprometimento e nem sempre estrategicamente ligadas aos ODS, embora, mesmo assim, tenham permitido obter alguns benefícios em termos de sustentabilidade global. O fato de as políticas e práticas de RSO assumirem um carácter individualizado (resultante da estratégia que singularmente cada organização toma) limita a sua capacidade de ação e os seus efeitos reformadores globais.

Para que se possa alavancar os seus efeitos em nível macro e seja criado um círculo virtuoso entre competitividade econômica, coesão social e preservação ambiental, importa repensar profundamente a forma como a RS tem sido exercida. Essa alteração contempla pelo menos três dimensões essenciais. Uma primeira dimensão integra a necessidade de se encarar a RS em uma lógica de longo prazo. Significa atuar não em função de problemas conjunturais como a resposta a pressões da opinião pública, mas gerir estra-

tegiamente a sustentabilidade como suporte para a inovação de produtos e serviços mais sustentáveis. Iniciativas inovadoras de empresas de referência mundial têm demonstrado que atuar de forma proativa e em uma lógica de longo prazo na gestão da sustentabilidade conduz a fortes níveis de inovação interna e gera, simultaneamente, mudanças com grande impacto na sociedade. Nessa perspectiva, o que está em discussão não é o submetimento da lógica da responsabilidade social aos desígnios da estratégia empresarial no contexto do mercado. O que está em discussão é uma mudança mais profunda: a de alinhar a estratégia empresarial em função da procura de maiores níveis de sustentabilidade global, condição essencial para se promover um ciclo virtuoso entre competitividade e sustentabilidade integrada.

Uma segunda dimensão pressupõe também uma mudança de paradigma e a alteração na forma como consideramos a atividade empresarial. Nesse caso, importa deixar de pensar a atividade empresarial como estando centrada exclusivamente na criação de valor financeiro para passar a incorporar também a criação de valor social. Quando se refere que falta clareza para se olhar para a sustentabilidade de uma forma estratégica, acrescenta-se ainda que também falta a capacidade para se olhar para a empresa em uma perspectiva mais ampla, que incorpore, para além da criação de valor financeiro, a responsabilidade de criação de valor social.

Por último, importa, ainda, promover a ligação da RSO com os ODS. É justamente dentro de uma proposição mais ampla (meso e macro), em que a RSO está a serviço de um modelo de desenvolvimento pautado pela sustentabilidade, que se pode alavancar os seus impactos. Quando se refere à necessidade de articular a RSO com as metas do desenvolvimento sustentável, significa a necessidade de haver uma articulação entre o nível empresarial e as organizações da sociedade civil (empresas, governos, universidades, ONGs, entre outras instituições), em que cada qual, na sua esfera de atuação, possa desenvolver ações em conjunto, as quais tenham como foco o cumprimento dos ODS. Nessa perspectiva, parte-se do pressuposto de que uma intervenção mais ampla da RSO, orientada para os ODS, pode ser um dos caminhos para se ob-

ter maiores níveis de sustentabilidade global. Importa, no entanto, aprofundar este debate e refletir sobre a RSO como um instrumento para o cumprimento dos ODS, tendo como suporte a consolidação das redes *multistakeholders*, de base territorial, para otimizar práticas conjuntas voltadas para o desenvolvimento em uma perspectiva integrada e sustentável. Sem uma ligação da RSO com os ODS, as ações desencadeadas terão impactos muito limitados e as atividades tenderão a ficar restritas a um grupo restrito de empresas.

Decorridos 67 anos desde a publicação da obra, anteriormente referida, de Howard R. Bowen (1953), fica claro que o tema mantém a atualidade e suscita atenção, quer entre acadêmicos, quer entre instituições internacionais e comunidade empresarial. No entanto, precisa ser aprimorado para melhor responder aos desafios inscritos na Agenda 2030 e cumprir os objetivos nela determinados.

REFERÊNCIAS

ASHLEY, P. *et al.* (Coord.). **Ética e responsabilidade social nos negócios**. São Paulo: Saraiva, 2002.

BRUNACCI, A.; PHILIPPI JÚNIOR, A. Dimensão humana do desenvolvimento sustentável. *In*: PHILIPPI JÚNIOR, A.; PELICIONI, M. C. F. **Educação ambiental e sustentabilidade**. Barueri, SP: USP, 2005, p. 255- 283 (Coleção Ambiental, v. 3).

BRUNDTLAND, G. H. **Nosso Futuro Comum**: Relatório Brundtland. Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Rio de Janeiro: FGV, 1991.

BRUSEKE, F. J. O Problema do desenvolvimento sustentável. *In*: CAVALCANTI, C. (Org.). **Desenvolvimento e natureza**: estudos para uma sociedade sustentável. São Paulo: Cortez; Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 1995.

CARROLL, A. B. Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct. **Business & Society**, [s.l.], v. 38, n. 3, p. 268-295, 1999.

CARVALHO, P. G. M.; BARCELLOS, F. C. Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – ODM: Uma avaliação crítica. **Sustentabilidade em Debate**, Brasília, v. 5, n. 3, p. 222-244, set./dez. 2014. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/sust/article/view/15662/13985>. Acesso em: 10 nov. 2021.

COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS. **Livro Verde**: Promover um quadro europeu para a responsabilidade social das empresas. Bruxelas: COM, 2001.

COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO - CMMAD. **Nosso futuro comum**. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 1988.

EUROPEAN COMMISSION. **Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions**. Brussels: COM, 2011.

GARRIGA, E.; DOMÈNEC, M. Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory. **Journal of Business Ethics**, [s.l.], v. 53, n. 1/2, p. 51-71, 2004. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/25123282>. Acesso em: 13 dez. 2020.

GIDDENS, A. **Sociologia**. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001.

GTSC A2030. **Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030**. Disponível em: <https://gtagenda2030.org.br/agenda-pos-2015/>. Acesso em: 10 nov. 2021.

INSTITUTO ETHOS. **Indicadores Ethos**. Disponível em: <https://www.ethos.org.br/conteudo/indicadores/>. Acesso em: 10 nov. 2021.

MADORRAN, C.; GARCIA, T. Corporate Social Responsibility and Financial Performance: the Spanish case. **Rev. Adm. Empres.**, [s.l.], v. 56, n. 1, p. 20-28,

2016 [online]. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0034-759020160103>. Acesso em: 19 ago. 2019.

MALONI, M. J., BROWN, M. E. Corporate Social Responsibility in the Supply Chain: An Application in the Food Industry. **J. Bus Ethics**, [s.l.], v. 68, p. 35-52, 2006. Doi: <https://doi.org/10.1007/s10551-006-9038-0>.

MCCORMICK, J. **Rumo ao paraíso**: a história do movimento ambientalista. Tradução de Marcos Antônio Rocha e Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Relume Dumarã, 1992.

McWILLIAMS, A.; SIEGEL, D. Corporate social responsibility and financial performance: correlation or misspecification? **Strat. Mgmt. J.**, [s.l.], v. 21, p. 603-609, 2000. Disponível em: [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1097-0266\(200005\)21:5<603::AID-SMJ101>3.0.CO;2-3](https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(200005)21:5<603::AID-SMJ101>3.0.CO;2-3). Acesso em: 19 ago. 2019.

MONTIBELLER FILHO, G. Ecodesenvolvimento e desenvolvimento sustentável: conceitos e princípios. **Textos de Economia**, Florianópolis, v. 4, n. 1, p. 131-142, jan. 1993. Disponível em: <http://bit.ly/2m6QXC1>. Acesso em: 19 ago. 2019.

NAÇÕES UNIDAS [Brasil]. **Declaração final da Conferência das Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentável (Rio + 20)**. O futuro que queremos. Publicado em 2012. Disponível em: <https://riomais20sc.ufsc.br/files/2012/07/CNUDS-vers%C3%A3o-portugu%C3%AAs-COMIT%C3%8A-Pronto1.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2021.

NAÇÕES UNIDAS [Brasil]. **17 Objetivos para transformar nosso mundo**. Publicado em 2015. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/pos2015/>. Acesso em: 25 out. 2021.

NAÇÕES UNIDAS [Brasil]. **Objetivos de Desenvolvimento do Milênio**. Publicado em 2018. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/tema/odm/>. Acesso em: 25 out. 2021.

NAÇÕES UNIDAS [Brasil]. **Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável**. Publicado em 2018b. Disponível em: ht-

[tps://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/10/agenda2030-pt-br.pdf](https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/10/agenda2030-pt-br.pdf). Acesso em: 25 out. 2021.

NAÇÕES UNIDAS [Brasil]. **Sobre o nosso trabalho para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil**. Atualizado em 2021. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 25 out. 2021.

NETWORK OF REGIONAL GOVERNMENTS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT - NRG4SD. **SDGs at the Subnational Level: Regional Governments in the Voluntary National Reviews**. Publicado em 2018. Disponível em: <http://www.nrg4sd.org/wpcontent/uploads/2017/07/SDGsatSubnationalLevel.pdf>. Acesso em: 25 out. 2021.

ORLITZKY, M.; SCHMIDT, F. L.; RYNES, S. L. Corporate Social and Financial Performance: A Meta-Analysis. **Organization Studies**, [s.l.], v. 24, n. 3, p. 403-441, 2003. Doi:10.1177/0170840603024003910.

QUARSHIE, A.; SALMI, A.; LEUSCHNER, R. Sustainability and corporate social responsibility in supply chains: The state of research in supply chain management and business ethics journals. **Journal of Purchasing and Supply Management**, [s.l.], v. 22, n. 2, p. 82-97, 2016. Doi: 10.1016/j.pursup.2015.11.001.

RECH, M. J. **As raízes da crise ambiental: uma leitura a partir da dialética do esclarecimento**. 2017. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, RS, 2017.

ROBIN, D. P.; REIDENBACH, R. E. Social Responsibility, Ethics, and Marketing Strategy: Closing the Gap Between Concept and Application. **Journal of Marketing**, [s.l.], v. 51, n. 1, p. 44-58, 1987. Disponível em: www.jstor.org/stable/1251143. Acesso em: 13 dez. 2020.

SANCLEMENTE-TÉLLEZ, J. C. Marketing and Corporate Social Responsibility (CSR). Moving between broadening the concept of marketing and social factors as a marketing strategy. **Spanish Journal of Marketing - ESIC**, [s.l.], v. 21, Supplement 1, p. 4-25, jul. 2017. ISSN 2444-9695. Disponível

em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444969517300483>.
Acesso em: 13 dez. 2020.

SANDHU, H. S.; KAPOOR, S. Corporate Social Responsibility and Financial Performance: Exploring the Relationship. **Management and Labour Studies**, [s.l.], v. 30, n. 3, p. 211-223, 2005.

SEYFRIED, M. F. **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e Internacionalização de Uberlândia**. 2019. 33 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Relações Internacionais) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/27808/1/ObjetivoDesenvolvimentoSustentavel.pdf> . Acesso em: 13 dez. 2020.

UN DOCUMENTS. **Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future**. 2018. Disponível em: <http://www.un-documents.net/ourcommon-future.pdf>. Acesso em: 13 dez. 2020.

UN GLOBAL COMPACT. **Network Portugal**. 2020. Disponível em: <https://globalcompact.pt/>. Acesso em: 13 dez. 2020.

UNITED NATIONS. **Relatório sobre os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 2015**. New York, 2015. Disponível em: https://www.unric.org/pt/images/stories/2015/PDF/MDG2015_PT.pdf. Acesso em: 13 dez. 2020.

VOEGTLIN, C.; GREENWOOD, M. Corporate social responsibility and human resource management: A systematic review and conceptual analysis. **Human Resource Management Review**, [s.l.], v. 26, Issue 3, p. 181-197, 2016. ISSN 1053-4822. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2015.12.003>.

Parte I

Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável

Capítulo 2

A Enchente de 1974 em Tubarão, SC: A Construção de Um Desastre Natural

DOI: <http://dx.doi.org/10.18616/respon02>

Macon Marques Frasson

INTRODUÇÃO

Este capítulo aborda a enchente do rio Tubarão, ocorrida em março de 1974, na cidade de Tubarão, SC. A inundação não foi apenas uma enchente comum, de conotação local, mas um desastre conhecido internacionalmente. Em função de sua dimensão geográfica, da destruição que causou, das perdas materiais e humanas e de sua repercussão, ela acabou recebendo uma denominação própria, *A Enchente de 74*.

As chuvas, que acarretaram essa inundação em Tubarão, ocorreram entre os dias 22 e 25 de março de 1974, no município de Tubarão e em seus arredores, resultando na maior cheia já registrada na região. O episódio é lembrado, ainda hoje, como sinônimo de grande sofrimento, principalmente pelos moradores da cidade. A lembrança da inundação permite analisar também sua memória.

Como metodologia, buscou-se aplicar conceitos de História Ambiental e desastres. Nessa perspectiva, o ambiente no qual o ser humano se insere e relaciona-se, que, neste caso, é um ambiente urbano (ambiente cultural), também ganha foco. Buscou-se desmistificar aspectos já naturalizados por meio do discurso, da produção relativa à mídia impressa sobre o desastre e da memória pós-enchente. E, ainda, problematizar o descaso com o meio

Voltar ao Sumário

natural, o não confronto de interesses econômicos e políticos por parte de quem pensa a enchente e como evitá-la. Então, a História Ambiental se aplica na relação cultura/natureza e aborda temas como clima, áreas de preservação, impactos ambientais, desastres ambientais, meio ambiente, discurso, interesses políticos e econômicos, entre outros.

Desse modo, este estudo se torna relevante, uma vez que questiona, além do enquadramento de uma inundação como desastre natural, o próprio conceito do desastre. Os “desastres naturais” possuem fortes traços humanos em sua gênese, mas que são transformados em “desastres naturais” através do discurso ou de um método distorcido de qualificação. Essa distorção acaba amortizando a crítica sobre o modelo de desenvolvimento econômico existente da sociedade consumista contemporânea e sua organização, construindo, com isso, uma falsa sensação de inocência por parte da sociedade diante de um “desastre natural”.

A Pesquisa de Desastres e a *Enchente de 1974*

Quanto à pesquisa histórica de um desastre ambiental, ela proporciona várias alternativas diferentes em relação à perspectiva de análise. Devido à sua abrangência, pode-se fazê-la por meio de um foco histórico-econômico, através de uma ótica social, por meio da história do tempo presente, da história política, do ponto de vista da discussão de gênero, da micro-história, da história ambiental, entre outras.

Na área de História Ambiental, o foco está muito além de uma análise da natureza, acentuadamente nesta pesquisa, por ela analisar um fenômeno em um contexto urbano. Nesse caso, o foco se encontra voltado ao ambiente, natural ou não, em que o ser humano está e relaciona-se. De modo grosseiro, pesquisar o ser humano sem se preocupar com o meio no qual ele está inserido é como pintar um quadro sem se preocupar com o plano de fundo.

Segundo Drummond (1991, p. 195), “[...] a ‘nova historiografia’ tem sido incapaz de esclarecer exatamente os tipos de sociedade gerados pela ex-

ploração de um recurso natural ou de vários recursos simultaneamente, ou de vários recursos em sequência”. Nesse sentido, a História Ambiental veio ocupar essa lacuna existente na linha historiográfica, a lacuna ambiental.

A preocupação com o ambiente natural e a crítica ambiental e com a exploração da natureza já vêm de longa data no Brasil. A Carta Régia de 1542 veio a ser o primeiro documento oficial a regulamentar a exploração de bens naturais no Brasil. José Augusto Pádua (2004) também evidencia alguns episódios que remetem ainda ao período escravista brasileiro, mas sua obra está voltada às florestas e aos meios naturais ou rurais, margeando o foco urbano proposto aqui.

Já no campo historiográfico, a discussão ambiental brasileira ainda é relativamente recente (MARTINEZ, 2006). No início dos anos 90, ela chegou como um método de pesquisa “estrangeira” (DRUMMOND, 1991, p. 195) e logo foi ganhando espaço entre outras perspectivas históricas. José Augusto Drummond, considerado um dos pioneiros nessa perspectiva de análise no Brasil, traz, na virada das décadas de 1980 e 1990, a História Ambiental como uma possibilidade a ser explorada por historiadores brasileiros. No olhar de Drummond, a história natural necessita de um tempo diferente da concepção de tempo humana, ocidentalizada, com a qual estamos acostumados. Segundo ele, o tempo natural (geológico) é muito mais longo (DRUMMOND, 1991). Rachel Carson (1969) também discursou sobre o tempo humano e o tempo necessário à regeneração da natureza. De acordo com seu olhar, a humanidade já não possui mais o tempo necessário para o ajuste entre as “coisas vivas” (CARSON, 1969, p. 15) e seu ambiente.

Utilizando essa divisão de tempo natural e humano, ao analisar um fenômeno natural, faz-se por meio da *longa duração*. Mas ao fazê-lo pela ótica de tempo humano, é possível analisar cada fenômeno separadamente. No entanto, desastres tendem a atrair a atenção apenas quando se apresentam com certa constância ou intensidade (KLANOVICZ, 2008).

Obviamente uma visão holística e transdisciplinar pode trazer vantagens para melhor ilustrar e compreender cada fenômeno. “Uma investiga-

ção bem sucedida [*sic*] de ciência socioambiental é, por definição, eclética” (DRUMMOND, 2000, p. 11). É necessário mais do que uma única área do conhecimento para compreender por inteiro um desastre ambiental. Sendo assim, a historiografia também vem dando à luz a questão ambiental e a natureza, trazendo novas perspectivas de pesquisa. Mesmo recente, esse processo de repensar as ações humanas em seu meio e buscar métodos de menores impactos à natureza vem, cada vez mais, gerando discussões relevantes.

Quanto à conceitualização dos desastres, de acordo com Emerson Vieira Marcelino (2007), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), os desastres ambientais são classificados em *naturais* e *humanos*. Os desastres humanos são aqueles que ocorrem pela atividade humana, como: alguns incêndios, envenenamento de um rio por produtos químicos, entre outros. Já os desastres naturais são acontecimentos originados por um fenômeno natural, que resultam em danos humanos, materiais e ambientais, com ou sem o agravo da participação humana. Os tipos de desastres naturais são variados, entre eles estão as enchentes, os terremotos, os furacões, os tornados, as tempestades, etc.

No Brasil, os fenômenos naturais mais comuns que acarretam desastres são os fenômenos da dinâmica externa da Terra, tais como: chuvas, tempestades e deslizamentos. Mas, ao mesmo tempo, todos esses elementos são ocorrências naturais do planeta, existentes há milhões de anos, essenciais à renovação e ao equilíbrio do relevo terrestre.

Na região sul do País, por estar localizada sob influência dos climas temperado e subtropical, esses fenômenos são mais frequentes e poderosos (KLANOVICZ, 2008). Em Santa Catarina, os “desastres naturais” mais comuns são as enchentes, as inundações e os deslizamentos causados, em sua maioria, por elevados índices pluviométricos. Outros fenômenos também ocorrem, mas em menor frequência e consistência (CUNHA, 2003). No entanto, ações antrópicas, como modificações em leitos, impermeabilização dos solos, o assoreamento de rios e o desmatamento, têm intensificado as ocorrências e potencializado esses fenômenos.

Em contrapartida, a definição de “desastre natural” de Marcelino (2007), retratando a natureza como única causadora de desastres, como enchentes ou deslizamentos, é passiva de questionamentos e, portanto, é tratada aqui entre aspas. Isso porque no ato da subjugação da natureza pelo ser humano, o próprio ser humano causa a destruição de seu *habitat* (CARSON, 1969). Ao chamar de “desastre natural”, a responsabilidade é retirada da humanidade e colocada como um fenômeno natural de conotação (quase) divina, impossível de ser evitado, a menos que o ser humano altere, destrua e subjugu ainda mais a natureza com métodos paliativos para evitar novos “desastres naturais”. Essas calamidades vêm aumentando muito significativamente em todo o mundo. Nas últimas décadas, sua frequência chegou a aumentar 1000%, em comparação com a década de 1940 e o início de 1950 (MARCELINO, 2007).

Ao analisar os dados trazidos por Marcelino (2007), é fácil compreender que a origem dos desastres é antrópica. Seu crescimento acompanha o desenvolvimento econômico do período pós-Segunda Guerra Mundial e do período de crescimento dos centros urbanos. Com o desenvolvimento econômico do modelo capitalista, a exploração da natureza pelo ser humano também é aumentada (LUTZENBERGER, 1985).

O acontecimento acentuado de enchentes, inundações e deslizamentos que se tornam desastres está mais relacionado a habitações construídas em locais inadequados, como encostas e regiões baixas ou banhadas por rios e lagos, do que somente devido ao volume pluviométrico (COUTINHO, 2007). Segundo Porto (1995), sem um bom planejamento urbano, o limite de uma ocupação de terrenos baixos, ou banhados por rios, vai depender muito da memória das cheias. Muito comumente, áreas com grandes riscos a inundações, que passam alguns anos sem enchentes, são loteadas e tornam-se bairros residenciais. Esses bairros, fáceis de serem encontrados em cidades ribeirinhas, tornar-se-ão um local passivo a “desastres naturais”. A descrição de Porto (1995) se encaixa perfeitamente no caso aqui analisado. “Os moradores da cidade de Tubarão haviam perdido a memória das enchentes anteriores, porque, nas últimas décadas, elas aconteciam somente nos campos” (VETTORETTI,

1992, p. 225), o que fez com que a cidade avançasse em direção às áreas mais baixas, sujeitas a inundações. Quando houve a cheia de 1974, o rio extrapolou seu leito normal e a cidade foi atingida por uma inundação.

Essa enchente, que ocorreu em março de 1974, não foi a primeira a atingir a cidade, mas foi a primeira a ganhar tão grande enfoque e grandes proporções. Ocorriam inundações na região muito antes da existência da cidade, inclusive existem relatos de inundações ainda maiores, anteriores a 1974. A comprovação desses eventos pode ser encontrada e analisada principalmente em atas municipais, jornais e arquivos diocesanos.

A cidade de Tubarão está localizada em uma área plana, porém baixa, drenada pelo rio, que lhe deu seu nome. Sua altitude em relação ao mar é de aproximadamente oito metros (COMISSÃO..., 2011). A área onde está localizada, às margens do rio, foi formada durante séculos sucessivos de deposição de material erodido das encostas próximas e da Serra Geral. As águas do rio correm lentamente em Tubarão devido às poucas (ou nenhuma) quedas, aos desníveis existentes e ao assoreamento de seu leito. Não havia mata ciliar em Tubarão em 1974, então as margens estavam totalmente nuas. Hoje, a esparsa mata ciliar que há é composta por alguns poucos metros com muitas espécies exóticas que foram replantadas após 1974.

A constituição do solo da cidade de Tubarão “[...] se caracteriza, principalmente por uma planície sedimentar de formação recente, sendo que as elevações existentes correspondem a rochedos ilhados” (HIGASHI; DIAS, s.d., p. 03), e sua composição é principalmente de “Suíte Intrusiva Tabuleiro, Sedimentos síltico-arenosos de lagunas e baías e os Sedimentos argilo-arenosos contendo matéria orgânica de origem flúvio-lagunar” (HIGASHI; DIAS, s.d., p. 03).

Toda a área onde foi edificada a cidade apresenta indícios de já haver sido, em um passado não tão distante, leito de um grande rio ou parte de um lago. Isso pode ser mais bem observado por meio de sua formação geológica e da composição de seu relevo, constituído de uma planície inserida em um grande vale fluvial.

Ao realizar uma análise hidrográfica da cidade de Tubarão e observar as lagoas nos arredores, chama a atenção que todas são ligadas por canais ou rios. Essas ligações podem ser resquícios de sua unidade ancestral, descritos por Edgar Nunes (2002). Ainda no século XVIII, ou talvez antes, muito antes do surgimento da cidade, era comum que moradores da região, principalmente de Laguna, estabelecessem-se, sazonalmente ou não, nas imediações do rio Tubarão em busca de terras férteis para plantio (NUNES, 2002). Sendo assim, é difícil datar com precisão a primeira edificação ou os primeiros residentes daquele local. A qualidade do solo para plantio se dava pelas próprias cheias naturais do rio, que já ocorriam de tempos em tempos, quase de maneira cíclica. Essa relação entre o fenômeno das cheias e o da agricultura já reforça a existência de uma estreita ligação entre a sociedade, a natureza e os recursos naturais.

As primeiras grandes cheias de que se tem registro são datadas ainda do século XVIII (FEUERSCHUETTE, 2018). Todas elas sempre relacionadas ao transbordamento do rio Tubarão. Entre as primeiras a serem documentadas, estão as inundações ocorridas em 1797 e 1834 (BOITEUX, 1985).

Poucos anos depois, “[...] em 1838, também ocorreu uma grande enchente em todo litoral de Santa Catarina [...] tudo virou oceano” (VETTORETTI, 2007, p. 14). Em 1880 e em 1881, assim como em 1973 e 1974, ocorreram duas inundações, sendo a primeira de menor proporção, afetando apenas a agricultura, e a segunda, muito maior, ocasionando grande preocupação entre os moradores (VETTORETTI, 1992).

Ainda em 1887, outra enchente assolou a cidade, ainda maior que as anteriores documentadas. Entre os prejuízos, estavam “[...] todas as lavouras dos pobres lavradores, assim como diversas casas que foram arrancadas pelas águas” (MACHADO, 2005, p. 15). “Os habitantes da cidade já estavam habituados a assistirem *[sic]* enchentes e sabiam que as águas não ultrapassariam a um determinado nível” (FREITAS, 2001, p. 12), mas, assim como em 1974, estavam enganados.

Em 25 de setembro de 1897, outra inundação trouxe desespero aos tubaronenses. “Diz-se que houve até ceifa de vidas humanas, somada a expressivas perdas materiais principalmente no âmbito rural” (MACHADO, 2005, p. 15). Também está ligada a essa inundação a destruição do Palacete Cabral, que estava em construção, restando apenas os seus alicerces (ALBEIRICE, 1981).

Após alguns anos, em 1917, uma nova inundação do rio ocorreu em Tubarão. Embora em menores proporções que a de 1887 e a de 1897, também ocasionou estragos e prejuízos à cidade, como pode ser visto no artigo do jornal “A Opinião”, de 26 de janeiro de 1917 (*apud* VETTORETTI, 1992, p. 225).

Em 1928, outra vez as águas do rio Tubarão voltaram a assustar os moradores. “Em 7 de maio de 1928 – dessa vez ocasionando consideráveis prejuízos ao centro urbano e à zona rural já razoavelmente populosa – repetiu-se ao desastre climático, agora com resultados alarmantes para o seu tempo” (MACHADO, 2005, p. 16). Ainda sobre a inundação de 1928, falou-se que foi “[...] a maior desgraça até hoje conhecida aqui. Os prejuízos da lavoura, agricultura, indústria e pecuária são calculados superiores a três mil contos” (A IMPRENSA *apud* MACHADO, 2005, p. 16).

Vinte anos depois, em abril de 1948, outra cheia assolou a região. Pedidos de auxílio foram enviados solicitando apoio às vítimas, resultando, inclusive, na visita do ministro da Viação e Obras Públicas Clovis Pestana, acompanhado pelo governador de Santa Catarina Aderbal Ramos da Silveira (FEUERSCHUETTE, 2018).

Seis anos depois, em 1954, mais uma cheia apavorou os tubaronenses. Mesmo que descrita como a maior dos últimos cinquenta anos, apenas gerou prejuízo nas áreas rurais da cidade. Nos anos de 1957, 1958, 1960, 1963 e 1967, um número significativo de inundações, cheias e transbordamentos do rio Tubarão também foi registrado (FEUERSCHUETTE, 2018).

Em 1971, um acontecimento marcou a vida dos moradores da cidade de Lauro Müller e região, onde nascem e passam alguns dos afluentes do rio Tubarão. Pontes de concreto, estação rodoviária e outras construções também foram destruídas (FREITAS, 2001).

Assim como nos episódios de 1880 e 1881, em 1973, um ano antes da inundação objeto desta pesquisa, outra cheia, embora de pequena proporção, atingiu a cidade. A providência tomada foi a mesma que seria realizada em 1974, ou seja, abrir a barra do Camacho, que estava assoreada (JORNAL DE SANTA CATARINA, 23/04/1974, n.p.).

No advento de março de 1974, o ocorrido foi fruto de uma grande combinação de fatores naturais e humanos, depois de um período com chuvas intermitentes que deixaram o solo já consideravelmente encharcado. Era a conhecida *lestada* (chuva e ventos vindos do mar), que chegara ao continente e represava-se na Serra Geral. Essa situação agravada pela maré sizígia, que represava a vazão das águas na barra de Laguna, SC, começava a avolumar o leito do rio, o qual já se encontrava assoreado e sem mata ciliar. No dia 22 de março, sexta-feira, as chuvas foram mais intensas. As áreas baixas já começaram a ficar tomadas pela água, mas, até então, não haviam grandes preocupações. Áreas de plantio, que eram as primeiras a serem atingidas, já não causavam espanto ao ficarem submersas, uma vez que algumas dessas áreas estavam a apenas um metro de altitude em relação ao nível do mar (VETTORETTI, 1992).

No sábado, dia 23 de março, duas “[...] trombas d’água estavam assolando as cidades de Orleans e Lauro Müller” (CARGNIN, 2000, p. 146). O rio não demorou a subir e, com isso, aumentou o número de desabrigados. À tarde, as águas pareceram estar estabilizadas e algumas pessoas já tinham retornado a suas casas. “Ainda que numa situação absolutamente crítica, sentiu-se um clima de relativa euforia e uma breve sensação de alívio” (CARGNIN, 2000, p. 147). Mas o alívio não durou. Logo a chuva voltou a cair e os noticiários da rádio Tubá continuavam a alertar a população. Isso até que, às 22h00min, a cheia tomou a termoeletrica Jorge Lacerda e fez-se o apagão, iniciando a que seria chamada “noite da agonia” (MACHADO, 2005). As águas continuaram subindo rapidamente durante a noite. Muitas pessoas foram pegas de surpresa em meio à escuridão. Quem pôde fugiu às pressas de suas casas e refugiou-se em locais mais elevados, como o morro da cathedral ou alguns prédios públicos.

Muitos se refugiaram em casas de conhecidos, dentre elas, algumas situadas em encostas. Infelizmente, esses que não sofreram com as cheias acabaram sofrendo com os deslizamentos de terras e das rochas que desciam das partes mais elevadas dos morros. Oficialmente, 25 pessoas morreram soterradas por deslizamentos de encostas, das quais muitas nunca foram resgatadas e ainda permanecem sob os escombros de suas casas, da terra e das rochas que vieram morro abaixo (ALBEIRICE, 1981).

Ao raiar do sol na manhã de domingo, dia 24 de março, o que se via era inacreditável. Desde as proximidades da localidade de Gravatal até o Camacho, tudo era uma grande lagoa, como aquela descrita por Edgar Nunes (2002), com uma extensão de aproximadamente 70 km (CARGNIN, 2000).

Com a abertura da barra do Camacho, as águas que estavam represadas começaram a baixar rapidamente. Mas esse aceleração, que baixou um metro de água em duas horas, gerando enorme correnteza, contribuiu para a destruição de casas e de outras construções que estavam tomadas pelas águas. Para se ter uma ideia do volume da água represada, quando o exército abriu a barra do Camacho, utilizando alguns quilos de dinamite, conseguiu abrir um canal de aproximadamente 10 metros, o qual se transformou em “[...] quase um quilômetro em consequência da força de água que desembocou no mar e causou a erosão natural do canal” (JORNAL DE SANTA CATARINA, 30/03/1974, n.p.). Mesmo com a abertura da barra e com o rápido escoamento das águas represadas, algumas pessoas somente puderam sair dos prédios em que estavam abrigadas na quarta-feira, dia 27 de março, permanecendo sem água, energia ou comida.

Depois que as águas baixaram, o que se via era uma cidade arrasada. Apenas poucos pontos não foram alagados, e aproximadamente 60.000 dos 70.000 habitantes da cidade estavam desabrigados. A lama e o cheiro de podre estavam em toda parte. Os animais de corte encontrados vivos foram sacrificados no meio das ruas e sua carne distribuída para a população. Segundo Vettoretti (2007, p. 15), o episódio da enchente que mais o marcou foi “[...] a cena de um boi sendo carneado na Rua Laguna”. O autor (2007, p. 15) também

relatou que “[...] estava com a máquina no pescoço, mas fiquei tão petrificado que não consegui fazer a fotografia”.

Grupos inteiros de pessoas adoeceram devido à contaminação das águas e à escassez de água potável e de comida (CARGNIN, 2000). Pessoas de todas as camadas sociais foram vistas com baldes ou outros recipientes transitando pelas ruas em busca de água e alimentos (JORNAL DE SANTA CATARINA, 24/05/1974). Os jornais de 1974 sugeriram que tanto famílias mais abastadas quanto as menos abastadas foram atingidas, no entanto, as áreas mais elevadas, onde as águas não chegaram, como o morro da catedral, eram os bairros *nobres* da cidade, com casas maiores e mais bem construídas. Dessa forma, seria ingenuidade crer que todas as classes foram atingidas da mesma forma.

Mesmo com um histórico tão extenso de cheias e inundações anteriores a 1974, “[...] a memória desses fatos foi apagada de forma coletiva. Por desconhecimento de situações e episódios semelhantes, muitos consideram a inundação de 1974 como fenômeno, algo inédito, e para alguns, até um castigo” (VETTORETTI, 1992, p. 224).

Outras Reflexões

A conclusão de uma pesquisa como esta tornar-se-ia desafiadora apenas por sua perspectiva ambiental, ainda recente na historiografia brasileira. O desafio ainda seria ampliado ao tomar um desastre ambiental como a *Enchente de 74*, que, como mencionado anteriormente, é um desastre com nome no qual existem tantos sentimentos e romantismos, política, economia e cultura já enraizados. Mas, sendo uma forma de análise tão nova, imensos campos ainda estão esperando por pesquisas as quais, no caso dos desastres, cada qual apresenta particularidades e semelhanças.

Em Tubarão, o longo histórico de enchentes e inundações que já ocorriam há tanto tempo naquele local foi de grande importância na formação

de seu relevo. Toda aquela grande bacia sedimentar, mesmo que apenas sazonalmente ou esporadicamente, é parte integrante do rio. Assim, mesmo que ninguém goste de ter um rio em seu quintal, todos ainda habitam o “quintal” do rio.

A própria divisão dos “desastres ambientais” em “desastres humanos” e “desastres naturais” é resultado de uma visão antiquada e cartesiana que separa o homem moderno da natureza. Sendo a humanidade parte da natureza, deve-se considerar que todo desastre é um “desastre natural”? Ou se mantém a divisão existente e classificamos os desastres com influências antrópicas, como a inundação ocorrida em 1974, como um “desastre humano”? Afinal, o que dá ao fenômeno patamar de desastre é unicamente a presença humana ou cultural, ou seja, se o fenômeno não atingir concentrações populacionais, bens materiais ou culturais, não passará de um fenômeno natural.

Inundações, como a de 1974, provavelmente voltarão a atingir a cidade de Tubarão. “Temos ciência que segundo cálculos estatísticos teremos novamente outra inundação dentro de até 30 (trinta) anos” (COMISSÃO..., 2011, p. 22). Lutzenberger (1985, p. 38) já nos prevenia que

[...] a repetição das calamidades generalizadas provocadas pelas enchentes confirma o que há tanto tempo já se podia prever. Se hoje os estragos são imensos e os mortos se contam às centenas, não tardará o dia em que os flagelados e os mortos totalizarão milhões. Somos incapazes de aprender com nossos erros. As advertências sempre mais dramáticas da Natureza de nada valem. Insistimos no consumo de nosso futuro.

No início do povoamento, antes da existência da cidade, os moradores estavam adaptados ao seu ambiente e tiravam proveito daquele fenômeno por meio da agricultura. Ao se “desprender” da natureza através de um pensamento cartesiano errôneo, o homem moderno agora tenta adaptar o meio ao seu modo de vida destruidor por meio do “controle da natureza”. Sobre esse

pensamento, Carson (1969, p. 305) enfatiza que “[...] o ‘controle da natureza’ é frase concebida em espírito de arrogância, nascida da idade ainda neanderthalense da Biologia e da Filosofia, quando se propunha que a Natureza existia para a conveniência do homem”.

De forma semelhante, Lutzenberger (1988) aponta para o conceito errôneo de progresso e de desenvolvimento, que busca apenas lucro financeiro e não sustentabilidade, harmonia ou integração. Paralelamente a isso, faz-se importante relatar que, em âmbito mundial, os desastres naturais são bastante seletivos quanto às suas vítimas (KLANOVICZ, 2008). De acordo com Marcelino (2007), mais de 70% dos países atingidos por desastres, e mais de 95% das mortes em decorrência deles, ocorrem em países pobres. Nesse sentido, há uma inversão em relação à ação/reação voltada aos desastres, pois mesmo que o modelo econômico capitalista de alguns países bastante industrializados se mostre o mais agressivo ao ambiente, aqueles que mais sofrem são os mais carentes, os menos industrializados e vítimas de maiores desigualdades sociais. Além disso, a população de maior poder aquisitivo tende a habitar locais mais seguros e elevados, que possuem maior valor imobiliário, ou a se evadir mais rapidamente de locais alertados sobre a chegada de desastres em potencial, ao contrário das camadas populacionais de menor poder aquisitivo (EVANGELISTA, 2005, p. 9).

Sobre o caso de Tubarão, SC, o que foi feito nas décadas que se passaram desde a *Enchente de 74* foram obras públicas. Nenhum projeto de caráter ecológico, de preservação ou de restauração ambiental foi criado. Pelo contrário, surgiram projetos apenas para “conter as cheias”, ou seja, “controlar a natureza”. Entre eles estavam projetos de retificação do curso do rio, de dragagem, de construção de barragens e de uma espécie de dique de concreto, que evita que as areias fechem a barra do Camacho. Alguns projetos, como a dragagem, a construção da retenção no Camacho e a retificação do curso foram realizados. Outros, como o das barragens, nunca passaram de promessas. A mata ciliar e as áreas de preservação permanente (APP), estipuladas no Plano Diretor do Município de Tubarão em 1994, nunca foram respeitadas.

Partes da draga que efetuou a retificação das margens do rio e a dragagem de seu leito se tornaram um monumento. Elas estão em um de pedestal de concreto, com um indicador do nível máximo das águas da *Enchente de 74*. À primeira vista, parecem representar, imponentes, um troféu da vitória do ser humano sobre a natureza.

REFERÊNCIAS

- ALBEIRICE, Pedro. **Tubarão 74**: A Catástrofe. Tubarão: Dehon, 1981. 108 p.
- JORNAL DE SANTA CATARINA. **As águas se foram, Tubarão se recupera e todos são iguais**. Blumenau, 24 de maio de 1974.
- JORNAL DE SANTA CATARINA. **É preciso manter barra do Camacho desobstruída para impedir nova cheia**. Blumenau, 23 de abr. de 1974.
- JORNAL DE SANTA CATARINA. **Se não dinamitassem barragem, morreriam muitos mais**. Blumenau, 30 de mar. de 1974.
- BOITEUX, Henrique. **A República Catharinense**: Notas para sua história. Rio de Janeiro: Xerox do Brasil, 1985. 324 p.
- CARGNIN, Alberto. **Tubarão**: do primeiro centenário ao fim do milênio. Tubarão, SC: Dehon, 2000. 174 p.
- CARSON, Rachel. **Primavera Silenciosa**. São Paulo, SP: Melhoramentos, 1969. 305 p.
- COMISSÃO Especial de Alerta Contra Catástrofes Climáticas. 2011, p. 7.
- COUTINHO, Ronaldo. Enchente de 74: A força de um povo que soube reconstruir sua história. **Aquecimento global em debate**, Tubarão, ano 1, n. 3, p. 10, 2007.
- CUNHA, Sandra Batista. Canais fluviais e a questão ambiental. In: GUERRA, Antônio José Teixeira; CUNHA, Sandra Baptista da (Orgs.). **A questão am-**

biental: diferentes abordagens. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003, p. 219, 237.

DRUMMOND, José Augusto. A História Ambiental: temas, fontes e linhas. *In: Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, v. 4, n. 8, p. 184-198, 1991.

DRUMMOND, José Augusto. Ciência Socioambiental: Notas sobre uma abordagem necessariamente eclética. *In: ROLIM, Rivail Carvalho; PELLEGRINI, Sandra Araújo; DIAS, Reginaldo Benedito (Orgs.). História, espaço e meio ambiente*. Maringá: AMPUH-PR, 2000, p. 11-43. Disponível em: <http://professores.cds.unb.br/drummond/pub/index.cfm?x=14>. Acesso em: 05 out. 2011.

EVANGELISTA, Luiz Carlos da Rosa. Enchentes, fenômenos cíclicos? 2005. Dissertação (Mestrado Profissionalizante em Engenharia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005. Disponível em: <http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/4855>. Acesso em: 18 set. 2011.

FEUERSCHUETTE, Irmoto José. **Tuba-nharô – O pai feroz:** O drama das inundações no sul de Santa Catarina. Palhoça: Ed. Unisul, 2018. 156 p.

FREITAS, Carlos Flor de. **Vivências e evidências da enchente de 1974 em Tubarão**. 2001. 34 f. Monografia (Especialização em História Local e Regional) - Universidade do Extremo Sul Catarinense, Criciúma, 2001.

HIGASHI, Rafael Reis; DIAS, Regina Davison. **Interpretação de dados cartográficos como subsídio ao planejamento urbano do município de Tubarão**. Sem data de publicação. Disponível em: www.cartografia.org.br/xxi_cbc/060-SG10.pdf. Acesso em: 18 jun. 2011.

KLANOVICZ, Jó. Apontamentos Teórico-metodológicos para uma História Ambiental dos desastres “naturais” em Santa Catarina. **Tempos Acadêmicos**, Criciúma, v. 01, n. 6, 2008. Disponível em: <http://periodicos.unesc.net/index.php/historia/issue/view/28>. Acesso em: 18 jun. 2011.

LUTZENBERGER, José. **Ecologia:** do jardim ao poder. 10. ed. Porto Alegre: L&PM, 1985. 102 p.

LUTZENBERGER, José. **O fogo no Pantanal**. 1988. Disponível em: www.agirazul.com.br/artigos/fogopan.htm. Acesso em: 10 nov. 2011.

MACHADO, Cesar do Canto. **Tubarão 1974**: Fatos e relatos da grande enchente. Tubarão, SC: UNISUL, 2005. 203 p.

MARCELINO, Emerson Vieira. **Desastres Naturais e Geotecnologias**: Conceitos Básicos. Santa Maria, RS: INPE, 2007 (Versão preliminar). Disponível em: www.inpe.br/crs/geodesastres/conteudo/publicacoes/conceitosbasicos.pdf. Acesso em: 20 set. 2011.

MARTINEZ, Paulo Henrique. **História ambiental no Brasil**: pesquisa e ensino. São Paulo: Cortez, 2006. 120 p.

NUNES, Edgar. **Tubarão**: Histórias e lorotas. Tubarão, SC: Copiart, 2002. 96 p.

PÁDUA, José Augusto. **Um sopro de destruição**: pensamento político e crítica ambiental no Brasil escravista (1786-1888). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004.

PORTO, Rubem La Laina; BARROS, Mario Tadeu de. **Drenagem urbana**. Porto Alegre: ABRH, 1995. 428 p.

VETTORETTI, Amadio. **História de Tubarão**: das origens ao século XX. Tubarão, SC: Incopel, 1992. 426 p.50

VETTORETTI, Amadio. **O retrato de uma história**. Enchente de 74: A força de um povo que soube reconstruir sua história. Tubarão, ano 1, n. 3, p. 14-15, 2007.

Capítulo 3

O Compasso das Políticas Públicas no Estado Democrático de Direito Brasileiro com os Documentos Internacionais de Proteção aos Direitos Humanos

DOI: <http://dx.doi.org/10.18616/respon03>

Arnaldo Fabiano Fenner

Reginaldo de Souza Vieira

INTRODUÇÃO

Na seara da evolução dos paradigmas de Estado, chegar-se-á ao atual modelo, o Estado Democrático de Direito, que traz consigo o ideal de igualdade entre cidadãos, sendo que as políticas públicas enquanto mecanismos para a concretização de direitos pelo Estado se tornam importantes meios para potencializar a igualdade.

Contudo, essa iniciativa ou os motivos pelos quais se elaboram políticas públicas não está/estão restrita/restritos aos espaços nacionais dos Estados, havendo uma relevante atuação das organizações internacionais na regulação/recomendação de condutas estatais a serem desenvolvidas de acordo com os padrões universais.

As promoções de políticas públicas que tenham como objeto a educação no Brasil partem, portanto, da conjugação de políticas nacionais e de políticas internacionais, que estimulam, recomendam ou obrigam os Estados.

Nesse sentido, as políticas internacionais elaboradas pela Organização das Nações Unidas (ONU), notadamente por suas agências especializadas, como a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura

(UNESCO) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), para promover o desenvolvimento humano são objetos deste breve estudo.

Assim, há uma compreensão extranacional para a promoção do desenvolvimento humano, regulando as ações e orientando os caminhos a serem seguidos para a plena realização dessas políticas de promoção de igualdade, desenvolvimento e cidadania nos territórios nacionais dos Estados.

Portanto, a pesquisa apresentada neste capítulo se justifica pela relevância do estudo acerca do compasso entre as políticas internacionais e as políticas públicas nacionais que viabilizam potencializar o desenvolvimento humano pelo acesso à educação no Estado brasileiro.

Vislumbra-se, para tanto, analisar as políticas públicas de acesso à educação nacional conjuntamente com as políticas públicas de âmbito internacional que regulam a promoção da educação como um mecanismo de desenvolvimento social e humano, consolidadas como direitos fundamentais que visam garantir a dignidade humana e o pleno desenvolvimento humano do cidadão no contexto do Estado Democrático de direito brasileiro.

Para a realização da investigação acerca do compasso das políticas públicas nacionais com as internacionais, que promovem o acesso à educação como mecanismo para potencializar o desenvolvimento humano no Estado democrático de direito brasileiro, foi realizada uma pesquisa de cunho teórico, com tratamento dos dados de forma qualitativa.

A coleta dos dados se deu por meio de documentação indireta, configurando uma pesquisa bibliográfica a partir de livros jurídicos, artigos científicos e demais literaturas pertinentes à temática. Além do que, tem o caráter documental, pela utilização de textos normativos derivados do legislativo e do executivo nacional, bem como das normativas da comunidade internacional.

O método de abordagem utilizado foi o hipotético-dedutivo, tendo em vista a elaboração de hipótese acerca da lacuna nos conhecimentos sobre as políticas públicas para a educação como fator para o desenvolvimento humano no Estado Democrático de direito brasileiro, que pelo processo de

inferência dedutiva teve a predição da ocorrência de fenômenos abrangidos por tal hipótese testada.

Estado de direito e políticas públicas: das garantias à concretização

A atual contextualização de Estado democrático de direito exige, para a sua melhor compreensão, reportar o olhar para a construção histórica do Estado Moderno. Na concepção Moderna de Estado de Direito, ele passou por diferentes fases, elencadas na doutrina como: Estado Liberal, Estado Social e Estado Democrático. O Estado será limitado e delineado, em cada momento histórico, por uma geração de direitos fundamentais, que determinará as suas atuações (PÉREZ LUÑO, 2012).

Assim, na passagem histórica da evolução do Estado de Direito, tendo por nascedouro o Estado liberal, que visou garantir as liberdades fundamentais aos indivíduos, agora cidadãos, a partir de uma atuação negativa do Estado limitada pelo direito (BONAVIDES, 2003).

O não intervencionismo deixou a economia à solta no paradigma liberal burguês, oferecendo a cena para o surgimento do Estado Social, que buscou materializar os direitos *prometidos*, promovendo políticas sociais para aplacar as péssimas condições de vida da população mais afetada.

O que se verifica, entretanto, é que era uma política setorial, paliativa e tardia, pois se dava a reboque dos fatos sociais. Não se tratava de uma política social para transformar as estruturas estatais (GARCÍA-PELAYO, 2009).

A partir da segunda metade do século XX, o Estado Social começou a ser questionado, as crises de legitimação pelas quais passou esse modelo, na década de 70, começaram a ser demonstradas em todas as suas dimensões. Surgiu, assim, um novo conceito, o *Estado Democrático de Direito*, representando uma metamorfose no Estado de Direito, por um lado, e no Estado Social, por outro.

Nas palavras dos professores: “Resumidamente, pode-se dizer que, ao mesmo tempo em que se tem a permanência em voga da já tradicional questão social, há como que a sua qualificação pela questão da igualdade” (BOLZAN DE MORAIS, 2002, p. 38).

O Estado Democrático de Direito foi fundado sobre os princípios da constitucionalidade, da democracia, do sistema de direitos fundamentais individuais e coletivos, da justiça social, da igualdade, da divisão de poderes, da legalidade e da segurança jurídica.

Assim, “[...] quando assume o feitiço democrático, o Estado de Direito tem como objetivo a igualdade e, assim, não lhe basta limitação ou a promoção da atuação estatal, mas referenda a pretensão à transformação do *status quo*” (STRECK; BOLZAN DE MORAIS, 2010, p. 94).

A Carta Magna brasileira consagra tais ideais no rol de seus direitos fundamentais, com redação clara, que ratifica os princípios promulgados pelo Estado Democrático de Direito, tornando nosso país signatário dessa concepção jurídica-social moderna de Estado (BRASIL, 2015). Assim, exige-se do Estado Democrático de Direito brasileiro:

[...] prestações positivas, neste caso, por meio da criação e da implementação de leis e de políticas públicas que garantam condições mínimas de existência, atendendo ao princípio da isonomia material e aos objetivos do Estado brasileiro que são, entre outros, a erradicação da pobreza e a diminuição das desigualdades sociais. (ANGELIN, 2010, p. 67).

Faz-se necessário observar os mecanismos para a referida concretização, podendo-se elencar inúmeros meios, porém avançar-se-á sobre o campo das políticas públicas desenvolvidas pelo Estado, especialmente sobre aquelas relativas à educação com fins de desenvolvimento humano no Brasil.

O atual contexto do Estado Democrático de Direito está para além dos espaços nacionais. Assim, também para as políticas de cooperação, no

cenário das Organizações Internacionais, notadamente as especializadas da Organização das Nações Unidas (ONU). A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo XXVI, elenca que:

Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1948, n.p.).

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) foi fundada em 16 de novembro de 1945, com o objetivo de contribuir para a paz e a segurança no mundo mediante a educação, a ciência, a cultura e as comunicações.

Em seu artigo primeiro, a Convenção geral que criou a UNESCO definiu seus objetivos: “[...] contribuir para a paz através da educação, ciência e cultura [...]” (SEITENFUS, 2008, p. 236), fazendo com que uma estreita colaboração internacional viesse/venha a fazer respeitar “[...] a justiça, a lei, os direitos humanos e as liberdades fundamentais sem distinção de raça, sexo, ou idioma” (SEITENFUS, 2008, p. 236).

A UNESCO, no que tange à sua estruturação institucional, apresenta-se semelhante aos demais organismos internacionais. Sua forma tradicional é composta de uma Conferência Geral, um Conselho Executivo e uma Secretaria. Ela elenca suas ações básicas em prol da educação, buscando “[...]”

eliminar o analfabetismo, desenvolver o ensino básico e melhorar os manuais escolares” (SEITENFUS, 2008, p. 236).

A Conferência Geral reúne 188 Estados-Membros das Nações Unidas e tem como objetivo geral aprovar convenções e recomendações, bem como definir as linhas gerais da orientação política da Organização, aprovar orçamentos e analisar relatórios dos países-membros (UNESCO, 2013).

Para tanto, a Organização acredita que somente pela mobilização de todos os atores envolvidos (direta e/ou indiretamente) poder-se-á efetivar a promoção da cidadania, a consolidação da democracia, a qualificação da igualdade, o acesso amplo à justiça e a garantia de segurança. Tais avanços seriam fundamentais para que o Estado construa e consolide uma cultura de direitos humanos, cultura e paz (UNESCO, 2013).

No que tange à Educação, a principal diretriz da UNESCO se direciona para o auxílio dos países-membros a fim de que possa alcançar as metas de Educação para Todos, promovendo o acesso e a qualidade da educação em todos os níveis e modalidades.

A Organização desenvolve ações direcionadas à potencialização das capacidades nacionais, além de prover acompanhamento técnico e apoio à implementação de políticas nacionais de educação, tendo sempre como foco a relevância da educação como valor estratégico para o desenvolvimento social e econômico dos Estados (UNESCO, 2013).

As intervenções/ações da UNESCO nos seus países-membros indicam os caminhos a partir de orientações/diretrizes por meio de uma série de declarações legislativas, que ao longo dos anos evoluíram conforme o desenvolvimento social dos Estados. Nas construções normativas em prol das metas e garantias que a UNESCO almeja, podem ser elencadas:

- a. A Declaração Universal dos Direitos Humanos no Artigo 26.1 estipula que: “Toda pessoa tem direito à instrução”;

- b. O Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais no Artigo 13.1, que reconhece “o direito de toda pessoa à educação”;
- c. A Declaração do Milênio e o Plano de Ação de Dacar de 2000, que assumiu compromissos globais com vista a fornecer ensino básico de qualidade a todas as crianças, bem como aos jovens e adultos;
- d. A Declaração de Princípios da Cimeira Mundial sobre a Sociedade da Informação de 2003, que assumiu o compromisso de se empenhar em prol da “construção de uma Sociedade da Informação inclusiva e voltada para as pessoas e o desenvolvimento, na qual todos possam: criar, acessar, utilizar e compartilhar a informação e o conhecimento”;
- e. A Convenção de 2005 da UNESCO sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade da Expressão Cultural, que declara que: “O acesso equitativo a uma rica e diversificada gama de expressões culturais originárias do mundo inteiro e o acesso das culturas aos meios de expressão e de divulgação constituem elementos importantes para o reforço da diversidade cultural e o incentivo da compreensão mútua”;
- f. A Convenção de 2006 sobre os Direitos das Pessoas Deficientes em seu Artigo 24, que reconhece os direitos à instrução das pessoas com deficiências;
- g. As declarações das seis CONFINTEA (Conferência Internacional sobre a Educação de Adultos), que salientam o papel fundamental do processo de Instrução e Aprendizagem para Adultos. (UNESCO, 2013, n.p.).

A referida Organização está incumbida da coordenação da política global em direção à Educação para Todos (EPT), monitora a implementação das atividades, avaliando os progressos realizados, e as políticas efetivamente formuladas, disseminando conhecimentos sobre as boas práticas e alertando quanto aos desafios emergentes.

Historicamente, as desigualdades sociais, econômicas e culturais são características marcantes em nosso Estado. Percebe-se um recente crescimento da consciência social e de governo quanto à necessidade de reverter esse quadro social, criando-se mecanismos de participação e controle social, programas, projetos e ações que indicam um movimento de transformação positiva no Brasil.

Nessa busca por permanente evolução das garantias fundamentais relacionadas com o desenvolvimento humano, verifica-se que a UNESCO reúne uma série de programas em andamento no Brasil, a saber:

- Programa Educação de Qualidade: abrange a educação infantil, a alfabetização, a educação básica, a educação ao longo da vida, o ensino médio, o ensino técnico e profissional e o ensino superior, dando suporte técnico para a elaboração de ações que promovam a excelência da educação em seus mais variados aspectos e locais de ensino.

Nesse sentido, “[...] a qualidade e a igualdade continuam sendo desafios importantes a serem enfrentados, uma vez que são essenciais para atender às necessidades do país e para a construção de uma sociedade de conhecimento” (UNESCO, s.d. [a], n.p.).

- Programa Gestão Educacional: seu principal objetivo é dar suporte técnico para a elaboração das diretrizes e dos instrumentos de execução e implementação de metas, bem como para construir os instrumentos de elaboração de planos de ações e de diagnósticos da situação da educação nos âmbitos nacional, estadual e municipal (UNESCO, s.d. [b]).
- Programa Educação Inclusiva: visa desenvolver mecanismos em parceria com os diversos atores que compõem a educação, com o intuito de combater as desigualdades sociais, étnicas e econômicas.

As desigualdades sociais no Brasil afetam diretamente as diversas condições de acesso à educação no país. Quase todos os indicadores educacionais brasileiros evidenciam este fato.

São percebidas desigualdades nas condições de acesso à educação e nos resultados educacionais das crianças, dos jovens e dos adultos brasileiros, penalizando especialmente alguns grupos étnico-raciais, a população mais pobre e do campo, os jovens e adultos que não concluíram a educação compulsória na idade adequada, bem como crianças ou pessoas com deficiência.

Grandes desigualdades raciais e étnicas continuam existindo na sociedade brasileira (especialmente com relação a alguns grupos específicos, tais como a população indígena, a população afrodescendente, os quilombolas, a população carcerária e a população rural). A literatura especializada mostra que há forte correlação entre a origem étnica e as oportunidades educacionais. Estas coexistem lado a lado com desigualdades sociais e regionais, contribuindo, assim, para a exclusão educacional de um número considerável de jovens e adultos. (UNESCO, s.d. [c], n.p.).

- Programa Educação para o Desenvolvimento Sustentável: esse esforço educacional pretende gerar mudanças comportamentais no que tange à sustentabilidade social, econômica e ambiental.

Com uma população mundial de mais de 7 bilhões de pessoas e recursos naturais limitados, nós, como indivíduos e sociedades, precisamos aprender a viver juntos de forma sustentável. Precisamos agir de forma responsável com base no entendimento de que o que fazemos hoje pode ter implicações futuras para a vida das pessoas e para o planeta. A educação para o desenvolvimento sustentável (EDS) contribui para mudar a forma como as pessoas pensam e agem para alcançarmos um futuro sustentável. A EDS significa incluir questões-chave sobre o desenvolvimento sustentável no ensino e na aprendizagem. (UNESCO, s.d. [d], n.p.).

- Programa Educação em Saúde e Bem-Estar: por meio dele a UNESCO oferece cooperação técnica para dois campos de atuação, educação e saúde, auxiliando na elaboração de ações que promovam acesso a conhecimentos na área da saúde em espaços escolares e também de maneira informal.

A UNESCO oferece cooperação técnica aos ministérios da Educação e da Saúde do Brasil nas temáticas relativas à educação preventiva às IST, à infecção pelo HIV, à aids, à gravidez juvenil e à promoção da saúde nas escolas. A proposta busca integrar os setores de educação e de saúde ao desenvolvimento de ações, com enfoque na promoção da saúde sexual e reprodutiva de jovens estudantes, contribuindo para a redução da vulnerabilidade desse segmento da população à essas temáticas. A experiência brasileira no campo de HIV e aids tornou-se referência internacional. A educação não formal preventiva é uma marca do sucesso dessa experiência. (UNESCO, s.d. [e], n.p.).

O relevante papel da educação para o desenvolvimento humano pode ser a síntese caracterizadora da sociedade contemporânea, uma vez que o conhecimento é fator indispensável para a efetivação de mecanismos potencializadores das políticas públicas que promovam a igualdade entre os indivíduos. O Estado Democrático de Direito brasileiro compreende que as garantias fundamentais individuais/coletivas e sociais elencadas na Constituição Federal de 1988 garantem o desenvolvimento humano.

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a educação passa a ser considerada como um direito de todos e dever do Estado e da família, sendo promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. As finalidades do processo educacional estão descritas claramente no art. 205, da Constituição Federal e são: o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício

da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (COSTA, 2006, p. 1703).

Ainda na esfera constitucional, deve-se ressaltar o artigo 6º da Constituição Federal, não obstante as demais garantias preveem que “[...] são direitos sociais¹ à educação” [...] (BRASIL, 2015, n.p.). A educação é um direito social e fundamental, o qual exige prestação estatal para a garantia de sua materialização, promovendo, assim, o desenvolvimento humano de cada cidadão, sendo um direito social típico em que o Estado tem o dever de prestar, em sentido estrito, as devidas ações para a sua efetivação (COSTA, 2006).

Na construção do desenvolvimento humano por meio da educação, evidencia-se o princípio da igualdade, norte do atual modelo de Estado, quando do seu conceito podemos retirar a perspectiva de ampliação de escolhas, bem como o avanço na qualidade de vida de uma população.

O conceito de desenvolvimento humano foi definido originariamente como um processo de ampliação das escolhas das pessoas para que tenham capacidade e oportunidades para ser aquilo que desejam ser. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2021, p. 1):

O conceito de Desenvolvimento Humano também parte do pressuposto de que para aferir o avanço na qualidade de vida de uma população é preciso ir além do viés puramente econômico e considerar outras características sociais, culturais e políticas que influenciam a qualidade de vida humana.

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento é membro da rede de desenvolvimento global da Organização das Nações Unidas, atuando

1 Os direitos individuais e coletivos estão ligados ao conceito de pessoa humana e de sua personalidade, tais como a vida, a igualdade, a dignidade, a honra, a segurança, a propriedade e a liberdade. Os direitos sociais são aqueles que têm por objetivo garantir aos indivíduos as condições materiais tidas como imprescindíveis para o pleno gozo dos seus direitos, por isso tendem a exigir do Estado intervenções na ordem social.

do em parceria com membros de todas as classes da sociedade, almejando construir nações que possam resistir a crises, sustentando e conduzindo um crescimento capaz de aumentar a qualidade de vida para todos.

No Brasil, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) está presente desde o início da década de 1960, criando e implementando projetos, buscando responder aos desafios e às demandas específicas do país através de uma “visão integrada de desenvolvimento” (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, s.d., n.p.).

O desenvolvimento humano deve ser um processo global cujo sujeito principal é o indivíduo. O direito ao desenvolvimento² passa não somente pelos aspectos do desenvolvimento econômico estatal, mas contempla a sua conjugação com o desenvolvimento social e humano.

Assim, para que se possa viabilizar o processo de desenvolvimento humano enquanto um “[...] processo de ampliação das escolhas das pessoas para que elas tenham capacidades e oportunidades para ser em aquilo que desejam ser” (PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO, 2021, p. 1), é fundamental a relação entre a educação e desenvolvimento humano.

Faz-se necessário analisar, verificar e discutir em que medidas as políticas públicas para promover a educação no Brasil estão mais do que viabilizando o acesso, em todos os níveis, do cidadão brasileiro à educação, como também lhe possibilitando potencializar as suas capacidades e oportunidades para qualificar a sua igualdade.

2 O direito ao desenvolvimento é um ramo do direito internacional público, que está ligado aos chamados direitos da terceira geração dos direitos humanos, também conhecidos como direitos de fraternidade ou solidariedade. São os relacionados ao desenvolvimento ou progresso, ao meio ambiente, à autodeterminação dos povos, bem como ao direito de propriedades sobre o patrimônio comum da humanidade e ao direito de comunicação (SEITENFUS; VENTURA, 2006, p. 191-192).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Estado Democrático de Direito brasileiro, oriundo da mutação ocorrida ao longo de séculos dos variados modelos de Estado (Absolutista, Liberal e Social), apresenta como fundamentos a democracia, o constitucionalismo, os direitos e as garantias fundamentais e a pretensão de promover o desenvolvimento social e econômico dos indivíduos, ideário afirmado na sua Carta constitucional, promulgada em 1988.

Nesse cenário, discute-se a implementação de formas para concretizar os direitos fundamentais materialmente, ultrapassando a simples garantia formal e assegurando ao cidadão a realização efetiva dos preceitos que orientam o Estado democrático brasileiro. Nesse sentido, as políticas públicas se demonstram imprescindíveis a tais objetivos.

As políticas públicas, portanto, desempenham um importante papel no cenário institucionalizado do atual modelo de Estado. As positivações das garantias sociais chamam à necessidade de mecanismos de efetivação a fim de aplicar a ação de forma material, com vistas à proteção do cidadão.

Pode-se citar a Organização das Nações Unidas (ONU) e suas agências reguladoras, tendo a organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) como principais agentes na produção dessas orientações e incentivadores de tais políticas.

Tratou-se, neste capítulo, especialmente das políticas públicas voltadas à educação, pela sua relevância na concretização do ideário do Estado democrático brasileiro no combate à desigualdade e na promoção do indivíduo.

As questões das políticas públicas estatais, que visam à promoção do desenvolvimento humano e à garantia da plena cidadania dos indivíduos através da educação, articulam-se com políticas internacionais desenvolvidas pelas organizações internacionais, assentadas no direito internacional, para o combate à erradicação do analfabetismo e para a promoção de igualdade.

O tema se mostra complexo no momento em que se verifica a devida adequação dessa orientação internacional ao cenário local, observando os atores pertencentes a esse meio, suas peculiaridades e anseios. Nesse sentido, a atuação do Estado para promover políticas eficazes precisa respeitar a diversidade e as singularidades dos espaços de aplicação.

REFERÊNCIAS

ANGELIN, Rosângela. A Dignidade da Pessoa Humana e sua Promoção: Um Desafio do Estado Democrático de Direito e da Sociedade. *In: Revista Direito e Sociedade: reflexões contemporâneas*, Santa Rosa, v. 1, p. 52-70, 2010.

BOLZAN DE MORAIS, José Luis. *As Crises do Estado e da Constituição e a Transformação Espacial dos Direitos Humanos*. Col. Estado e Constituição. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002.

BONAVIDES, Paulo. *Teoria Geral do Estado*. 4. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2003.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil** [recurso eletrônico]: texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações determinadas pelas Emendas Constitucionais de Revisão nos 1 a 6/94, pelas Emendas Constitucionais nos 1/92 a 85/2015 e pelo Decreto Legislativo no 186/2008. Brasília, DF: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2015. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/508200/CF88_EC85.pdf. Acesso em: 10 de set. 2019.

COSTA, Marli Marlene M. da. A educação como um direito fundamental para pleno exercício da cidadania. *In: REIS, Jorge Renato dos; LEAL, Rogério Gesta. Direitos Sociais e Políticas Públicas, Desafios Contemporâneos*. Tomo 6. Santa Cruz do Sul: Editora da UNISC, 2006.

GARCÍA-PELAYO, Manuel. *As transformações do Estado Contemporâneo*. Trad. de Agassiz Almeida Filho. Rio de Janeiro: Forense, 2009.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU. **Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948**. Disponível em: <http://www.onu.org.br/onu-no-brasil/>. Acesso em: 02 de out. 2019.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU. **Nações Unidas Brasil**. Disponível em: <http://www.onu.org.br/onu-no-brasil/>. Acesso em: 02 de out. 2019.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA - UNESCO. **Não deixar ninguém para trás**. Sem data de publicação [c]. [recurso *online*]. Disponível em: <https://pt.unesco.org/fieldoffice/brasil/inclusive-education>. Acesso em: nov. 2021.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA - UNESCO. **Qualidade e igualdade da educação**. Sem data de publicação [a]. [recurso *online*]. Disponível em: <https://pt.unesco.org/fieldoffice/brasil/education-quality>. Acesso em: nov. 2021.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA - UNESCO. **Educação para o desenvolvimento sustentável**. Sem data de publicação [d]. [recurso *online*]. Disponível em: <https://pt.unesco.org/fieldoffice/brasil/expertise/education-sustainable-development>. Acesso em: nov. 2021.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA - UNESCO. **Educação em Saúde e Bem-Estar no Brasil**. Sem data de publicação [e]. [recurso *online*]. Disponível em: <https://pt.unesco.org/fieldoffice/brasil/expertise/health-education-brazil>. Acesso em: nov. 2021.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA - UNESCO. **Construção de Sistemas Educacionais Sustentáveis**. Sem data de publicação [b]. [recurso *online*]. Disponível em: <https://pt.unesco.org/fieldoffice/brasil/expertise/health-education-brazil>. Acesso em: nov. 2021.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA - UNESCO. **Biblioteca da UNESCO**. 2013. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/library/>. Acesso em: 02 de out. 2019.

PÉREZ LUÑO, Antônio Enrique. **Perspectivas e Tendências Atuais do Estado Constitucional**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012.

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO - PNUD [Brasil]. **Índice de Desenvolvimento Humano**. Atualizado em 2021. Disponível em: <https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/conceitos/introducao.html>. Acesso em: nov. 2021.

SEITENFUS, Ricardo. **Manual das Organizações Internacionais**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008.

SEITENFUS, Ricardo; VENTURA, Deisy. **Direito Internacional Público**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006.

SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE. Observatório Internacional SEBRAE. **PNUD**: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Sem data de publicação. Disponível em: <https://ois.sebrae.com.br/comunidades/pnud-programa-das-nacoes-unidas-para-o-desenvolvimento/>. Acesso em: nov. 2021.

STRECK, Lênio Luiz; BOLZAN DE MORAIS, José Luis. **Ciência Política e Teoria do Estado**. 7. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010.

Capítulo 4

Mecanismos de Participação Popular na Etapa de Formulação de Políticas Públicas no Contexto da Democracia Eletrônica

DOI: <http://dx.doi.org/10.18616/respon04>

André Afonso Tavares

Reginaldo de Souza Vieira

INTRODUÇÃO

A Constituição da República Brasileira, promulgada em 1988, consagrou a democracia como regime político, conforme se depreende da leitura do *caput* do seu artigo inaugural, o qual assinalou o país como Estado Democrático de Direito.

O aludido dispositivo tratou de enfatizar, ainda, em seu parágrafo único, o povo como fonte primária de todo o poder. A manifestação desse poder, por sua vez, dá-se pela via de representação eleitoral ou diretamente.

Sob a ótica da potencialidade da denominada democracia eletrônica ou e-democracia, a qual se vislumbra por meio da utilização de mecanismos eletrônicos de participação popular advindos do uso de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), vislumbra-se a possibilidade de aproximação efetiva do cidadão na etapa de formulação de políticas públicas a serem realizadas pelos entes públicos.

Importante pontuar, desde já, que a participação popular no ciclo das políticas públicas, presencial ou digital, relaciona-se com todos os 17 (dezesse-

Voltar ao Sumário

te) Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) na Agenda 2030, uma vez todos os problemas políticos da sociedade são identificados e resolvidos a partir de planos de políticas públicas, os quais devem ser realizados sempre com a colaboração e interação popular. Dito isso, demonstrar-se-á, ainda, que a participação popular eletrônica ou e-participação se relaciona, de forma mais enfática, com o ODS nº 16, que trata da construção de instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.

O estudo expresso neste capítulo tem como objetivo geral apresentar, dentro de um contexto de democracia eletrônica e legitimação das políticas públicas, os mecanismos de participação popular por meio eletrônico existentes na etapa de formulação de políticas públicas nos municípios de Araranguá, Criciúma e Tubarão. Como objetivos específicos, em um primeiro momento, pretende apresentar os conceitos que envolvem a Democracia Eletrônica, bem como a Participação Popular durante a etapa de formulação das Políticas Públicas. Em momento posterior, buscará expor os mecanismos eletrônicos de participação popular durante a etapa de formulação de políticas públicas existentes nos municípios de Araranguá, Criciúma e Tubarão, SC.

O método utilizado no estudo foi o dedutivo, utilizando-se, para tanto, as técnicas de pesquisa bibliográfica e documental indireta, especialmente com análise da existência e do funcionamento dos recursos disponibilizados pelos portais eletrônicos governamentais mantidos pelos poderes Executivo e Legislativo dos aludidos municípios.

DEMOCRACIA ELETRÔNICA E PARTICIPAÇÃO POPULAR NA ETAPA DE FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E A RELAÇÃO COM OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 consagrou o paradigma da necessidade de participação da sociedade na qualidade de de-

tentor da soberania popular. Assim, transcendendo a tradicional democracia representativa exercida por meio dos partidos políticos, foram estabelecidos mecanismos de exercício semidireto do poder: iniciativa popular, plebiscito e referendo. Contudo, apesar de sua importância, possuem seus exercícios limitados dentro da ótica formalista e monista do sistema jurídico (VIEIRA, 2018).

Inobstante tais limites formais aos mecanismos de iniciativa popular, plebiscito e referendo, segundo Vieira (2018), também foram reconhecidos outros espaços de cidadania, tais como a participação da comunidade na área da saúde, o direito de reunião e associação, o direito à informação em órgãos públicos, o direito de petição e obtenção de certidões em órgãos públicos para a defesa de direitos, a ação popular, a iniciativa popular municipal, a realização de audiências públicas no Congresso Nacional com a participação da sociedade, a possibilidade de um cidadão apresentar denúncias perante o Tribunal de Contas, o recebimento de reclamações da sociedade contra órgãos do Poder Judiciário perante o Conselho de Justiça, o recebimento de reclamações da sociedade contra órgãos do Ministério Público perante o Conselho Nacional do Ministério Público.

O desenvolvimento do Estado do Bem-Estar Social, o modelo liberal e a democracia representativa passaram a dar sinais de desgaste, chegando a uma crise de legitimidade que se reflete nas instituições estatais. Tal modelo de democracia de representatividade surgiu a partir dos estados modernos, após a Segunda Guerra Mundial, apoiado nos ideais de liberalismo econômico. Na Grécia antiga, a democracia tinha como pressuposto básico a participação dos cidadãos nos assuntos da *polis*. Em Roma, a república era vista como a soma dos cidadãos e o Estado eram eles próprios, reunidos enquanto povo. As decisões eram tomadas em assembleias e o interesse público era tutelado por ações populares, na alçada de qualquer cidadão (HERMANY; GIACOBBO, 2016).

Franzolin (2014) escreve que a democracia, nos moldes atuais, não oferece a efetiva participação e realização da cidadania, pois não é apenas no sufrágio e no voto que se concretiza o processo democrático.

Gorczewski e Martin (2012) pontuam que o principal mérito dos movimentos sociais está na sua idoneidade para pôr em destaque as zonas de

penumbra do sistema, as quais se fazem particularmente explícitas no afloramento de necessidades não resolvidas, que intuitivamente se revelam como de maior transcendência para o próprio desenvolvimento pessoal. Os movimentos sociais se apresentam, nesse sentido, como interlocutores diretos da ação política, denunciando a existência de expectativas sensíveis defraudadas pelo sistema, cuja realização poderia definir o pressuposto da própria capacidade de decisão autônoma do sujeito, inabilitando, assim, em sua raiz, qualquer pretensa caracterização democrática.

Nesse contexto, surge a discussão acerca da crise do modelo atual de democracia, atribuída à baixa participação popular resultante do fato de que a maioria dos cidadãos não se sente identificada nem com as propostas, nem com as decisões dos seus representantes políticos, o que desemboca na inadequação da democracia às novas circunstâncias e demandas sociais (SANTOS; BERNARDES; MEZZARROBA, 2010).

Nessa linha de raciocínio, a partir do surgimento de novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), pode-se verificar a transformação, de forma significativa, nos modelos de sociedades democráticas atuais, especialmente no que toca à participação popular no exercício da cidadania, sendo anseios antigos da democracia clássica, que acabaram ficando de lado ao longo dos anos, tal como a participação direta dos cidadãos nos negócios públicos, em razão dessas tecnologias, vem sendo resgatadas, inaugurando um novo marco da democracia: a democracia digital (ANGELO; PAGAN; GUDWIN, 2014).

Segundo Castells (2003, p. 7), há uma mudança na sociedade a partir do advento da internet e das novas tecnologias:

A Internet é o tecido de nossas vidas. Se a tecnologia da informação é hoje o que a eletricidade foi na Era Industrial, em nossa época a Internet poderia ser equiparada tanto a uma rede elétrica quanto ao motor elétrico, em razão de sua capacidade de distribuir a força da informação por todo o domínio da atividade humana. Ademais, à me-

dida que novas tecnologias de geração e distribuição de energia tornaram possível a fábrica e a grande corporação como os fundamentos organizacionais da sociedade industrial, a Internet passou a ser a base tecnológica para a forma organizacional da Era da Informação: a rede.

A partir disso, percebe-se um crescente tanto na seara pública quanto na privada acerca da utilização das tecnologias e dos recursos da informação e comunicação com a finalidade de melhoria na gestão e na comunicação, além da prestação de serviços.

Na seara pública, a utilização dos recursos tecnológicos pelos entes públicos em suas estruturas governamentais passou a ser cunhada de governo eletrônico, o qual, segundo explica Rover (2006, p. 99), teria duas faces – de acordo com o ponto de vista do Estado ou da sociedade:

Governo eletrônico é uma infraestrutura única de comunicação compartilhada por diferentes órgãos públicos a partir da qual a tecnologia da informação e da comunicação é usada de forma intensiva para melhorar a gestão pública e o atendimento ao cidadão. Assim, o seu objetivo é colocar o governo ao alcance de todos, ampliando as transparências das suas ações e incrementando a participação cidadã.

O Governo Eletrônico tem duas faces. Do ponto de vista do Estado é uma forma puramente instrumental de administração das funções do Estado (Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário) e de prestação dos serviços públicos. Do ponto de vista da sociedade é uma das formas de realização dos fins estabelecidos pelo Estado Democrático de Direito, utilizando as novas tecnologias da informação e comunicação como instrumento de interação com os cidadãos.

Vislumbra-se, nesse diapasão, a partir da democracia eletrônica e das facetas do governo eletrônico, a possibilidade de aproximação efetiva do cidadão na

etapa de formulação de políticas públicas a serem realizadas pelos entes públicos. Mas o que se entende por políticas públicas e como elas se formam?

Em geral, as definições de políticas públicas buscam enfatizar o seu papel enquanto solucionadora de problemas (SOUZA, 2003).

Schmidt (2008), ao analisar as principais definições de políticas públicas dadas pela literatura, destaca a importância de compreendê-las como conjunto orientador da atividade estatal, de forma a amenizar os efeitos da descontinuidade administrativa decorrente do regime democrático, a partir da adoção de legislações específicas, de um tratamento mais técnico das políticas e da participação de setores sociais na sua formulação.

A formação das políticas públicas perpassa por algumas fases ou ciclo de formação. Conforme escreve Schmidt (2008), pode-se identificar cinco fases no ciclo das políticas públicas na seguinte ordem: percepção e definição de problemas; inserção na agenda política; formulação; implementação; e avaliação.

O presente trabalho buscou analisar a participação popular na fase de formulação das políticas públicas. Tal etapa é processada na esfera dos Poderes Legislativo e Executivo, sendo a ocasião em que se define como serão resolvidos os problemas políticos em pauta, bem como quais alternativas serão adotadas. É um momento que envolve conflitos, negociações e acordos entre os agentes que possuem poder de decisão e os grupos sociais interessados (SCHIMIDT, 2008).

A partir disso, denota-se a importância da participação da sociedade na gestão pública e na formulação das políticas públicas a fim que todos possam contribuir e envolver-se na solução dos problemas de um bairro, de uma cidade, de um estado ou país.

A participação popular eletrônica no ciclo das políticas públicas se relaciona, sem dúvida, com os objetivos definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)¹, uma vez que a interação popular, a transparência das informações

1 Os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) são compostos por 17 itens e junto com mais 169 metas fazem parte da Agenda 2030, que foi definida pela ONU em 2015

públicas, a abertura dos canais de comunicação e participação contribuem para a construção de instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis (ODS16), atingindo-se, dentre outros pontos fixados, a garantia de tomada de decisões responsivas, inclusivas, participativas e representativas em todos os níveis (16.7); a ampliação e o fortalecimento da participação dos países em desenvolvimento nas instituições de governança global (16.8); e a garantia do acesso público à informação (16.10)².

Entende-se, ainda, que a participação popular, por lidar com o trato da sociedade nas diversas áreas de políticas públicas e nos mais diversos problemas nela existentes, acaba por se relacionar com todos os ODS definidos pela ONU, na medida em que todos eles são assuntos de interesse da sociedade, os quais devem ser pensados em conjunto por meio da participação, da interação e da transparência, seja por meio físico ou presencial, seja por meio eletrônico ou digital.

Desse modo, passa-se a analisar, a seguir, o objeto da presente pesquisa, isto é, os mecanismos digitais em prol da participação popular na etapa de formulação de políticas públicas existentes nos municípios de Araranguá, Criciúma e Tubarão, no estado de Santa Catarina.

MECANISMOS ELETRÔNICOS DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA ETAPA DE FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EXISTENTES NOS MUNICÍPIOS DE ARARANGUÁ, CRICIÚMA E TUBARÃO, SC

Os mecanismos eletrônicos que serão objetos de análise, a seguir, foram extraídos dos sítios eletrônicos dos Poderes Legislativo e Executivo de cada um dos municípios analisados.

como plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade, com o intuito de, dentre outros, buscar fortalecer a paz universal com mais liberdade (NAÇÕES UNIDAS, s.d.). Disponível em: <https://nacoesunidas.org/pos2015/>. Acesso em: 26 mar. 2020.

2 O objetivo nº 16 dos ODS da ONU é composto por 12 itens (NAÇÕES UNIDAS, s.d.). Disponível em: <https://nacoesunidas.org/pos2015/ods16/>. Acesso em: 26 mar. 2020.

É certo que a construção de sítios eletrônicos obedece à determinada padronização de *layout* e de mecanismos de participação e interação, contudo, o objetivo da pesquisa é justamente demonstrar esse cenário atual de forma científica e, a partir disso, desenhar novos horizontes de e-participação nesses sítios eletrônicos.

Ao final, serão apresentadas algumas colaborações que poderão auxiliar esse cenário, mas que, certamente, não esgotarão (nem temos essa intenção) as possibilidades a partir de técnicas de engenharia de *software*.

MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ, SC

No âmbito do Poder Executivo, o município de Araranguá, SC, hospeda seu sítio eletrônico por meio do domínio <https://www.ararangua.sc.gov.br/> e oferece por meio do acesso ao menu localizado no campo superior do *website* os seguintes submenus: município, governo, transparência, notícias, portal do cidadão, carta de serviços, turismo e contato.

Após uma busca detalhada no aludido sítio eletrônico, não encontramos relevantes formas de participação popular na formulação de políticas públicas. As informações disponibilizadas possuem apenas intuito informativo e não interativo. Encontramos uma singela opção no menu “governo” e no submenu “fale com a prefeitura”, o qual oferece um *link* para preenchimento de formulário correspondente ao fornecimento de informações, além do recebimento de críticas, sugestões e elogios. Entretanto, quando acessamos o referido *link* (<https://gpm.fecam.org.br/ararangua/contatos/index/index/cod-MapaItem/4499>) em 26 de julho de 2019, não se verificou exatamente a abertura de um formulário, mas sim de uma página de contato contendo telefones das secretarias e dos demais órgãos municipais. Portanto, no âmbito do Poder Executivo, não se constatou no mencionado sítio eletrônico nenhum mecanismo eletrônico que possibilite a participação popular na etapa de formulação das políticas públicas.

Quanto ao Poder Legislativo, a Câmara do município hospeda seu sítio eletrônico por meio do domínio <https://www.cmva.sc.gov.br/> e oferece por meio de acesso ao menu localizado no campo superior do *website* os seguintes submenus: a câmara, vereadores, proposições, legislação, publicações, transparência e atendimento.

Após pesquisa no *website*, registra-se a existência da opção “TV Câmara” por meio do *link* <<https://www.cmva.sc.gov.br/tvcamara>>, que oferece a possibilidade de o cidadão assistir às sessões ao vivo e às que foram realizadas.

Contudo, tais opções possuem caráter apenas informativo, mas não participativo ou interativo, uma vez que não oferecem ao cidadão a possibilidade de envio de participações durante a realização da sessão.

Há no sítio eletrônico a possibilidade de realizar pedidos de acesso a informações ou envio de sugestões, reclamações, solicitações, denúncias e elogios para a Ouvidoria por meio de formulário eletrônico disponível no *link* <<https://www.cmva.sc.gov.br/camara/ouvidoria>>.

Registra-se, além disso, a disponibilização das pautas das sessões já realizadas, bem como as proposições e as matérias em tramitação na Casa Legislativa. Apesar disso, não encontramos nenhum mecanismo eletrônico de participação popular na etapa de formulação das políticas públicas no âmbito do município, sendo as opções destacadas de caráter meramente informativo e não participativo ou interativo.

A tabela 1, abaixo, sintetiza a análise realizada acima quanto à existência dos mecanismos eletrônicos de participação popular nos sítios eletrônicos mantidos pelos poderes executivo e legislativo do município de Araranguá, SC:

Tabela 1 – Mecanismos eletrônicos de participação popular existentes nos portais de transparência dos poderes Executivo e Legislativo do município de Araranguá, SC

MECANISMOS ELETRÔNICOS DE PARTICIPAÇÃO POPULAR	PODER EXECUTIVO	PODER LEGISLATIVO
Formulário para envio de sugestões ou críticas	Menciona, mas não está em funcionamento	Existe
Página para acompanhamento de sugestões e <i>feedback</i> do ente público	Não existe	Não existe
Transmissão <i>online</i> de sessões e gravação daquelas já realizadas	Não existe	Existe, porém sem interação
Envio e <i>feedback</i> de proposições legislativas enviadas por cidadãos	Não existe	Não existe

Fonte: Elaborada a partir de pesquisa feita nos sítios eletrônicos dos Poderes Executivo e Legislativo de Araranguá, SC.

MUNICÍPIO DE CRICIÚMA, SC

O município, no âmbito do Poder Executivo, hospeda seu sítio eletrônico por meio do domínio <http://www.criciuma.sc.gov.br/site/> e oferece por meio de acesso ao menu localizado no campo superior do *website* os seguintes submenus: Diário Oficial, licitações/editais, notícias, serviços.

O submenu serviços, por sua vez, localizado no campo inferior do *website*, oferece as seguintes opções: destaques, cidadão, empresa, educação, saúde, transporte e todos.

Dentre as opções contidas no submenu serviços, encontramos diversas opções informativas quanto aos serviços públicos oferecidos pela rede municipal, contudo, assim como no município de Araranguá, são opções meramente informativas e não interativas.

O canal da Ouvidoria encontrado no sítio eletrônico permite o contato apenas por telefone ou por *e-mail*, ou seja, não oferece nenhum mecanismo ou formulário de preenchimento direto pelo sítio eletrônico.

Portanto, não se observou, no mencionado sítio eletrônico referente à esfera do Poder Executivo, nenhum mecanismo eletrônico que possibilite a participação popular na etapa de formulação das políticas públicas.

Já no âmbito Legislativo, a Câmara do município hospeda seu sítio eletrônico por meio do domínio <https://www.camaracriciuma.sc.gov.br/> e oferece por meio de acesso ao menu localizado no campo superior do *website* os seguintes submenus: a câmara, vereadores, sessões, leis, normas e processos e fale conosco.

De forma análoga ao que encontramos no sítio da Câmara Municipal de Araranguá, o sítio da Câmara de Criciúma oferece, a maior parte, opções informativas quanto às sessões, aos projetos e à organização.

Contudo, ressalta-se a diferenciação no canal Ouvidoria disponibilizado por meio do *link* <<https://www.camaracriciuma.sc.gov.br/ouvidoria>>, o qual oferece, além da opção de envio de sugestões e reclamações, a possibilidade de acompanhar as contribuições públicas realizadas por outros cidadãos, bem como a resposta do ente legislativo à respectiva contribuição, inclusive aquelas referente aos pedidos de informação.

Entretanto, no tocante à participação popular na etapa de formulação de políticas públicas, não encontramos nenhum mecanismo de participação direta pelo cidadão.

A tabela 2, abaixo, elucida a análise realizada acima quanto à existência dos mecanismos eletrônicos de participação popular nos sítios eletrônicos mantidos pelos poderes executivo e legislativo do município de Criciúma, SC:

Tabela 2 – Mecanismos eletrônicos de participação popular existentes nos portais de transparência dos poderes Executivo e Legislativo do município de Criciúma, SC

MECANISMOS ELETRÔNICOS DE PARTICIPAÇÃO POPULAR	PODER EXECUTIVO	PODER LEGISLATIVO
Formulário para envio de sugestões ou críticas	Não existe	Existe
Página para acompanhamento de sugestões e <i>feedback</i> do ente público	Não existe	Existe
Transmissão <i>online</i> de sessões e gravação daquelas já realizadas	Não existe	Existe, porém sem interação
Envio e <i>feedback</i> de proposições legislativas enviadas por cidadãos	Não existe	Não existe

Fonte: Elaborada a partir de pesquisa feita nos sítios eletrônicos dos Poderes Executivo e Legislativo de Criciúma/SC.

MUNICÍPIO DE TUBARÃO, SC

O município de Tubarão, SC, no Poder Executivo, hospeda seu sítio eletrônico por meio do domínio <https://www.tubarao.sc.gov.br/> e oferece por meio de acesso ao menu localizado no campo superior do *website* os seguintes submenus: município, governo, transparência, notícias, carta de serviços, turismo e contato.

A partir de busca no sítio eletrônico acima, foi possível encontrar por meio do submenu “carta de serviços” alguns serviços destinados ao cidadão, por meio do *link* de acesso <https://www.tubarao.sc.gov.br/servicos/index/listagem/perfil/1>, e entre eles se destacam alguns que possuem condão de interação: solicitação de melhorias (infraestrutura).

Ocorre que quando entramos na opção oferecida, o sítio direciona o usuário para outra página contendo as opções “registrar uma dúvida, recla-

mação ou sugestão”, por meio do *link* <https://www.tubarao.sc.gov.br/servicos/index/duvida>.

Em outra parte do sítio eletrônico, verifica-se uma página denominada “Audiência pública – sugestões”, por meio do *link* <https://www.tubarao.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/83706>, a qual foi publicada em 24 de agosto de 2016 e teve sua última atualização em 02 de setembro de 2016.

Aludida página informa que seria realizada uma audiência pública para a comunidade apresentar sugestões para LDO e LOA de 2017, a qual seria realizada de forma digital.

As sugestões deveriam ser enviadas por meio de um formulário próprio, pelo *link* de acesso https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL-SdMMMq_nw8SaIj86kJtksp0hOtmc-Ffs67z74e_Yzu7aH-5sQ/viewform, no qual foram colocadas algumas questões ao cidadão, tais como “Na sua opinião, quais seriam as três prioridades para o seu bairro ou região?”, bem como oferece um campo para a escrita livre, denominado “sugestões”.

Tal formulário foi utilizado para a elaboração da LDO e da LOA de 2017, contudo, não se observou a disponibilização desse mecanismo nos anos seguintes, bem como não foi possível avaliar a real consideração das participações enviadas naquela época pelos atores políticos e definidores das políticas públicas.

Desse modo, em que pese a existência de algumas tentativas de possibilitar a interação do município com o cidadão, também não se verificou no aludido sítio eletrônico nenhum mecanismo eletrônico atualizado que possibilite a participação popular na etapa de formulação das políticas públicas.

Já no Poder Legislativo, a Câmara do município hospeda seu sítio eletrônico por meio do domínio <http://www.camaratubarao.sc.gov.br/> e oferece por meio de acesso ao menu localizado no campo superior do *website* os seguintes submenus: história, vereadores, notícias, transparência e fale conosco.

Realizada a pesquisa acerca dos mecanismos que possibilitariam uma interação do cidadão com a etapa de formulação das políticas públicas, não obtivemos resultado.

O sítio eletrônico oferece opções análogas aos demais sítios eletrônicos, de cunho mais informativo, sendo que o canal de Ouvidoria apenas disponibiliza formulário eletrônico para envio de reclamações, críticas, sugestões e consultas.

Assim, não se encontra nenhum mecanismo eletrônico de participação popular na etapa de formulação das políticas públicas no âmbito do município, sendo as opções destacadas de caráter meramente informativo e não participativo ou interativo.

A tabela 3, abaixo, resume a análise realizada acima quanto à existência dos mecanismos eletrônicos de participação popular nos sítios eletrônicos mantidos pelos poderes Executivo e Legislativo do município de Tubarão, SC:

Tabela 3 – Mecanismos eletrônicos de participação popular existentes nos portais de transparência dos poderes Executivo e Legislativo do município de Tubarão, SC

MECANISMOS ELETRÔNICOS DE PARTICIPAÇÃO POPULAR	PODER EXECUTIVO	PODER LEGISLATIVO
Formulário para envio de sugestões ou críticas	Existe, porém não de forma específica	Existe
Página para acompanhamento de sugestões e <i>feedback</i> do ente público	Não existe	Não existe
Transmissão <i>online</i> de sessões e gravação daquelas já realizadas	Não existe	Existe, porém sem interação
Envio e <i>feedback</i> de proposições legislativas enviadas por cidadãos	Existiu, porém está desatualizado e sem <i>feedback</i> na página	Não existe

Fonte: Elaborada a partir de pesquisa feita nos sítios eletrônicos dos Poderes Executivo e Legislativo de Tubarão, SC.

CONCLUSÕES

O presente capítulo teve por objetivo geral apresentar, dentro de um contexto de democracia eletrônica e legitimação das políticas públicas, os mecanismos de participação popular por meio eletrônico existentes na etapa de formulação de políticas públicas nos municípios de Araranguá, Criciúma e Tubarão.

Em um primeiro momento, apresentaram-se os conceitos que envolvem a Democracia Eletrônica, bem como a Participação Popular durante a etapa de formulação das Políticas Públicas.

Demonstrou-se, ainda, que a temática da presente pesquisa se relaciona com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pela ONU na Agenda 2030, em especial com o de número 16 (dezesesseis), que trata da construção de instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.

Em um segundo momento, buscou-se expor os mecanismos de participação popular durante a etapa de formulação de políticas públicas existentes nos sítios eletrônicos dos municípios de Araranguá, Criciúma e Tubarão.

No município de Araranguá, SC, na esfera do Poder Executivo, não se constatou nenhum mecanismo eletrônico que possibilite a participação popular na etapa de formulação das políticas públicas. Da mesma forma, no Poder Legislativo, não se encontrou nenhum mecanismo eletrônico de participação popular na etapa de formulação das políticas públicas no âmbito do município, sendo as opções destacadas de caráter meramente informativo e não participativo ou interativo.

Já no município de Criciúma, SC, no âmbito do Executivo, não se verificou no mencionado sítio eletrônico nenhum mecanismo eletrônico que possibilite a participação popular na etapa de formulação das políticas públicas. Já na esfera do Poder Legislativo, embora o seu canal de Ouvidoria seja diferenciado em relação aos demais, pois permite o acompanhamento das

contribuições públicas realizadas pelos cidadãos, inclusive acerca da resposta dada pelo Ente, quanto à participação popular na etapa de formulação de políticas públicas, não encontramos nenhum mecanismo de participação direta pelo cidadão.

Na análise do município de Tubarão, SC, na seara do Poder Executivo, em que pese a existência de algumas tentativas de trazer interação do município com o cidadão, também não se verificou no aludido sítio eletrônico nenhum mecanismo eletrônico atualizado que possibilite a participação popular na etapa de formulação das políticas públicas. Já no Poder Legislativo, não se registrou nenhum mecanismo eletrônico de participação popular na etapa de formulação das políticas públicas no âmbito do município, sendo as opções destacadas de caráter meramente informativo e não participativo ou interativo.

Assim, a partir da pesquisa realizada, foi possível diagnosticar, no contexto da democracia eletrônica, a inexistência de atuais mecanismos de participação popular na etapa de formulação de políticas públicas nos sítios eletrônicos dos municípios de Araranguá, Criciúma e Tubarão, tanto no Poder Executivo quanto no Legislativo, sendo necessária uma revisão do modelo de sítios eletrônicos adotados pelos municípios a fim de mudar a postura meramente informativa para uma postura interativa entre governantes e governados.

Percebe-se, ante todo o exposto, que os mecanismos de participação eletrônica disponíveis nos municípios analisados refletem um ambiente de pouca interação e com objetivo maior de informar.

A experiência revela que a amostra aqui trazida reflete a grande maioria dos municípios brasileiros, os quais não desenharam portais eletrônicos com interação. A engenharia de *software* traz inúmeras possibilidades para mudar esse cenário, desde a possibilidade de criar um ambiente virtual de debate e registro de proposições acerca das políticas públicas até a transformação da própria administração pública a partir da tecnologia, o que se denominou governo eletrônico.

Nessa linha, a partir da pesquisa ora realizada, entende-se que se pode pensar, cientificamente, em mudanças nos atuais portais eletrônicos a fim

de que, a partir da interlocução com a engenharia de *software*, tais ambientes digitais possam abranger e oferecer espaço de interação que, por conseguinte, possibilite a participação popular no ciclo das políticas públicas.

REFERÊNCIAS

ANGELO, Tiago Novaes; PAGAN, Cesar Bonjuani; GUDWIN, Ricardo Ribeiro. Das praças gregas à ágora virtual: um panorama histórico da democracia digital. **Democracia Digital e Governo Eletrônico**, Florianópolis, n. 11, p. 3-24, 2014.

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ. **Portal do Poder Legislativo do Município de Araranguá/SC**. Disponível em: <https://www.cmva.sc.gov.br/>. Acesso em: 06 jul. 2019.

CÂMARA MUNICIPAL DE CRICIÚMA. **Portal do Poder Legislativo do Município de Criciúma/SC**. Disponível em: <https://www.camaracriciuma.sc.gov.br/>. Acesso em: 08 jul. 2019.

CÂMARA MUNICIPAL DE TUBARÃO. **Portal do Poder Legislativo do Município de Tubarão/SC**. Disponível em: <http://www.camaratubarao.sc.gov.br/>. Acesso em: 09 jul. 2019.

CASTELLS, Manuel. **A galáxia da internet**: reflexões sobre a internet, os negócios e a sociedade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.

FRANZOLIN, Cláudio José. Teledemocracia: a democracia numa sociedade em rede como forma periférica de participação de novos sujeitos e de construção de novos direitos. **Revista Faculdade de Direito Sul de Minas**, Pouso Alegre, v. 29, n. 2, p. 339-364, jul./dez. 2013.

GORCZEWSKI, Clovis; MARTÍN, Nuria Belloso. **A necessária revisão do conceito de cidadania**: movimentos sociais e novos protagonistas na esfera

pública democrática. [recurso eletrônico]. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2011. Disponível em: www.unisc.br/edunisc. Acesso em: 15 out. 2018.

HERMANY, Ricardo; GIACOBBO, Guilherme Estima. Democracia representativa e crise de legitimidade: o potencial de subsidiariedade no fortalecimento da democracia administrativa. In: *SEMINÁRIO INTERNACIONAL DEMANDAS SOCIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA*, 13., e *MOSTRA INTERNACIONAL DE TRABALHOS CIENTÍFICOS*, 9., 2016, Santa Cruz do Sul. *Anais...* Santa Cruz do Sul: UNISC, 2016. 16 p. ISSN 2358-3010.

MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ. **Portal do Poder Executivo do Município de Araranguá/SC**. Atualizado em 2019. Disponível em: <https://www.ararangua.sc.gov.br/>. Acesso em: 10 jul. 2019.

MUNICÍPIO DE CRICIÚMA. **Portal do Poder Executivo do Município de Criciúma/SC**. Atualizado em 2019. Disponível em: <http://www.criciuma.sc.gov.br/site/>. Acesso em: 11 jul. 2019.

MUNICÍPIO DE TUBARÃO. **Portal do Poder Executivo do Município de Tubarão/SC**. Atualizado em 2019. Disponível em: <https://www.tubarao.sc.gov.br/>. Acesso em: 07 jul. 2019.

NAÇÕES UNIDAS [BRASIL]. **17 objetivos para transformar nosso mundo: ODS 16**. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/pos2015/ods16/>. Acesso em: 26 mar. 2020.

ROVER, Aires José. A democracia digital possível. *Revista Sequência*, [s.l.], n. 52, p. 85-104, jul. 2006.

SANTOS, Paloma Maria; BERNARDES, Marciele Berger; MEZZARROBA, Orides. E-democracia: possibilidades e a experiência brasileira frente aos novos sistemas. In: MEZZARROBA, Orides; GALINDO, Fernando (Eds.). **Democracia Eletrônica**. *Lefis Séries 11*. Zaragoza: Prensas Universitárias de Zaragoza, 2010, p. 53-71.

SCHMIDT, João Pedro. Para estudar políticas públicas: aspectos conceituais, metodológicos e abordagens teóricas. **Revista do Direito**, Santa Cruz do Sul, v. 3, n. 56, p. 119-149, set. 2018.

SOUZA, Celina. “Estado da arte” da área de políticas públicas: conceitos e principais tipologias. *In*: ENCONTRO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM CIÊNCIAS SOCIAIS, 27., 2003, Caxambu. **Anais...** Caxambu, MG: ANPOCS, 2003. Disponível em <https://www.anpocs.com/index.php/papers-27-encontro-2/gt-24/gt14-16/4232-c-souza-estado-da/file>. Acesso em: 05 ago. 2019.

VIEIRA, Reginaldo de Souza. **A cidadania na república federativa: pressupostos para a articulação de um novo paradigma jurídico e político para os conselhos de saúde**. 2013. 540 f. Tese (Doutorado em Direito) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2013.

Capítulo 5

Reconstruções Femininas Pós-Solvência Conjugal: Na Perspectiva das Práticas Colaborativas

DOI: <http://dx.doi.org/10.18616/respon05>

Jamile Garcia De Lucca

Ana Paula Costa

Camila de Bona

INTRODUÇÃO

No decorrer de processos que finalizam um relacionamento conjugal, as mulheres frequentemente vivenciam discursos dominantes que provocam intensos desconfortos internos e externos marcados no seu Eu (*self*), na família e na sociedade e que implicam uma mudança de identidade a qual envolve se redefinir em relação às suas famílias de origem, a seu círculo social e à sociedade em geral, surgindo, então, a necessidade da busca de uma resolução adequada de conflitos, que se dissocie do sistema tradicional de litígios, partindo do estudo multifatorial do conflito.

Dentre as situações que emergem com o término de um relacionamento conjugal, tem-se que a ausência de autonomia econômica da mulher, bem como o abalo psicológico, mostram-se como fatores-chave que determinam o processo de reconstrução, compreendido, também, como de ordem jurídica.

Definitivamente, não é possível limitar os efeitos do término de um relacionamento conjugal como algo que acontece apenas no mundo jurídico, mas sim com a pessoa como um todo. Nesse norte, é importante pensar a

Voltar ao Sumário

partir da complexidade humana – ideia defendida por Edgar Morin –, reintegrando todas as formas do saber. Daí o porquê da necessidade de um olhar interdisciplinar, com a transferência de saberes de um profissional a outro, unindo várias áreas de conhecimentos.

Nesse sentido, as práticas colaborativas se apresentam como um método adequado na transformação de conflitos, com características não adversarial e interdisciplinar, que envolvem, além dos advogados colaborativos, o trabalho em conjunto de profissionais da área da saúde mental (psicólogo ou psiquiatra), da área de finanças, entre outros.

Concentra-se, portanto, na construção conjunta em prol de um acordo entre as partes, de modo que tal prática seja pautada em auxiliar os envolvidos a serem protagonistas e corresponsáveis.

Assim, o problema central deste capítulo traz o seguinte questionamento: como as práticas colaborativas podem contribuir para a nova perspectiva de vida das mulheres quando do término de um relacionamento conjugal, considerando os aspectos não só jurídicos, mas também econômicos e emocionais?

A hipótese formulada versa no sentido de que as práticas colaborativas podem atuar tanto como meio para a autonomia econômica das mulheres quanto para a sua formação pessoal, levando-se em consideração o trabalho em conjunto de profissionais de diversas áreas na construção de acordos que possibilitem um término de relacionamento conjugal menos traumático, mais humanizado e que apresente uma perspectiva de autonomia econômica viável.

A análise dos resultados trabalhados na pesquisa percorrerá duas etapas: na primeira, traremos uma breve delimitação do que se percebe por família, a problemática relacionada à dependência econômica das mulheres em relação a seu cônjuge/companheiro, com enfoque na divisão sexual do trabalho, bem como nos aspectos emocionais que frequentemente emergem com o fim do relacionamento conjugal. Já na segunda etapa, traremos a temática relacionada ao conceito de práticas colaborativas para, então, no terceiro momento, trazê-las como meio de reconstrução legal, econômica e pessoal para as mulheres.

Para tanto, será aqui utilizado o método de abordagem dedutivo, na medida em que o estudo se constituiu da análise, incorporação e interpretação de conceitos teóricos de notórios autores. Além disso, empregaremos o método de procedimento monográfico e a técnica de pesquisa bibliográfica.

A FAMÍLIA, A POSIÇÃO DAS MULHERES E O TÉRMINO DO RELACIONAMENTO CONJUGAL: ASPECTOS ECONÔMICOS E EMOCIONAIS

A complexidade atual da família é tal que é muito difícil chegar a uma definição concreta que reflita a variedade de modelos existentes na medida em que o conceito de família implica aspectos biológicos, sociológicos, psicológicos, antropológicos e legais, variando de uma cultura para outra. Decorrente disso, renovam-se as configurações familiares como algo que naturalmente ocorre com os novos arranjos de relacionamento.

No olhar da sociologia, os seres humanos, em sua formação como entidades sociais, têm relações estruturadas que permitiram não apenas a sobrevivência, mas também a possibilidade de moldar e desenvolver sociedades como elas existem hoje. Nessas sociedades, os indivíduos desenvolvem suas vidas em grupos familiares compostos de sistemas de parentesco e cultura.

Na perspectiva psicológica, a família tem um grande papel em termos de desenvolvimento da personalidade humana, entendida como uma rede de pessoas que compartilham um projeto de vida em longo prazo, através do qual nela são geradas fortes relações de intimidade e dependência emocional.

No direito, em particular, no Brasil da época do Código Civil de 1916, a família era eminentemente matrimonializada, só existindo legalmente e socialmente quando advinda do casamento válido e eficaz, porquanto qualquer outra forma de arranjo familiar era marginalizada e quando um homem e uma mulher constituíssem um concubinato, seus escassos efeitos jurídicos seriam dirimidos no âmbito do direito das obrigações, pois eram comparados aos das sociedades de fato (MADALENO, 2013, p. 31).

Ainda, no antigo código, os filhos havidos fora do casamento eram considerados ilegítimos, a mulher era considerada inferior ao homem, o matrimônio era permitido somente para pessoas de sexos diversos, além do fator da culpa ao outro como motivação para a dissolução do matrimônio (AZAMBUJA, 2018).

Gloriosamente, tais arranjos familiares passaram a perder o caráter de marginalizados com a edição da Carta Magna de 1988, a qual ampliou os vários tipos existentes de núcleos familiares, não mais baseados somente no matrimônio ou na união estável.

Maria Berenice Dias pronuncia que:

O seu principal papel é de suporte emocional do indivíduo, em que há flexibilidade e, indubitavelmente, mais intensidade no que diz respeito a laços afetivos. Difícil encontrar uma definição de família de forma a dimensionar o que, no contexto social dos dias de hoje, se insere nesse conceito. É mais ou menos intuitivo identificar família com a noção de casamento, ou seja, pessoas ligadas pelo vínculo do matrimônio. Também vem à mente a imagem da família patriarcal, o pai como figura central, na companhia da esposa e rodeado de filhos, genros, noras e netos. Essa visão hierarquizada da família, no entanto, sofreu, com o tempo, enormes transformações (2018, p. 42).

Se em sua constituição inicial a família medieval se apresentava como uma realidade moral e social e que pouco contemplava sentimento, tampouco a dissolução, a família contemporânea ou pós-moderna propõe uma nova base de constituição, que se funda no afeto, no companheirismo e nos objetivos comuns. Quando eles acabam, a indissolubilidade outrora característica não mais persiste (CÚNICO; ARPINI, 2013, *online*, n.p.).

“Em outros termos, os papéis e princípios hierárquicos de pai provedor e mãe socializadora, abrem espaço para posturas mais individualistas

e igualitárias dentro do ambiente familiar” (KEHL; SILVA *apud* CÚNICO; ARPINI, 2013, *online*, n.p.).

Cada família é única e diferente, não só para relacionamentos, papéis e o número de pessoas que a formam, mas também pelas atividades ou a maneira como são organizadas e planejadas, sendo muito mais do que uma unidade legal e social, a família é, acima de tudo, uma comunidade de amor, afeto e solidariedade.

Embora ausente o laço estritamente matrimonial, não há o que se falar da não existência de uma entidade familiar, uma vez que essa se expandiu ao se adequar às novas necessidades humanas construídas pela sociedade. A família matrimonializada, patriarcal, heteroparental cedeu lugar para uma família plural, democrática, igualitária, monoparental, hétero ou homoparental, construída na base do afeto e de caráter instrumental (MADALENO, 2013, p. 32).

Ainda que os arranjos familiares venham se alterando, o foco de análise deste estudo se direciona ao modelo de família tradicional, formado em sua base por um homem e uma mulher que contraem matrimônio ou convivem em regime de união estável, isso em virtude do elemento de análise delimitado se referir à divisão sexual do trabalho e aos seus reflexos quando do término do relacionamento conjugal.

Para Fleck e Wagner (2003, *online*, n.p.):

O modelo da família tradicional de classe média brasileira, que consagrava uma divisão clara de papéis, em que geralmente o homem se envolvia com o trabalho remunerado, enquanto a mulher dedicava-se aos afazeres da vida familiar, incluindo a administração da casa e os cuidados com os filhos, passa a não ser mais tão comum em nossa realidade como no século XIX e início do século XX.

Desde a década de 70, o arranjo tradicional familiar onde o homem era o único provedor financeiro vem se alterando em virtude de as mulheres alcançarem maior grau de escolaridade e mesmo em decorrência de processos emancipatórios difundidos pelo movimento feminista. Nesse sentido, dados do IBGE relativos ao censo de 2010 apontaram que enquanto os homens contribuíam com 59,1% da renda familiar, as mulheres contribuíam com 40,9% (IBGE, 2010).

Uma menor contribuição das mulheres na renda familiar é proporcional a uma menor renda percebida, visto que a exploração da força de trabalho atua sobre as mulheres de forma distinta a dos homens. Os estudos sobre o tema delimitaram a teorização chamada divisão sexual do trabalho, iniciados nos anos 70, na França, cujo debate contemporâneo foca em questões como dupla jornada de trabalho, igualdade salarial entre homens e mulheres e informalidade e formalidade nas relações de trabalho.

O trabalho exercido pelas mulheres dentro da divisão sexual do trabalho remete a uma diferenciação que pode ser profissional e doméstica, formal e informal, remunerada e não remunerada (HIRATA, 2010). O trabalho doméstico é aquele que as mulheres fornecem gratuitamente, que está envolvido na criação dos filhos e no cotidiano das atividades domésticas (BIROLI, 2016). Também algumas mulheres são submetidas a uma dupla jornada de trabalho na medida em que o trabalho doméstico é somado à realização do trabalho profissional, o que acarreta quantidade de horas trabalhadas superior ao que um homem perfaz.

Tanto é que dados auferidos por meio da PNAD Contínua 2018¹ indicaram que naquele ano as mulheres dedicaram em média 21,3 horas por semana com afazeres domésticos e cuidados com pessoas. Por sua vez, os ho-

1 Divulgada em 26 de abril de 2019 e atualizada em 31 de maio 2019, a PNAD Contínua “É uma pesquisa por amostra probabilística de domicílios, de abrangência nacional, planejada para atender a diversos propósitos. Visa produzir informações básicas para o estudo do desenvolvimento socioeconômico do País e permitir a investigação contínua de indicadores sobre trabalho e rendimento. A PNAD Contínua segue um esquema de rotação de domicílios. Isso significa que cada domicílio selecionado será entrevistado cinco vezes, uma vez a cada trimestre, durante cinco trimestres consecutivos” (IBGE, 2018, n.p.).

mens dedicaram 10,9 para as mesmas tarefas. Ainda mais, as mulheres que exerceram atividade laboral fora do ambiente doméstico dedicaram em média 8,2 horas semanais a mais nas ocupações domésticas que os homens que também exerceram atividade laboral fora do domicílio.

Por fim, levantamentos da mesma pesquisa apontaram que as mulheres, considerada a idade entre 25 e 49 anos, tiveram remuneração em média 20,5% inferior que a dos homens.

Portanto, ainda que as mulheres, por vezes, não dependam economicamente de seus maridos/companheiros de forma completa, os reflexos de uma possível diminuição de renda experimentados com o término do relacionamento conjugal se mostram um fator que merece atenção no processo de reconstrução pessoal da mulher.

Não obstante, há aspectos mais dolorosos e que demandam maior complexidade na resolução com o término do relacionamento conjugal e que se relacionam com os sentimentos que emergem da situação, pois “A separação não é só o fim de uma união material, mas também a quebra de vínculos, de laços emotivos, sexuais e afetivos, criados” (MARCONDES; TRIERWEILER; CRUZ, 2006, *online*, n.p.).

Nessa situação, não há legalidade que possa solucionar a situação por uma determinação de uma terceira pessoa, como seria, por exemplo, em uma decisão judicial sobre pagamento de pensão alimentícia ou divisão de bens. Como algo pessoal, subjetivo e cuja intensidade e duração variam em cada pessoa, a utilização de práticas colaborativas se apresenta como uma forma de amparo e reconstrução pessoal para uma mulher que passa pelo processo de término de um relacionamento conjugal e cujos efeitos emocionais e financeiros também persistem.

PRÁTICAS COLABORATIVAS: UM OLHAR DINÂMICO

O divórcio e a dissolução de união estável litigiosos são tóxicos e destrutivos, porquanto resolvem apenas os direitos legais – tipicamente de maneira insatisfatória – enquanto ignoram o luto pessoal que acompanha quase todos os rompimentos de relacionamento. Essa luxação persistente, a dor e o ressentimento talvez sejam o aspecto mais devastador do litígio, porque ele não só não cura feridas, como pode provocar novas.

As Práticas Colaborativas parecem ter nascido de uma insatisfação geral (advogados, assistentes sociais e ou financeiros, famílias e sociedade) com o Sistema Judiciário e o litígio, assim iniciadas em meados dos anos de 1990, quando o advogado de família Stuart Webb, após quinze anos de prática litigante, ficou desiludido pela maneira que essa prática devastava e vitimava famílias, pois mesmo que alguma parte saísse vitoriosa, ainda assim restavam conflitos subjetivos.

O astuto advogado procurou desenvolver uma prática por meio da qual ajudaria seus clientes a transformarem, colaborativamente com outros advogados, seus conflitos à sombra do Judiciário, na qual se estabeleceu um contrato em que ambos os advogados e ambos os cônjuges assinariam, comprometendo-se a dialogar e negociar de boa-fé, contendo uma cláusula chamada “não litigância”, desse modo exigindo que os advogados se retirassem do caso se o acordo fosse inexitoso, nascendo, assim, o Direito Colaborativo.

A abordagem de Stuart Webb teve grande evolução, então partindo da ideia original, a psicóloga Peggy Thompson e a advogada Pauline Tesler agregaram profissionais de diversas outras áreas, formando, assim, uma equipe interdisciplinar, com a figura dos *coaches* – psicólogos e psiquiatras que auxiliam o ex-casal –, de um especialista infantil para o(s) filho(s) ainda criança(s) ou adolescente(s), de profissionais da saúde mental colaborativos e de um profissional de finanças colaborativo, além da possibilidade de inserir outros advogados especializados em outras áreas, originando a chamada *Collaborative Practices*, ou Práticas Colaborativas (WEBB; OUSKY, 2017).

A colaboração a que se refere, na visão de Jerome Bruner (1991, *online*, n.p.), significa:

[...] é um processo para alcançar metas que não podem ser alcançadas agindo individualmente (ou, no mínimo, não pode ser alcançado com eficiência). Como um processo, a colaboração é um meio para um fim, não um fim em si mesmo. O final desejado é serviços mais abrangentes e adequados para as famílias que melhorar os resultados familiares.

Ainda sobre o atuar em colaboração, Bruner (1991, *online*, n.p.) explica que a:

Colaboração significa mais do que comunicação ou coordenação. A comunicação pode ajudar as pessoas a fazer melhor o seu trabalho fornecendo informações mais completas, mas não requer nenhuma atividade conjunta. A coordenação envolve atividades conjuntas, mas permite que os indivíduos mantenham seus próprios conjuntos de metas, expectativas e responsabilidades. Em contraste, a colaboração requer a criação de objetivos conjuntos para orientar as ações dos colaboradores.

Nessa seara, a colaboração tem importante papel na transformação dos conflitos familiares, promovendo processos de mudanças construtivas e oferecendo um importante mecanismo para atender às múltiplas necessidades, juntamente com a interdisciplinaridade, que é a transferência de saberes de uma disciplina à outra. Com as Práticas Colaborativas, utilizam-se vários profissionais na equipe de trabalho, promovendo, desse modo, o exercício da interdisciplinaridade, facilitando a transformação do conflito, o qual não poderia ser atingido se somente profissionais individuais tivessem atuado separadamente. Portanto, as várias formas de saber são “[...] inseparáveis e existe um

tecido interdependente, interativo e inter-retroativo entre as partes e o todo, o todo e as partes” (MORIN, 1996, p. 38).

Urge salientar, então, que o pensamento reducionista, fragmentador, é substituído pelo complexo, portanto, pensando a partir da complexidade humana, reintegrando as formas do saber, é o que Edgar Morin (2001b, p. 38) consubstancia de:

Complexus significa o que foi tecido junto; de fato há complexidade quando elementos diferentes são inseparáveis constitutivos do todo (como o econômico, o político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, o mitológico), e há um tecido interdependente, interativo e retroativo entre o objeto de conhecimento e seu contexto, as partes e o todo, o todo e as partes, as partes entre si. Por isso a complexidade é a união entre a unidade e a multiplicidade.

A solvência conjugal é multifatorial, envolve aspectos não somente legais, mas também emocionais, financeiros, entre outros. De todos os possíveis eventos que podem causar dor emocional a um ser humano, morte e divórcio estão no topo da lista. De certo modo, a solvência conjugal é uma morte – a morte de uma vida a dois. Para muitos, é também a morte de um sonho – um sonho que só deveria terminar com a morte de um cônjuge. Ainda, enquanto o divórcio/a dissolução de união estável inegavelmente termina com a convivência conjugal, só às vezes termina uma relação (quando da existência de filhos, inegável que será uma relação para a vida toda) (COVY, 2006).

A reestruturação financeira da mulher após a solvência do relacionamento também é algo que se tenha que ter em voga. Muitas mulheres, mesmo que tenham alcançado melhorias no nível de escolaridade, encontram dificuldade de se organizar economicamente, necessitando, ainda que transitoriamente, de auxílio financeiro do ex-cônjuge/ex-companheiro ou de familiares. Por vezes, não sabendo com que profissional pode contar, é o advogado quem realiza tal auxílio, saindo de seu lugar de pertencimento.

Com as Práticas Colaborativas, há uma possibilidade de um ajuste bem-sucedido para enfrentar o momento de crise e a transição relacionados com o rompimento da vida conjugal, construindo-se novas dinâmicas familiares (WEBB; OUSKY, 2017).

Baseado nos princípios colaboração, boa-fé, transparência, confidencialidade, informação, consensualidade, autonomia da vontade e interdisciplinariedade, o método colaborativo permite “[...] a interação entre disciplinas de maneira complementar ou suplementar que possibilita a formulação de um saber crítico-reflexivo, construindo um diálogo entre estas, relacionando-as entre si para a compreensão da realidade” (INSTITUTO BRASILEIRO DE PRÁTICAS COLABORATIVAS, 2020, *online*, p. 6).

Tal interação é essencial, especialmente para o protagonismo feminino, o qual demonstraremos no próximo tópico.

A EMANCIPAÇÃO DA MULHER COM AS PRÁTICAS COLABORATIVAS

Com as Práticas Colaborativas, as partes experimentam poucos sintomas relacionados à separação e são capazes de funcionar bem em novos papéis familiares, profissionais ou escolares, desenvolvem uma identidade e um estilo de vida que não estão mais ligados ao relacionamento anterior.

Assim, como um plano de vida nova, o comprometimento das Práticas Colaborativas é com transformação da interação dos envolvidos, colaboração para criar um “[...] ajuste de vontades entre os participantes, onde se obtém consenso chegando a uma solução criativa, sustentável e benefício mútuo” (INSTITUTO BRASILEIRO DE PRÁTICAS COLABORATIVAS, 2020, *online*, p. 7).

No primeiro momento, a figura dos advogados colaborativos é essencial para o processo colaborativo, uma vez que ambas as partes poderão ter seu próprio advogado, dando uma segurança ainda maior, pois mesmo que

estejam trabalhando em colaboração para a formação de um acordo, detêm certa autonomia com seu cliente, respeitando seus interesses acima de tudo, “[...] utilizando-se de novas técnicas e habilidades, com o objetivo de alcançar, sim, o melhor resultado possível para o seu cliente, porém nunca perdendo de vista o contexto específico em que está inserido” (FÜRST, 2016, *online*, n.p.).

Os advogados colaborativos buscam soluções que atendam às necessidades de seus clientes, mas que sejam aceitáveis ao outro cônjuge, de modo a alcançar uma solução que funcione para todos. [...] com o mesmo objetivo: ajudar o casal a projetar soluções informadas e criativas que sejam aceitas plenamente por todos. (TESLER; THOMPSON, 2017, p. 18).

Com a abordagem não hierárquica, diferente do modelo do tribunal, onde os clientes se sentam em silêncio enquanto os advogados fazem argumentos do caso, o advogado colaborativo permite o encorajamento da mulher para falar por si mesma, enquanto seu advogado se concentra em facilitar a conversa através de interesses compartilhados e informação aberta.

Ao reproduzir esse ambiente humanizado de fala, torna-se possível a criatividade aflorar, chegando a um *brainstorm* colaborativo, imaginando todas as maneiras possíveis de resolver um problema específico, sejam tais ideias práticas ou absurdas, sob a regra de que ninguém pode discutir ou criticá-las de maneira alguma. Com o *brainstorm* se pode liberar a mulher do efeito sufocante que noções preconcebidas a respeito do que é aceitável ou não podem ter sobre seu pensamento (TESLER; THOMPSON, 2017).

Afigura-se, pertinentemente, a participação dos profissionais da saúde mental (*coaches*), posto que de um casamento/uma união estável decorre a construção de uma nova identidade para os cônjuges, a qual se constrói por meio de interações entre eles. Na separação, essa identidade conjugal vai se desfazendo (FERES-CARNEIRO, 2003) do que naturalmente sentimentos dúbios afloram.

Marcondes, Trierweiler e Cruz mencionam (2006, *online*, n.p.) que:

Diante da percepção de que a decisão do outro é irreversível, costuma vir a depressão, quase sempre acompanhada pelos sentimentos de autodepreciação, pena de si mesmo, baixa auto-estima. As etapas se mesclam, principalmente a depressão com autodesvalorização e a raiva com o ataque ao parceiro, a vingança e a hostilidade (Maldonado, 1995; Mearns, 1991). A depreciação da pessoa amada, segundo Klein e Rivière (1975), pode ser um mecanismo útil de vasta aplicação que nos permite suportar decepções sem nos tornarmos selvagens. Um certo grau de depreciação de qualquer pessoa ou coisa querida a que se renunciou é provavelmente inevitável, mesmo se configurada em pouco mais que a descoberta do fato de que a pessoa, ou coisa desejada, fora exageradamente idealizada.

Assim, os profissionais da saúde mental colaborativos trabalham com sistemas familiares complexos, que estão se desintegrando e reorganizando-se. O ex-casal poderá ter cada qual o seu próprio profissional como aliado particular. Em situação específica da mulher, auxiliará a reconhecer e a mudar padrões de comunicação, a adaptar-se à capacidade de transformação para uma vida aquém da relação anterior e, caso ela seja mãe, a preparar-se para discutir suas preocupações sobre cuidados parentais para quando estiverem morando separadamente (TESLER; THOMPSON, 2017).

Os profissionais da saúde mental ficarão, habitualmente, em contato com a parte, evitando o crescimento dos problemas antes de serem abordados, tomando as medidas preventivas, e com a ajuda deles os “descontroles” por parte de qualquer um dos cônjuges, que poderiam prejudicar a construção do acordo satisfativo, são administrados com a escuta ativa e o diálogo (TESLER; THOMPSON, 2017), evitando, desse modo, demonizar o ex-cônjuge, tornando a separação qualitativamente diferente do que se invadir pelo processo da raiva.

A figura do consultor financeiro colaborativo pode ser representada por um contador ou administrador financeiro, que auxilia no levantamento de informações financeiras e na preparação de planilhas, na divisão de bens, na pensão alimentícia e nos orçamentos provisórios. Nas reuniões com o consultor financeiro, a mulher tem a oportunidade de pessoalmente e conjuntamente com o ex-cônjuge rever a documentação e as informações financeiras. Ao invés de realizar todos esses atos separadamente, ao fazer em conjunto, isso traz o benefício de diminuir a desconfiança e desenvolver percepções precisas sobre os dados financeiros do patrimônio do ex-casal (TESLER; THOMPSON, 2017).

Ainda que as mulheres, por vezes, não dependam economicamente de seus maridos/companheiros, conforme anteriormente explicitado através de dados quantitativos, há sim uma possível diminuição de renda pessoal com o término do relacionamento e também pode haver uma parcela considerável de mulheres que optaram por se dedicar exclusivamente à atividade doméstica, portanto, ao seguir o processo colaborativo, o profissional financeiro ajudará a mulher, por ela mesma, a desenvolver metas que atendam às suas necessidades com base em suas circunstâncias, como possibilidades de ampliar seus recursos monetários.

Dependendo da quantidade de informações financeiras básicas – orçamento mensal, ativos ou planos de poupança – que os ex-casais levaram consigo, o neutro financeiro, juntamente com o ex-casal, planejará um futuro financeiro colaborativo e as várias maneiras de se assegurar estabilidade financeira diante da nova fase da vida (TESLER; THOMPSON, 2017).

Com a ajuda do profissional de finanças colaborativo, o sentimento de medo pode ficar minimizado, posto que:

O consultor financeiro colaborativo ajudará o cônjuge com menos conhecimento a se atualizar nas questões financeiras, ensinado-os aquilo que é preciso saber para entender as finanças atuais e se preparar para administrar o dinheiro por conta própria, tanto agora quanto depois

do divórcio [...] pode oferecer projeções detalhadas dos resultados econômicos a longo prazo de vários cenários de acordo. Isso pode ser muito útil quando da decisão de como dividir bens, distribuir renda e, se necessário, criar soluções inventivas para atender às necessidades financeiras de seus filhos. (TESLER; THOMPSON, 2017, p. 114-115).

Na hipótese de o processo colaborativo restar infrutífero, e caso seja levado ao Judiciário, tanto os advogados colaborativos como os profissionais da saúde mental e o financeiro não participarão de qualquer processo judicial envolvendo as partes, visto que assinaram o termo de participação que contém uma cláusula de “não litigância”, que é a essência do procedimento colaborativo.

Há que se salientar que antes da solvência do relacionamento, a mulher se queda livre para procurar esses tipos de profissionais separadamente; no entanto, normalmente o que ocorre é que prevalece a opinião do cônjuge que eles estiverem representando e não do conjunto. Em vez de ajudar as partes a entender seus problemas e a resolver seu caso, os especialistas, não atuando interdisciplinarmente, geralmente acabam intensificando o conflito.

Com as Práticas Colaborativas, os profissionais trabalham em colaboração e dão ao ex-casal auxílio justo e imparcial, dentro de sua área de especialização, por isso elas são tão importantes para a emancipação da mulher.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o presente estudo das Práticas Colaborativas enquanto meio de solução adequada na reconstrução feminina pós-solvência conjugal, conclui-se que esse pode ser um processo mais humanizado e menos traumático à família e à mulher, em especial, visto que os conflitos gerados têm característica multifatorial, ou seja, são de natureza jurídica, emocional, financeira, de modo que qualquer abordagem monodisciplinar seria sempre incompleta ou parcial, não resolvendo por completo o conflito.

É imperioso compreender que o fim do relacionamento conjugal não necessariamente é algo ruim. Sim, ele é carregado de fortes emoções e desencadeia uma série de outros fatores, como abalo na vida econômica, mas simplesmente é um fato da vida. Com as Práticas Colaborativas, pode ser possível preservar os bons sentimentos e estabelecer novos padrões de comunicação.

O acordo qualitativo com o auxílio da equipe colaborativa é um avanço, pois com civilidade e respeito são honrados os relacionamentos humanos, a integridade pessoal, sobretudo para a construção emocional e financeira da mulher.

Optar por esse caminho é escolher a paz. E como diz Tesler e Thompson (2017, p. 266),

A paz começa em casa – mesmo quando sua casa está carregada de tensão e temor do desconhecido e mesmo quando a casa está em acelerado processo de redefinição. A sabedoria dos antigos nos ensina que uma viagem de milhares de quilômetros começa com um único passo.

REFERÊNCIAS

AZAMBUJA, Mariana M. B. A evolução do Direito de Família: uma Análise de Temas Atuais Envolvendo as Relações Familiares. **Revista Síntese Direito de Família**, [s.l.], v. 19, n. 108, jun./jul. 2018.

BIROLI, Flávia. **Divisão Sexual do Trabalho e Democracia**. Publicado em 2016. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011-52582016000300719. Acesso em: 15 jun. 2019.

BRUNER, Charles. **Thinking Collaboratively: Ten Questions and Answers To Help Policy Makers Improve Children's Services**. Washington, DC: Education and Human Services Consortium, 1991. Disponível em: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED338984.pdf>. Acesso em: 12 jul. 2019 (Tradução livre do inglês).

COVY, Karen A. **When happily ever after ends: how to survive your divorce-emotionally, financially and legally.** 1. ed. [S.l.:s.n.], 2006 (Tradução livre do inglês).

CÚNICO, Sabrina D.; ARPINI, Dorian M. A família em mudanças: desafios para a paternidade contemporânea. **Pensando Famílias**, Porto Alegre, v. 17, n. 1, p. 28-40, jul. 2013. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-494X2013000100004&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 17 jul. 2019.

DIAS, Maria B. **Manual de Direito das Famílias.** 12. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017.

FERES-CARNEIRO, Terezinha. Separação: o doloroso processo de dissolução da conjugalidade. **Estud. Psicol.**, Natal, v. 8, n. 3, p. 367-374, dec. 2003. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-294X2003000300003&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 21 jul. 2019.

FLECK, Ana C.; WAGNER, Adriana. A mulher como principal provedora do sustento econômico familiar. **Psicol. Estud.**, [s.l.], n. 8, 2003. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/%0D/pe/v8nspe/v8nesa05.pdf>. Acesso em: 21 jul. 2019.

FÜRST, Olivia. **Práticas Colaborativas: Novos Paradigmas do Direito.** Publicado em 2016. Disponível em: https://docs.wixstatic.com/ugd/e910af_eeb0834e7bb74ecfa29d05b5828cff18.pdf. Acesso em: 14 maio 2019.

HIRATA, Helena. Novas configurações da divisão sexual do trabalho. **Revista Tecnologia e Sociedade**, [s.l.], v. 6, n. 11, 2010. Disponível em: <https://periodicos.utfpr.edu.br/rts/article/view/2557/1661>. Acesso em: 20 jul. 2019.

INSTITUTO BRASILEIRO DE PRÁTICAS COLABORATIVAS - IBPC. **Padrões éticos e requisitos mínimos para profissionais colaborativos.** Publicado em 2020. Disponível em: <https://ibpc.praticascolaborativas.com.br/wp-content/uploads/2020/09/PADROES-ETICOS-IBPC-FINAL.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2021.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. **Censo 2010**. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9662-censo-demografico-2010.html?edicao=10411&t=sobre>. Acesso em: 20 jul. 2019.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. **PNAD Contínua 2018**. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/24267-mulheres-dedicam-quase-o-dobro-do-tempo-dos-homens-em-tarefas-domesticas>. Acesso em: 20 jul. 2019.

MADALENO, Rolf. **Curso de Direito de Família**. 5. ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2013.

MARCONDES, Mariana V.; TRIERWEILER, Michele; CRUZ, Roberto M. Sentimentos predominantes após o término de um relacionamento amoroso. **Psicol. Ciênc. Prof.**, Brasília, v. 26, n. 1, p. 94-105, 2006. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98932006000100009&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 21 jul. 2019.

MORIN, Edgar. **A cabeça bem feita**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1996.

MORIN, Edgar. **Os sete saberes necessários à educação do futuro**. São Paulo: Cortez/Unesco, 2001.

STONER, Katherine E. **Divorce without court: a guide to mediation and collaborative divorce**. 1. ed. [S.l.]: Nolo, 2006 (Tradução livre do inglês).

TESLER; Pauline H.; THOMPSON, Peggy. **Divórcio Colaborativo: A maneira revolucionária de reestruturar sua família, resolver problemas legais e seguir adiante**. São Paulo: Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, 2017.

WEBB, Stuart; OUSKY, Ronald. **O caminho colaborativo para o Divórcio**. Rio de Janeiro: IBPC, 2017.

Parte II

Responsabilidade Social das Organizações

Capítulo 6

Sustentabilidade e Governança Corporativa: Contribuição do *Triple Bottom Line* para Gerar Legitimidade, o Caso da Empresa Natura Cosméticos S.A.

DOI: <http://dx.doi.org/10.18616/respon06>

Mayara Pereira de Souza

Samuel Henrique Colombo da Luz

INTRODUÇÃO

Ao longo dos anos, a governança vem ampliando seu foco para além dos sócios e administradores das empresas, aumentando a preocupação com as demais partes interessadas, demandando, assim, maior cuidado no processo de tomada de decisão empresarial. Atrelado a isso, tem-se o aumento dos desafios sociais e ambientais que afetam as estratégias e a cadeia de valor das organizações, impactando na reputação e no valor econômico de longo prazo. Escândalos de agentes públicos e privados ocorridos nos Estados Unidos e recentemente no Brasil reforçam a responsabilidade das organizações diante de temas como sustentabilidade, corrupção, fraude e ética no mundo dos negócios. Assim, mediante os acontecimentos atuais, e para que não ocorram novamente, tem-se a melhora contínua dos Princípios de Governança, que são elaborados em nível nacional pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2015).

Portanto, a governança corporativa se constitui a forma como as empresas são administradas, monitoradas e incentivadas, considerando-se os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, órgãos de fiscalização e demais partes interessadas, sendo utilizado especialmente pelas empresas de capital aberto, nas quais os desafios de gestão vão além dos resultados econômicos, possuindo também compromissos sociais e ambientais que impactam diretamente suas estratégias organizacionais (INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2015).

Nesse contexto, a fim de se tornar mais viável e sustentável, reforçando a credibilidade das empresas, a governança corporativa combina seus princípios básicos de transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa com o modelo *triple bottom line*, ou seja, tripé da sustentabilidade, o qual possui três pilares: econômico, social e ambiental, aplicados de forma sustentável e específica para a geração de valor econômico, progresso social e saúde ambiental, visando equilibrar o sistema e agregar valor às organizações.

Arelado ao funcionamento do tripé, tem-se como característica relevante a legitimidade, ou seja, o cumprimento das normas legais impostas, o que gera aceitação e credibilidade, primordial para o sucesso da organização, especialmente para as companhias de capital aberto que precisam de boas práticas de governança, atreladas à legitimidade, proporcionando credibilidade aos *stakeholders*. Com isso, questiona-se: qual a contribuição do *triple bottom line* na geração de legitimidade em uma organização? Desse modo, o presente estudo tem como objetivo analisar a contribuição do *triple bottom line* para gerar legitimidade em um estudo do caso da empresa Natura Cosméticos S.A.

O presente capítulo está estruturado em quatro seções, sendo que na primeira consta a introdução, que compreende o tema, a justificativa e o objetivo; na segunda, a fundamentação teórica, abordando os temas governança corporativa, tripé da sustentabilidade e legitimidade; na terceira, tem-se o estudo de caso da empresa Natura Cosméticos S.A. e, por fim, na quarta seção, as conclusões.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para compreender como o tripé da sustentabilidade contribui para a governança corporativa, gerando legitimidade para as organizações, faz-se necessário, primeiramente, entender os conceitos envolvidos.

GOVERNANÇA CORPORATIVA

Originária da junção de três pilares, a governança corporativa une os princípios norteadores do fundo LENS, do relatório Cadbury e da OCDE. No entanto, foi incorporando novas práticas ao longo dos anos, sendo que uma delas é atrelada ao processo corresponde à Lei Sarbanes-Oxley (OLIVEIRA, 2015). O fundo de investimento LENS constituído por Robert Monks, em 1992, visa efetivar um novo modelo de gestão para consolidar melhores resultados e maior valor para as empresas, abordando três pontos principais: ética, atuação dos acionistas e riqueza para a comunidade (OLIVEIRA, 2015). O relatório Cadbury, produzido no Reino Unido em 1992, definiu as responsabilidades dos executivos e conselheiros, reforçando a importância de uma prestação de contas responsável e transparente, visando fortalecer os canais de comunicação entre acionistas, conselheiros e executivos (OLIVEIRA, 2015).

Em 1999, a OCDE afirmou que não existe apenas um único modelo de Governança Corporativa, mas sim elementos comuns que apoiam as melhores práticas. Portanto, reforça-se o tratamento igualitário e equitativo aos acionistas da empresa, enfatizando a importância da transparência e da veracidade nas informações, em que todos os fatos relevantes devem ser prontamente divulgados aos públicos interessados (OLIVEIRA, 2015).

Idealizada por Paul Sarbanes e Michael Oxley em resposta à sequência de fraudes bilionárias na economia americana, a Lei Sarbanes-Oxley (SOX) foi sancionada em 2002 pelo governo dos Estados Unidos, preocupando-se com dois aspectos principais: o rigor das auditorias e das fiscalizações dos atos

empresariais e a punição severa de atos fraudulentos praticados pelos administradores. A eficácia da legislação se estende a qualquer empresa no mundo que deseja negociar na bolsa de valores norte-americana (FIORINI; JUNIOR; ALONSO, 2016; OLIVEIRA, 2015).

Desse modo, por meio da conexão entre esses princípios e leis, surgem as boas práticas de governança corporativa, as quais possuem “[...] recomendações objetivas, com a finalidade de preservar e otimizar o valor econômico de longo prazo da organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para a qualidade da gestão, sua longevidade e o bem comum” (INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2015, p. 20). Assim, as boas práticas de governança corporativa possuem quatro princípios básicos, a saber: transparência (*disclosure*), equidade (*equity*), prestação de contas (*accountability*) e responsabilidade corporativa.

A transparência está relacionada com a disponibilização de informações aos investidores, aos acionistas e ao mercado. Consiste no “[...] desejo de disponibilizar para as partes interessadas as informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas impostas por disposições de leis ou regulamentos” (INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2015, p. 20). A equidade se caracteriza pelo tratamento justo de todos os sócios, considerando seus direitos, deveres, interesses e expectativas. Desse modo, para Andrade e Rossetti (2014, p. 116), o princípio trata do “[...] respeito aos direitos minoritários, por participação equânime com a dos majoritários, tanto no aumento da riqueza corporativa, quanto nos resultados das operações”. Não sendo aceitas atitudes discriminatórias, prevalecendo o senso de justiça (FIORINI; JUNIOR; ALONSO, 2016; INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2015).

A prestação de contas, conhecida como *accountability*, deve ser fundamentada nas melhores práticas contábeis e de auditoria, por meio das quais os agentes de governança devem prestar contas de sua atuação de modo claro, conciso, compreensível e tempestivo, assumindo as consequências de seus atos e omissões (ANDRADE; ROSSETTI, 2014; FIORINI; JUNIOR; ALONSO,

2016; INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2015). A responsabilidade corporativa consiste no zelo pela viabilidade econômico-financeira das organizações, por meio do qual agentes de governança devem reduzir as externalidades negativas e aumentar as positivas, otimizando as organizações. Além disso, deve-se levar em consideração “[...] os diversos capitais (financeiro, manufaturado, intelectual, humano, social, ambiental, reputacional etc.) no curto, médio e longo prazos” (INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2015, p. 21).

Como uma forma de consulta, tem-se o código de melhores práticas de governança, no qual a “[...] adequada adoção resulta em um clima de confiança tanto internamente quanto nas relações com terceiros” (INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2015, p. 20). Assim, ao cumprir as boas práticas, as empresas podem obter vários benefícios, “[...] maior facilidade de acesso a recursos externos; melhor desempenho organizacional; facilitação na dissolução de conflitos; e diminuição de riscos empresariais” (POLIZEL, 2012, p. 23). Sendo assim, a cada nova estratégia, deve-se levar em consideração o conjunto de fatores que serão impactados por ela, inclusive fatores externos à organização, como os fatores sociais e ambientais.

TRIPLE BOTTOM LINE

Em termos econômicos, sustentabilidade é viver da renda proporcionada pela natureza, conhecida como capital natural, sendo que toda atividade econômica depende desse capital. Portanto, o capital natural é responsável pela provisão dos serviços ambientais, os benefícios que os seres humanos obtêm da natureza, e o capital social é o grau de estabilidade social associado à qualidade das relações entre pessoas e grupos na sociedade, sendo o nível de confiança um fator essencial (INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2009).

Dessa forma, na administração de empresas, tem-se o *triple bottom line* (tripé da sustentabilidade), apresentado em 1981, porém apenas recen-

temente foi conhecido pelas organizações devido à preocupação com o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Portanto, no tripé, as empresas mensuram suas performances envolvendo três aspectos: o pilar econômico, que consiste nos resultados, financeiros; o pilar social, que consiste nas pessoas, em seus direitos e responsabilidades; e o pilar ambiental, a saúde do meio ambiente, que defende a conservação dos recursos naturais (ELKINGTON, 2012; POLIZEL, 2012).

Assim, a definição do tema governança, alinhado aos seus quatro princípios, tanto envolve, além da busca por resultados econômicos, como engloba também a identificação dos impactos da organização no meio em que está inserida com as pessoas que se relaciona, isto é, os sócios, funcionários, investidores e clientes (POLIZEL, 2012). Nesse sentido, para que as empresas se mantenham competitivas, precisam utilizar processos sustentáveis, minimizando os possíveis efeitos negativos. Logo, a governança corporativa “[...] passa a apresentar eventos ambientais, assumindo o papel de divulgação das ações de gestão ambiental, tendo em vista prevenir e corrigir danos, bem como salvaguardar os patrimônios empresarial e nacional” (CASAGRANDE; LAVARDA, 2014, p. 7).

Ao desenvolver estratégias empresariais, os aspectos de curto e longo prazo devem ser considerados, tornando inseparáveis a governança, a estratégia e a sustentabilidade. A fim de incorporar o tripé da sustentabilidade, as empresas efetuam a inovação para a melhoria dos processos produtivos, gerando valor à organização e conscientizando-se do consumo de matérias-primas e embalagens. Portanto, a avaliação das consequências socioambientais precisa ser incluída nos processos de inovação a ponto de interromper ou redimensionar um projeto que apresenta resultados sociais ou ambientais negativos, e não apenas restringir-se à avaliação econômica (BARBIERI *et al.*, 2010).

Diferentemente da inovação tradicional, ao utilizar o tripé, tem-se uma ampla lista de partes interessadas, além dos fornecedores, clientes e investidores, também as comunidades locais e ativistas sociais e ambientais. Assim, para atender aos anseios dessas partes, devem-se manter canais abertos para

diálogo e divulgação com transparência de suas atividades e os impactos econômicos, sociais e ambientais que elas causam (BARBIERI *et al.*, 2010).

Dentre os benefícios do tripé da sustentabilidade para as organizações, o comprometimento com valores sociais e éticos “[...] pode atrair e manter os melhores funcionários, aumentar a produtividade e evitar infrações legais, reduzindo os custos e gerando os melhores resultados em termos financeiros” (CASAGRANDE; LAVARDA, 2014, p. 9). Portanto, as empresas acumulam ganhos, como imagem e reputação, quando consideram simultaneamente os aspectos econômicos, ambientais e sociais, podendo correr riscos e perdas caso desconsiderem esses aspectos (ROSSETTI; ANDRADE, 2014).

LEGITIMIDADE

Legitimidade é uma característica atribuída ao cumprimento do que é imposto pelas normas legais. Desse modo, a legitimidade organizacional é decorrente da interpretação das ações de uma organização, se são desejáveis e apropriadas dentro do sistema socialmente construído por valores, crenças e normas (ROSSONI; MACHADO-DA-SILVA, 2013). Nesse contexto, percebe-se que as organizações não competem apenas por recursos e clientes, mas também buscam legitimidade institucional, que deriva da premissa de que as organizações necessitam de aceitação e credibilidade. Assim, a governança corporativa pode funcionar como um instrumento para obtenção de legitimidade, pois engloba a transparência nos procedimentos contábeis e reconhece os direitos de todos os *stakeholders* (CASAGRANDE; LAVARDA, 2014).

A origem da legitimidade no institucionalismo organizacional provém de Weber (1991), o qual acredita que as práticas sociais balizadas por regras aceitas como obrigatórias são tidas como socialmente válidas pelos agentes. Portanto, ao se referirem à aceitação das formas de conduta de qualquer ator social, também podem envolver as organizações, já que elas são consideradas agentes que atuam dentro de uma realidade social e que pode levá-las a buscar conformidade (CASAGRANDE; LAVARDA, 2014). No

entanto, o desenvolvimento da legitimidade organizacional ocorreu na década de 90, com Scott (1995), o qual observou que as organizações precisam, além de recursos técnicos, também de apoio cultural, conceituando, assim, a legitimação em três partes: regulamentar, cultural-cognitiva e normativa.

A legitimidade regulamentar consiste na conformidade com as regras, isto é, organizações legítimas são aquelas que estão de acordo com as leis e os regulamentos (SCOTT, 1995). Assim, como uma forma de aumentar a legitimidade das organizações, a BM&F Bovespa, em 2000, criou uma listagem separada de organizações, o Novo Mercado destinado às companhias submetidas a maiores exigências nos direitos dos acionistas e melhores práticas de governança corporativa (RIBEIRO NETO; FAMÁ, 2002). A criação de mercados diferenciados garante maior grau de confiança ao submeter as organizações a uma regra já aceita como legítima. No mercado acionista brasileiro, ao aderir ao Novo Mercado, aumenta a credibilidade da companhia perante os investidores, pois existe a crença de que empresas pertencentes a esse mercado são melhor gerenciadas, mais transparentes e mais confiáveis, impactando em maior valor de mercado de suas ações (RIBEIRO NETO; FAMÁ, 2002; ROSSONI; MACHADO-DA-SILVA, 2013; SILVEIRA, 2006).

Com relação à legitimidade cultural-cognitiva, ela pode ser observada mediante o prestígio e a reputação dos conselheiros de administração, pois se infere que bons executivos melhoram os resultados da organização. Além disso, quanto mais é praticada a governança corporativa, maior o grau de institucionalização da empresa, já que consiste na aceitação de um modelo legítimo e socialmente desejado (ROSSONI; MACHADO-DA-SILVA, 2013).

A legitimidade normativa é moralmente desejável e deriva de normas, que explicitam como as coisas devem ser feitas e os valores que idealizam os padrões utilizados para comparar estruturas e práticas existentes (SCOTT, 1995). Portanto, relaciona-se com a reputação da empresa, que consiste na expectativa de um comportamento da organização mediante percepções do seu passado. Por esse motivo, no mercado de ações, os fatos repercutem de forma positiva ou negativa para as empresas, dependendo da reputação que

elas possuem. Nesse contexto, as organizações que incorporam elementos legitimados socialmente maximizam sua legitimidade, aumentando seu valor e sua capacidade de sobrevivência (ROSSONI; MACHADO-DA-SILVA, 2013).

METODOLOGIA

A metodologia se classifica como aplicada e com uma abordagem qualitativa. A pesquisa qualitativa consiste em analisar dados coletados a fim de compreender os processos envolvidos por meio dos resultados obtidos (GIL, 2010). O objetivo da pesquisa é descritivo, por meio do qual se busca descrever as características de determinado fenômeno (GIL, 2010).

Para isso, foi realizada uma pesquisa documental, utilizando-se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda poderiam ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa (GIL, 2010). As informações foram coletadas no *site* da empresa Natura Cosméticos S.A. a fim de exemplificar as estratégias do *triple bottom line*.

A GOVERNANÇA CORPORATIVA E A APLICAÇÃO DO *TRIPLE BOTTOM LINE* NA EMPRESA NATURA COSMÉTICOS S.A.

Para ilustrar a utilização das boas práticas de governança corporativa com o uso do *triple bottom line*, tem-se a empresa Natura Cosméticos S.A., a qual passou por uma significativa evolução em sua política de governança, especialmente a partir da abertura de capital, em 2004, indo direto para o Novo Mercado, o qual, na época, possuía apenas duas companhias. A história da Natura começou em 1969, quando Luiz Seabra inaugurou uma pequena loja em São Paulo, porém, em 1974, ela foi fechada e a venda direta foi adotada como modelo de negócios, apostando na força das relações. Ao completar 50 anos de empresa em 2019, a organização possuía 1,7 milhão de consultoras.

A governança corporativa está presente na organização desde 1998, com a criação do Conselho de Administração da Natura ainda como empresa de capital fechado, no entanto, evoluiu com a criação de comitês, sendo que, atualmente, a estrutura de governança está organizada em cinco comitês que respondem ao conselho de administração: comitê de governança corporativa, comitê de pessoal e desenvolvimento organizacional, comitê estratégico, comitê operacional de grupo e comitê de auditoria, gestão de riscos e finanças.

Com o propósito de manter o mais elevado padrão de governança corporativa, a Natura assinou, em 2004, a sua participação no Novo Mercado, cumprindo como requisitos: (i) emitir apenas ações ordinárias, (ii) manter, no mínimo, 25% de ações do capital da companhia em circulação, (iii) pelo menos 20% dos membros do conselho de administração devem ser independentes, (iv) detalhar informações das demonstrações contábeis e (v) disponibilizar as demonstrações contábeis com base em princípios internacionalmente aceitos. Essa adesão ao Novo Mercado aumentou o valor da empresa, funcionando como uma certificação de boa conduta corporativa, considerando-se uma fórmula legitimadora da organização (ROSSONI; MACHADO-DA-SILVA, 2013).

Dentre as práticas de governança corporativa recomendadas pelo Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC, a empresa Natura adotou: emissão exclusiva de ações ordinárias; a política “uma ação igual a um voto”; contratação de empresa de auditoria externa e independente para a análise de suas demonstrações financeiras; transparência na divulgação dos relatórios anuais da administração; vedação ao uso de informações privilegiadas e existência de política de divulgação de informações relevantes; entre outras.

A fim de reforçar o engajamento com as boas práticas de governança, o *site* da Natura apresenta o valor ético da organização, que se constitui a construção de uma sociedade mais justa, igualitária, participativa e democrática, valorizando características como honestidade, integridade e transparência em todas as suas atividades e negócios. Assim, para garantir que essa conduta seja cumprida por todos os colaboradores, a empresa possui processos de *compliance* que acompanham o cumprimento do Código de Conduta e da

Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013). Em reconhecimento por sua transparência e ética, em 2016, a Natura recebeu o Selo Pró-Ética do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União e, por cinco anos (2012 a 2016), foi eleita a empresa mais ética na categoria de Saúde e Beleza pelo Instituto EthisSphere.

Em 2000, a Natura foi uma das primeiras empresas a aderir ao Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção, elaborado pelo Instituto Ethos em parceria com a Patri Relações Governamentais, PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), UNODC (Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime) e o Comitê Brasileiro do Pacto Global. A empresa proíbe qualquer prática por parte de seus colaboradores, terceiros, fornecedores e prestadores de serviço de pagamento ou recebimento facilitado (suborno), possuindo em seu Código de Conduta a Política de Integridade contra Corrupção e Suborno, cuja Ouvidoria é o seu canal oficial para registro e apuração dos casos de denúncia de descumprimento ao Código de Conduta.

A sustentabilidade permeia todo o modelo de governança da Natura, sendo sua missão promover o “Bem Estar Bem” por meio do conhecimento científico e do uso sustentável da biodiversidade botânica brasileira. Dessa forma, para ilustrar o tripé da sustentabilidade, tem-se o quadro 1, com as ações da empresa Natura em cada um dos pilares do *triple bottom line*.

Quadro 1: Ações da empresa Natura com base no tripé da sustentabilidade

<i>Triple Bottom Line</i>	Ações da Natura Cosméticos S.A.
Social	Em 1995, criou a linha de produtos não cosméticos, Crer Para Ver, cujo lucro reverteu-se em prol de uma educação pública de qualidade.
	Em 2010, foi criado o Instituto Natura para fortalecer iniciativas em prol da educação pública.
	Em 2011, lançou-se o Programa Amazônia, que tem como um de seus pilares promover o desenvolvimento sustentável das comunidades.
	Estabelece uma relação cuidadosa com as famílias fornecedoras de ativos (5.600, atualmente no Brasil, 81% delas na Amazônia), definindo o preço justo, utilizando metodologias participativas.
	Promove capacitação para que as famílias fornecedoras se fortaleçam, principalmente na gestão e no desenvolvimento organizacional.

Continua...

**RESPONSABILIDADE SOCIAL
E OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**
Conexões e Diálogos

Continuação.

<i>Triple Bottom Line</i>	Ações da Natura Cosméticos S.A.
Social	Incentiva boas práticas de manejo e de saúde e segurança do trabalho.
	Apoia a implantação de Casas Familiares Rurais (CFRs), que combinam ensino médio com técnico voltado para empreendedorismo rural. A última foi inaugurada em 2019, na região do Médio Juruá, no Amazonas.
	O SAF representa segurança alimentar para o agricultor e pode alavancar sua renda com a comercialização das espécies adicionais.
Ambiental	Em 2006, foram banidos os testes de produtos e de ingredientes em animais.
	Em 2007, criou o Programa Carbono Neutro, com metas de redução das emissões de gases de efeito estufa em toda a cadeia produtiva.
	Em 2011, lançou o Programa Amazônia, visando investir na região.
	Em 2013, reduziu um terço das emissões de gases de efeito estufa, além de lançar a linha SOU, com 70% menos plástico.
	A empresa investe em ações pela conservação da Amazônia. De 2000 até hoje, são 1,8 milhão de hectares de florestas conservados.
	Conservação da biodiversidade por meio da Estruturação do Fundo de Desenvolvimento Sustentável.
	O projeto Carbono Circular remunera pequenos agricultores pelo serviço de conservação ambiental, em parceria com a Cooperativa de Reflorestamento Econômico Consorciado e Adensado (RECA).
	Desde 2007, a empresa se dedica à adoção do sistema agroflorestal (SAF) no cultivo do óleo de palma, contrapondo a monocultura, combinando o cultivo do dendê com outras culturas, como cacau, açaí e andiroba.
Entre 2013 e 2016, a área conservada pelas 126 propriedades participantes evitou 104 mil toneladas de gás carbônico na atmosfera.	
Econômico	Receita Líquida de R\$ 8,4 bilhões em 2018, dos quais 71% foram gerados no Brasil e 29% na América Latina.
	Crescimento de 9,9% na receita líquida comparada com 2017.
	No mercado brasileiro, a Natura manteve a liderança nas suas três categorias-chave – perfumaria, corpo e presentes – e avançou em outras.
	A arrecadação da linha Crer Para Ver arrecadou no consolidado mais de R\$ 44 milhões, os quais foram destinados à educação.
	Em 2018, aumentou a integração das estratégias das operações no Brasil e nos demais países da América Latina, conferindo um olhar ainda mais transversal à gestão.
	Possui 1,7 milhão de consultoras em 2019.
Possui 5 milhões de consumidores em 2018.	

Fonte: Elaborado a partir de informações colhidas no *site* institucional da empresa Natura.

Em 2011, a Natura reuniu todas as suas iniciativas socioambientais em um único projeto, o Programa Natura Amazônia, que contribuiu para conservar 1,8 milhão de hectares de floresta, auxiliando 4.636 famílias na Pan-Amazônica. Como meta, o programa pretendia alcançar 10 mil famílias beneficiadas até 2020, baseado em três pilares – ciência, tecnologia e inovação –, coordenando redes de pesquisa e de conhecimento locais, nacionais e internacionais, com foco em biodiversidade, agricultura sustentável e ecodesign; cadeias produtivas da sociobiodiversidade, investindo em capacitação, eficiência produtiva e tecnológica; e fortalecimento institucional, empoderando as instituições locais com parcerias que geram benefícios a todos os envolvidos.

No ano de 2014, foi inaugurado o Ecoparque em Benevides, no Pará, centro tecnológico industrial onde empresas com os mesmos preceitos éticos e sustentáveis da Natura podem se instalar e trabalhar em simbiose produtiva. O objetivo principal é diminuir o impacto de produção e promover o desenvolvimento local. Assim, para expandir o potencial inovador na região amazônica, tem-se o Núcleo de Inovação Natura na Amazônia (Nina), alocado no Ecoparque, o qual prioriza produções científicas na região, que possam ser aplicadas nas cadeias produtivas da sociobiodiversidade. O Ecoparque conta ainda com a instalação da empresa Symrise e com a Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ), as quais capacitam as famílias de agricultores sobre regularização ambiental.

No mesmo ano, a empresa se tornou a primeira companhia de capital aberto a ganhar o certificado internacional B Corp., o qual teve início no ano de 2006, nos Estados Unidos, liderado pelo B Lab, organização sem fins lucrativos, que reúne empresas que acreditam que por meio de produtos, práticas e lucros é possível gerar desenvolvimento socioambiental, além do econômico. Internacionalmente, cerca de 1.200 empresas conquistaram o selo B Corp., e no Brasil 30 companhias têm a certificação. Como é renovado a cada dois anos a fim de estimular as atualizações constantes, em 2017, a Natura foi recertificada como empresa B Corp., ou seja, como uma organização que alia crescimento econômico à promoção do bem-estar social e ambiental.

No aspecto social, um dos principais mecanismos legais para a manutenção de relações justas entre empresas atuantes com a biodiversidade e seus povos é a repartição de benefícios. Desse modo, a Convenção de Diversidade Biológica (CDB) determina que seja reconhecida a função essencial exercida pelas comunidades locais na conservação da biodiversidade. Portanto, as empresas que utilizam o patrimônio genético ou conhecimentos tradicionais de um povo para fins comerciais devem devolver a ele parte dos benefícios gerados a partir desse uso. A Natura assinou o acordo em 2004, sendo a primeira empresa brasileira a realizar esse tipo de repartição, com iniciativas como a criação de cooperativas e Casas Familiares Rurais (CFRs), além do projeto Carbono Circular e da adoção do sistema agroflorestal (SAF).

Em 2018, a empresa recebeu o selo da UEBT (União para o BioComércio Ético), associação internacional sem fins lucrativos criada em 2007 como um canal da Organização das Nações Unidas (ONU) a fim de promover negócios engajados no comércio ético e justo. Os participantes da associação, da qual a Natura é membro-fundador, têm como missão promover práticas de abastecimento que assegurem a conservação da biodiversidade, respeitem o conhecimento tradicional e garantam a distribuição equitativa de benefícios ao longo da cadeia produtiva. Portanto, o selo confirma que os ingredientes vegetais da formulação dos produtos da linha Ekos são norteados pelos três pilares que guiam os negócios da empresa: comércio justo, conservação da biodiversidade brasileira e relacionamento de confiança com a comunidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A governança corporativa está apoiada em um conjunto de princípios para melhorar a gestão da empresa, visando incrementar o seu valor de mercado. Desse modo, empresas que incorporam suas estratégias ao tripé da sustentabilidade, agregando o aspecto social, ambiental, além do econômico, possuem melhor imagem e maior reputação perante os investidores, aumen-

tando seu valor de mercado. Assim, o mercado acionário precisa de empresas transparentes, éticas, que tratem seus investidores de forma igualitária e ainda gerem resultados positivos para a sociedade na qual estão inseridas, além de reduzirem o impacto negativo de suas ações para o meio ambiente.

Como é o caso da empresa Natura, analisada no presente estudo, a qual se preocupa com o tripé da sustentabilidade e com as boas práticas de governança, alinhando a ética, a boa conduta e a transparência nas informações apresentadas às partes interessadas. A Natura mantém um canal aberto com seus clientes e investidores por meio de seu *site*, no qual divulga informações sobre a governança corporativa e as boas práticas, bem como: o Código de Conduta, a Política para Transações com as Partes Relacionadas, a Política de Negociação, a Política de Dividendos, a Política de Divulgação, a Visão de Sustentabilidade, além do Estatuto Social, de relatórios financeiros e de notícias sobre as ações sociais e ambientais da empresa. Todo o conteúdo com linguagem clara e objetiva para facilitar a compreensão das partes interessadas.

A empresa também investe em inovação para minimizar os impactos negativos de suas ações no meio ambiente, investindo em programas que melhorem a conservação da biodiversidade Amazônica e a redução da emissão de gases do efeito estufa. Devido a essa preocupação, em 2018, a Natura foi eleita a 14ª empresa mais sustentável do mundo, segundo o *ranking* da companhia canadense de mídia e pesquisa Corporate Knights. A empresa também desenvolve trabalho social com apoio à implantação de Casas Familiares Rurais, à capacitação para as famílias fornecedoras e ao investimento em educação.

Desse modo, os projetos sociais e ambientais da empresa impulsionam sua reputação e imagem perante o mercado, seus clientes e investidores, resultando em crescimento para a empresa, que nos últimos anos adquiriu a empresa britânica The Body Shop, a australiana Aesop, sendo mais recente a compra da americana Avon, em maio de 2019, tornando a *holding* Natura & Co líder global em vendas diretas e a quarta maior empresa de beleza do mundo.

REFERÊNCIAS

BARBIERI, J. C. *et al.* Inovação e sustentabilidade: novos modelos e proposições. **RAE**: São Paulo, v. 50, n. 2, p. 146-154, abr./jun. 2010.

CASAGRANDE, R. M.; LAVARDA, C. E. F. Convergências teóricas entre a governança corporativa e a sustentabilidade, sob a perspectiva da legitimidade. *In*: ENCONTRO INTERNACIONAL SOBRE GESTÃO EMPRESARIAL E MEIO AMBIENTE, 16., 2014, São Paulo. **Anais...** São Paulo: FEA USP, 2014, p. 1-15.

ELKINGTON, J. **Sustentabilidade**: canibais com garfo e faca. São Paulo: M. Books do Brasil, 2012.

FIORINI, F. A.; JUNIOR, N. A.; ALONSO, V. L. C. Governança Corporativa: Conceitos e Aplicações. *In*: SIMPÓSIO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO E TECNOLOGIA, 13., 2016, Resende, RJ. **Anais...** Resende, RJ: AEDB, 2016.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA - IBGC. **A Prática da Sustentabilidade**: Desafios vividos por agentes da Governança Corporativa. São Paulo, SP: IBGC, 2009 (Série Experiências em Governança Corporativa 1). 58 p.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA - IBGC. **Código das melhores práticas de governança corporativa**. 5. ed. São Paulo, SP: IBGC, 2015. 108p.

NATURA. **Natura e Co. investidores**. Disponível em: <http://natu.infoinvest.com.br/?idioma=ptb>. Acesso em: 30 jun. 2019.

OLIVEIRA, D. de P. R. de. **Governança Corporativa na Prática**: Integrando Acionistas, Conselho de Administração e Diretoria Executiva na Geração de Resultados. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2015.

POLIZEL, C. **Governança corporativa na educação superior**. Coleção Gestão Universitária na Prática. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

RIBEIRO NETO, R. M; FAMÁ, R. Uma alternativa de crescimento para o mercado de capitais brasileiro: o Novo Mercado. **RAUSP - Revista de Administração da USP**, São Paulo, v. 37, n. 1, p. 29-38, 2002.

ROSSETTI, J. P.; ANDRADE, A. **Governança Corporativa**: Fundamentos, Desenvolvimento e Tendências. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2014.

ROSSONI, L.; MACHADO-DA-SILVA, C. L. Legitimidade, governança corporativa e desempenho: análise das empresas da BM&F Bovespa. **RAE-Revista de Administração de Empresas**, [s.l.], v. 53, n. 3, 2013.

SCOTT, W. R. **Institutions and Organizations**: Ideas and Interests. 4. ed. Thousand Oaks: Sage, 1995.

SILVEIRA, A. M. **Governança corporativa e estrutura de propriedade**: determinantes e relação com o desempenho das empresas no Brasil. São Paulo: Saint Paul Institute of Finance, 2006.

WEBER, M. **Economia e Sociedade**: uma interpretação sociológica. Vol. 1. 5. ed. Brasília: UNB, 1991.

Capítulo 7

Práticas Sociais nas Distribuidoras de Energia Elétrica da Região Sul do Brasil

DOI: <http://dx.doi.org/10.18616/respon07>

Sérgio Mendonça da Silva

Sílvio Parodi Oliveira Camilo

INTRODUÇÃO

No cenário mundial atual, organizações que ainda não aderiram à responsabilidade socioambiental têm recebido crescentes pressões por meio de instituições reguladoras, grupos de proteção à vida e ao meio ambiente e pela própria sociedade (GLOBAL REPORTING INICIATIVE, 2013). Não obstante, um número expressivo de empresas públicas e privadas deseja tornar suas operações sustentáveis, evidenciando práticas sociais por meio de relatórios anuais de responsabilidade socioambiental, relatórios de sustentabilidade e outros meios informacionais.

A evidenciação social tem sido frequente objeto de pesquisa no âmbito internacional e despertado o interesse de pesquisadores brasileiros. O *Global Reporting Initiative* (2013) declarou que muitas dessas organizações percebem que, embora as agências reguladoras concedam às empresas licenças de operação, elas precisam ainda obter ou manter uma espécie de “licença social de operação” da própria sociedade. Gianezini *et al.* (2012) salientam que no âmbito da gestão privada muitas empresas têm implementado práticas de gestão que possam promover e apresentar à sociedade o desenvolvimento de suas ações de responsabilidade socioambientais.

Voltar ao Sumário

Dado esse contexto, visando contribuir para o avanço da pesquisa nesse campo, o objetivo deste trabalho é investigar a evidência de práticas sociais em empresas distribuidoras de energia elétrica do sul do Brasil. Caracterizado como um estudo multicase, procurou conhecer práticas sociais por meio de divulgações de empresas distribuidoras de energia elétrica do sul do Brasil nos anos de 2014, 2015 e 2016. Empresas do setor elétrico brasileiro têm implementado essas iniciativas com o objetivo de adequar suas práticas às novas demandas da sociedade e das entidades reguladoras.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esta seção apresenta conceitos e fundamentos de responsabilidade social corporativa e evidência social.

RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA (RSC)

Apesar de todo o interesse que desperta atualmente, a noção de Responsabilidade Social Corporativa (RSC) não é recente (CARROLL, 1999). Nas últimas décadas, os estudos relacionados à responsabilidade social evoluíram e acompanharam o desenvolvimento do ambiente social e econômico das organizações. Historicamente, na segunda metade do século XIX, já se viam iniciativas de empresários como Titus Salt, William Lever, George Cadbury, no Reino Unido, e George Pullman, nos Estados Unidos, no sentido de proporcionar melhores condições de trabalho aos seus empregados, percebendo sua influência positiva na produtividade (GONÇALVES FILHO *et al.*, 2009).

Os estudos preliminares desse tema partem de uma visão econômica fundamentada no ponto de vista de Friedman (1970) de que a única responsabilidade social de uma organização é gerar lucro para seus acionistas e, por consequência, sua responsabilidade é contribuir para o crescimento. Esses conceitos apontados por Friedman (1970) vêm perdendo força na medida em

que as práticas de responsabilidade social avançam e passam a compor as estratégias das organizações (PONCHIROLLI, 2007).

Um constante movimento de Conferências das Nações Unidas (Conferência Mundial sobre Educação para Todos – 1990, Jomtien, Tailândia; Segunda Conferência das Nações Unidas sobre os Países menos Desenvolvidos – 1990, Paris, França; Cúpula Mundial pela Criança – 1990, Nova York, Estados Unidos; A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento – 1992, Rio de Janeiro, Brasil; Conferência Mundial sobre Direitos Humanos – 1993, Viena, Áustria; Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento – 1994, Cairo, Egito; Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Social – 1995, Copenhage, Dinamarca; e Conferência Mundial sobre a Mulher – 1995, Beijing, China) apelou para a iniciativa privada assumir maior responsabilidade no que se refere ao desenvolvimento humano. Apelos contínuos têm sido feitos para empresas privadas, particularmente às grandes corporações multinacionais, inserindo-se nos propósitos mundiais. Esse chamamento tem sido, em grande medida, resistido ou rejeitado com base em noções tradicionais sobre a repartição adequada de papéis entre empresas e governo (GLADWIN; KRAUSE; KENNELLY, 1995).

Para Carroll (1999), o conceito de responsabilidade social corporativa (RSC) tem uma longa e variada história. É possível traçar indícios da preocupação da comunidade empresarial com a sociedade por séculos. A escrita formal sobre a responsabilidade social, no entanto, é, em grande parte, um produto do século XX, especialmente nos últimos 50 anos. Um dos autores citados por Carroll é Howard R. Bowen (1953). Em seu livro “Marco das Responsabilidades Sociais do Empresário”, Bowen, segundo Carroll (1999), partiu da crença de que as grandes empresas eram centros vitais de poder e tomada de decisão e que as ações dessas empresas influenciaram na vida dos cidadãos em muitos pontos. Bowen (1953) estabeleceu uma definição inicial das responsabilidades sociais dos empresários, que se refere “[...] às obrigações dos empresários de adotar orientações, tomar decisões e seguir linhas de ação que são desejáveis em termos de objetivos e valores da sociedade». Carroll

(1999) reforça que por causa de seu trabalho precoce e seminal, Howard Bowen deveria ser chamado “Pai da Responsabilidade Social Corporativa”.

Se parece verdadeira a afirmativa de que a comunicação intercultural entre povos diferentes tende a homogeneizar todas as culturas, também podemos perceber o movimento inverso como o contato com diferentes percepções e padrões sobre direitos humanos, que passam a exigir das empresas um comportamento socialmente responsável e que respeite as noções internacionais de direitos humanos, a liberdade e a participação democrática (ASHLEY *et al.*, 2003). Independentemente da cultura de origem, a organização ou corporação que projeta expansão para patamares de escala global precisa estar atenta às diversidades culturais existentes no mundo e à preservação dos recursos naturais e do meio ambiente. Naturalmente, os temas ligados à responsabilidade social passam a ser amplamente debatidos e incorporados nas estratégias das organizações, que atuam em um ambiente cada vez mais competitivo e complexo. Para organizações imersas nesse ambiente de competição, qualidade e preço atraentes já não mais se configuram como diferenciais, mas, sim, como exigências naturais do consumidor. Dessa forma, a responsabilidade social passou a ser uma importante estratégia para as empresas que buscam um retorno institucional a partir de práticas sociais (PONCHIROLI, 2007).

Na concepção de Ponchirolli (2007, p. 53), o conceito de responsabilidade social “[...] compreende que as organizações hoje têm que fazer mais do que a lei determina. Elas perceberam que podem diferenciar-se e serem mais valorizadas se cumprirem com seu papel social”. Essa valorização é conquistada com base na legítima conscientização da organização de que realmente ela quer isso e da sua disposição para alocar recursos e investir na busca dessa diferenciação.

Eugénio (2010) lembra que a responsabilidade social das empresas tem sua origem na unidade econômica que atua na sociedade, suportando as consequências da sua atividade e do exercício de poder que a própria sociedade exerce. Resumindo, a atuação da empresa é medida em função de sua con-

cordância de valores e outros aspectos de caráter coletivo, exigindo que possua uma boa dose de congruência e cooperação com o ambiente em que se insere.

Como contraposição, o mundo empresarial vê na responsabilidade social uma nova estratégia para incrementar os resultados financeiros. Essa tendência é decorrente das mudanças de comportamento do consumidor, que procura por produtos ou serviços que gerem melhorias ao meio ambiente ou à comunidade. Além disso, essas profundas transformações nos mostram que o crescimento econômico só será possível se estiver alicerçado em bases sólidas, com estratégias empresariais competitivas, bem desenvolvidas, com implementação de ações socialmente corretas e ambientalmente sustentáveis (ASHLEY *et al.*, 2003).

Organizações exercem a responsabilidade social quando se comprometem com a sociedade e com o meio ambiente, além das obrigações legais e econômicas. Aquelas de grande porte possuem melhores condições de estabelecerem práticas de interação institucionais, com convergência de interesses com as comunidades, o ambiente e os governos. Justamente porque ações preservacionistas demandam investimentos financeiros importantes, somados à pressão do crescente número de leis reguladoras criadas nos últimos anos, é que as questões ligadas à sustentabilidade são praticamente obrigatórias nas organizações (OLIVEIRA *et al.*, 2013). Complementa-se, ainda, que essas organizações, no processo decisório, podem antever implicações econômicas, morais, de sustentabilidade e legais, na reputação e nos processos de escolhas estratégicas (CAMILO; MAIA; XAVIER, 2016).

EVIDENCIAÇÃO (DISCLOSURE) SOCIAL

Fatores que levam as empresas a publicarem relatos do seu desempenho social podem ser internos ou externos, tangíveis ou intangíveis, econômicos ou morais. Muitas vezes, as organizações podem acreditar que de alguma forma serão beneficiadas ao divulgarem informações referentes às práticas sociais.

Para empresas que publicam relatórios de sustentabilidade, a comunicação com os *stakeholders* e com a sociedade é citada frequentemente como o motivo principal para começar com essas práticas de evidenciação, pois a própria organização espera melhorar sua credibilidade e sua reputação perante investidores, clientes e membros da comunidade. Muitas organizações percebem que, embora as agências reguladoras concedam às empresas licenças de operação, precisam ainda obter ou manter uma espécie de “licença social de operação” da própria sociedade (GLOBAL REPORTING INICIATIVE, 2013).

No Brasil, as empresas do setor elétrico são reguladas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a qual exige dessas outorgadas a divulgação anual das informações econômicas e socioambientais que são publicadas por meio do Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental e Econômico Financeiro constante no Manual de Contabilidade do Setor Elétrico.

No entender de Malacrida e Yamamoto (2006), a divulgação de informação clara, objetiva e completa por parte das empresas possibilita maior confiabilidade e segurança para os seus usuários no processo de tomada de decisões. Em adição, Nossa (2002) aponta que muitos investidores utilizam as informações dos relatórios publicados pelas empresas para tomarem decisões, e que, conseqüentemente, as informações dos relatórios deveriam ser amplas, exatas e fidedignas.

Atualmente, existem várias normatizações (leis, pareceres, instruções) que tornam a divulgação de várias informações econômico-financeiras obrigatórias para as companhias abertas. No entanto, há outras, cuja divulgação é de caráter voluntário e depende de fatores independentes da imposição legal, tais como conscientização da necessidade e do respeito. O argumento utilizado para que haja um maior nível de evidenciação por parte das empresas, independentemente da obrigatoriedade, é a esperada repercussão positiva dessas informações no Mercado de Valores Mobiliários, contribuindo para uma melhor avaliação financeira da empresa. Entre outras repercussões positivas, citam-se: maior retorno, menor custo de captação e menor flutuação de seus preços de mercado (MALACRIDA; YAMAMOTO, 2006).

Deegan (2002) considera que o desejo de legitimar certos aspectos operacionais de uma organização é, em muitos casos, o principal motivo que leva os gestores a relatarem informações externas sobre o desempenho social e ambiental da organização. Yamaguchi (2011) destaca que os administradores passaram a se preocupar não somente com a gestão do negócio, mas, também, com as pessoas e com o meio onde elas interagem. A divulgação dessas práticas, refratária de políticas organizacionais sociais, passou a ser importante.

Evidenciar práticas de ações sociais voluntariamente é informar ao público interno e externo sobre o que a organização está fazendo além do que é obrigatório. Deegan (2002) cita em seus estudos e de outros autores que pode haver várias motivações para as empresas ou os gestores realizarem voluntariamente a evidenciação de informações sociais e ambientais.

Sob o ponto de vista de Malacrida e Yamamoto (2006), o argumento mais intenso para a divulgação voluntária por parte das empresas é o fortalecimento de sua imagem perante o Mercado de Valores Mobiliários. Isso contribui para uma melhor avaliação financeira da empresa, resultando em um menor custo de captação, maior retorno e menor flutuação do preço de suas ações no mercado.

A divulgação das informações de forma voluntária se configura como uma evidenciação espontânea ou proativa por parte das empresas, a qual busca satisfazer as necessidades informacionais de seus diversos usuários, em especial dos investidores. Já a divulgação obrigatória é aquela que é regulada e obriga as empresas a divulgarem informações específicas. Os defensores da divulgação obrigatória concluem que as empresas não disponibilizam informações suficientes aos seus usuários, pois consideram que a divulgação de algumas informações favorece os seus concorrentes (YAMAMOTO; SALOTTI, 2006).

As organizações que evidenciam práticas de ações sociais espontaneamente investem valores (custos) consideráveis para criar estrutura física e tecnológica, meios e canais de divulgação e, principalmente, equipe de profissionais especializados para compilar, tratar e organizar as informações indicadas para a divulgação.

Demonstrar transparência das suas operações, legitimar-se perante a sociedade e manter sua reputação no mercado talvez sejam alguns dos atributos da motivação das organizações para a evidenciação das práticas sociais voluntárias. Estão compreendidas nos relatórios corporativos e, com a pretensão de produzir informações adicionais aos *stakeholders*, comunicam além das ações obrigatórias (KLANN; BEUREN, 2011).

METODOLOGIA DA PESQUISA

Uma das características desta pesquisa é analisar por uma ótica interdisciplinar as práticas de ações sociais, voluntárias e obrigatórias implementadas pelas maiores empresas distribuidoras de energia elétrica da região sul do Brasil. Quanto à abordagem, a pesquisa se configura predominantemente como qualitativa, por analisar com maior profundidade os dados publicados nos relatórios. Quanto aos objetivos, a pesquisa se caracteriza como descritiva e exploratória, pois tem como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores (CAMPOS, 2000).

Quanto às estratégias de investigação, a pesquisa foi orientada por um estudo de caso múltiplo, de onde a situação foi avaliada a partir de diferentes níveis de análise e considerando, ainda, segundo Martins (2006) e Yin (2010), que estudos de casos podem ser modificados durante a coleta dos dados devido à dinâmica própria dessa estratégia de pesquisa, mediante análise documental. Esta pesquisa foi baseada em Relatórios Anuais e de Sustentabilidade e nos Relatórios de Responsabilidade Socioambiental e Econômico-Financeiro (RSA) das empresas estudadas.

Foram selecionadas intencionalmente as duas maiores empresas distribuidoras de energia elétrica, sendo a Empresa CELESC Distribuição (Centrais Elétricas de Santa Catarina) representando o estado de Santa Catarina e a Empresa Copel Distribuição S.A. (Companhia Paranaense de Energia) representando o estado do Paraná. Ambas as empresas divulgam suas práticas

sociais no Relatório Anual e de Sustentabilidade. A determinação dos anos de 2014, 2015 e 2016 como período de análise se deu pelo fato de que ambas as empresas aderiram à versão G4 do GRI a partir do ano de 2014, conferindo, assim, uma linha mais padronizada na publicação das informações. Outro fator relacionado à escolha desses três anos foi a incerteza em saber quais e quantas práticas sociais cada empresa realizou e publicou em seu relatório anualmente.

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Nesta seção, serão apresentadas as práticas sociais divulgadas pelas empresas distribuidoras de energia elétrica do sul do Brasil, quais sejam, CELESC Distribuição e COPEL Distribuição.

Programas sociais das empresas

A pesquisa apontou que as empresas fazem uso dos mesmos tipos de canais de evidenciação social. Essa característica identificada nas informações obtidas das empresas CELESC e COPEL pode ser interpretada, de acordo com Dimaggio e Powell (1983), como indicativo do processo de isomorfismo mimético, que ocorre quando, em função da incerteza, as organizações tendem a copiar padrões e processos que foram utilizados em outras organizações.

No Quadro 01, são apresentados os programas da dimensão social, de natureza obrigatória e voluntária, desenvolvidos pelas empresas CELESC e COPEL entre os anos de 2014, 2015 e 2016.

Quadro 01 - Programas sociais, obrigatórios e voluntários

Natureza	Dimensão Social	
	CELESC Distribuição	COPEL Distribuição
Obrigatória	Programas de Eficiência Energética Bônus Eficiente III (*) Luz para Todos Incentivos Fiscais Jovem Aprendiz Energia do Bem I (*) Hospitais Filantrópicos II (*) Energia do Bem II (*) Energia do Bem III (*) Banho de Energia (*) Residencial “Bônus Eficiente III” (*) Baixa Renda “Energia do Bem 4” (*) Energia do Bem IV (*)	Benefício Consumidor Desempregado Geração Distribuída Programa de Eficiência Energética Programa Irrigação Noturna Programa Luz Fraterna Programa Tarifa Rural Noturna Projeto Mais que Energia Programa Morar Bem Paraná Universalização de Energia – “Programa Luz para Todos” (Decreto no 7.520/2011) Doação anual por meio de incentivos fiscais
Voluntária	Baixa Renda “Sou Legal, Tô Ligado! 2” Celesc Voluntária Energia do Futuro Conexão Celesc de Inclusão Digital Tô ligado Campanhas Convênio nas faturas Programa Celesc de Relacionamento Comunitário Ser Sustentável Programa Incentiva	Benefício Calamidade Coral Programa Cultivar Energia Programa de Ações Integradas de Desenvolvimento e Cidadania – UPS Cidadania Programa Paraná Cidadão Programa Voluntariado Corporativo – Eletri-Cidadania Projeto Copel no Bairro Projeto Iluminando Gerações Telemedicação Grupo A Troféu Susie Pontarolli de Sustentabilidade Projeto Smart Grid Programa + Clic Rural Fatura Solidária Programa Corporativo de Acessibilidade Prevenção Programa Boa Vizinhança Copel Programa de arrecadação de doações a entidades assistenciais e instituições de serviço social Programa de Educação para a Sustentabilidade Seminário Copel de Sustentabilidade

(*) Programas e projetos vinculados ao Programa de Eficiência Energética (PEE).

Fonte: Elaborado pelos autores.

No Quadro 02, são apresentadas as quantidades de programas/projetos da dimensão social desenvolvidos pelas empresas CELESC e COPEL em 2014, 2015 e 2016.

Quadro 03 -Quantidade de programas sociais, obrigatório e voluntário

Natureza	CELESC	COPEL
Obrigatória	13	10
Voluntária	10	19
Total	23	29

Fonte: Elaborado pelos autores.

É válido ressaltar que, nos três períodos analisados, tanto a empresa COPEL como a empresa CELESC desenvolveram para a comunidade externa projetos e programas sociais de caráter obrigatório (aqueles instituídos pelo governo) e de caráter voluntário (aqueles desenvolvidos por espontaneidade da empresa).

Síntese dos achados

Por meio do exame dos dados, percebe-se uma tendência evolutiva das práticas sociais desenvolvidas pelas empresas CELESC e COPEL entre os anos de 2014, 2015 e 2016. O cenário representado nesse quadro foi ao encontro de alguns estudos citados neste trabalho, reiterando que a similaridade existente entre as práticas conduz o desejo de cada empresa em manter sua reputação no mercado e sua legitimidade perante a sociedade. Segundo Gonçalves Filho (2009), a busca de um ponto comum propõe que a reputação é uma avaliação coletiva do desempenho e dos resultados de uma empresa, que sustenta a percepção de sua habilidade de originar valor para diferentes grupos de *stakeholders*.

Em relação às práticas sociais de natureza obrigatórias e voluntárias, nota-se que a empresa CELESC, em comparação com a empresa COPEL, apresenta uma tendência maior para o desenvolvimento de práticas sociais de natureza obrigatória. Provavelmente essa tendência acontece em função do maior uso dos recursos do Programa de Eficiência Energética (PEE) para o desenvolvimento de projetos sociais. Esse detalhe pode ser observado no Quadro 01.

Pelos resultados, nota-se uma predisposição da empresa COPEL para a implementação de práticas voluntárias. Essa evidência é compartilhada com os resultados encontrados nos estudos de Cruz e Lima (2010) e Cardoso, De Luca e Gallon (2014), que associam positivamente a quantidade de evidenciação voluntária à reputação corporativa, sugerindo que as empresas de capital aberto no Brasil, que possuem forte reputação, fornecem aos *stakeholders* uma quantia maior de evidenciação voluntária. Desse modo, a reputação corporativa seria um determinante que incentiva para a divulgação voluntária de informações sociais das empresas CELESC e COPEL.

É possível perceber que as empresas concorrem entre si, não em aspectos econômicos, mas em posicionamento na carteira do ISE e no prêmio ABRADEE de responsabilidade social. Esse fato pode ser confirmado pela constatação encontrada nos estudos de Khemir e Baccouche (2010) de que o grau de visibilidade política é fator importante que influencia a decisão de divulgação de responsabilidade social corporativa.

Outra consideração é que, ao divulgar informações sociais por seus respectivos meios informacionais, as empresas CELESC e COPEL assumem um compromisso com a sociedade, pois a sobrevivência da empresa pode estar ameaçada se a sociedade perceber que ela infringiu o seu contrato social (PENEDO *et al.*, 2004). Assim, tanto a empresa CELESC como a empresa COPEL devem buscar a contínua certificação de que sua atuação está em conformidade com as normas e os valores aceitos pela sociedade, bem como assegurar que suas atividades são legítimas (AZIZUL ISLAM; DEEGAN, 2008).

Pela evidenciação dessas práticas sociais, percebe-se que tanto a empresa CELESC como a empresa COPEL fazem das práticas uma estratégia valiosa para se legitimarem perante a sociedade. Pois, de acordo com Milne e Patten (2002), a legitimação é um processo que resulta da interação das organizações e de seus ambientes, corroborando o discurso de Deegan (2002), que associa a comunicação social e ambiental à manutenção ou criação da legitimidade organizacional. Presume-se, então, que as empresas CELESC e COPEL possuem comportamento sociointegrador, justamente por atenderem a esses pressupostos, pois, segundo Deegan (2002), na medida em que o comportamento real ou percebido de uma organização se afasta dos valores e normas sociais, sua legitimidade está ameaçada e uma “lacuna” de legitimidade pode se desenvolver.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi possível concluir que os meios pelos quais as empresas CELESC e COPEL divulgam suas práticas sociais para a comunidade externa são bastante similares. Entre os principais meios ou canais de divulgação das práticas socioambientais, destacam-se os Relatórios Anuais de Sustentabilidade e os Relatórios de Responsabilidade Socioambiental como o principal canal de evidenciação. Durante a análise dos relatórios de ambas as empresas, percebeu-se que existe atenção relevante para o desenvolvimento de programas e projetos para o campo social, apesar de se perceber também que existe uma preocupação das empresas estudadas com as questões voltadas para a sustentabilidade, como mudanças climáticas, consumo consciente e economia de energia, inclusão social mediante programas e incentivos próprios e/ou governamentais, resgate da cidadania e qualidade de vida das pessoas.

Em relação às práticas sociais, de natureza obrigatória e voluntária, percebeu-se que a empresa COPEL tende a se destacar, pois além da consistência e manutenção dos programas por períodos maiores, percebe-se que

foram evidenciadas práticas sociais voluntárias mais intensas em relação à empresa CELESC.

Percebeu-se que as empresas adotam estratégias bastante parecidas, o que sugere que a CELESC e a COPEL competem pelo *status* de reputação, utilizando sinais institucionais que indicam conformidade com as normas sociais e ambientais, e sinais que indicam posturas estratégicas muito semelhantes. O que pode denotar características miméticas em firmas do mesmo ambiente de competição.

Este trabalho apresenta algumas limitações. Uma delas se refere à amostra estudada, pois a pesquisa foi elaborada com apenas duas empresas distribuidoras de energia elétrica. Por isso, os resultados apresentados nesta pesquisa não podem ser generalizados para as demais empresas distribuidoras de energia elétrica no Brasil. Sugere-se, para futuros trabalhos, o desenvolvimento de pesquisa com no mínimo uma distribuidora de energia elétrica de cada região do Brasil.

REFERÊNCIAS

ASHLEY, P. A. *et al.* **Ética e responsabilidade social nos negócios**. São Paulo: Saraiva, 2003.

AZIZUL ISLAM, M.; DEEGAN, C. Motivations for an organization within a developing country to report social responsibility information: Evidence from Bangladesh. **Accounting, Auditing & Accountability Journal**, [s.l.], v. 21, n. 6, p. 850-874, 2008.

CAMILO, S. P. O.; MAIA, A. G.; XAVIER, W. G. Implicações da Responsabilidade Social Corporativa na Estratégia Organizacional: um ensaio teórico. **Contribuciones a las Ciencias Sociales**, [s.l.], v. Enero, p. 1-14, 2016.

CAMPOS, L. F. de L. **Métodos e técnicas de pesquisa em psicologia**. 2. ed. Campinas: Alínea, 2000.

CARDOSO, V. I. da C.; DE LUCA, M. M. M.; GALLON, A. V. Reputação corporativa e o disclosure socioambiental de empresas brasileiras. **Contabilidade, Gestão e Governança**, [s.l.], v. 17, n. 2, 2014.

CARROLL, A. B. Corporate social responsibility: Evolution of a definitional construct. **Business & Society**, [s.l.], v. 38, n. 3, p. 268-295, 1999.

CRUZ, C. V. O. A.; LIMA, G. A. S. F. Reputação corporativa e nível de disclosure das empresas de capital aberto no Brasil. **Revista Universo Contábil**, [s.l.], v. 6, n. 1, p. 85-101, 2010.

DEEGAN, C. Introduction: the legitimising effect of social and environmental disclosures – atheoretical foundation. **Accounting, Auditing and Accountability Journal**, [s.l.], v. 15, n. 3, p. 282-311, 2002. Doi: 10.1108/09513570210435852.

DIMAGGIO, P. J.; POWELL, W. W. The iron cage revisited: institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. **American Sociological Review**, [s.l.], v. 48, p. 147-160, apr. 1983.

EUGÊNIO, T. Avanços na divulgação de informação social e ambiental pelas empresas e a teoria da legitimidade. **Revista Universo Contábil**, [s.l.], v. 6, n. 1, 2010.

FRIEDMAN, M. **The social responsibility of business is to increase its profits**. New York Times, 13, 122–126, 1970.

GIANEZINI, M. *et al.* Evolução de eventos sobre meio ambiente e seus reflexos na responsabilidade socioambiental das empresas: reflexões para a conscientização ambiental. **Educação Ambiental em Ação**, [s.l.], v. 9, n. 40, jun./ago. 2012. Disponível em: <http://www.revistaea.org/artigo.php?idartigo=1230>. Acesso em: 16 jul. 2017.

GLADWIN, T. N.; KRAUSE, T. S.; KENNELLY, J. J. Beyond eco-efficiency: Towards socially sustainable business. **Sustainable Development**, [s.l.], v. 3, n. 1, p. 35-43, 1995.

GLOBAL REPORTING INITIATIVE - GRI. **Elaboração de relatórios de sustentabilidade**. 2013. Disponível em: <https://www.globalreporting.org/languages/Portuguesebrazil/Pages/Elaboração-de-relatórios-de-sustentabilidade.aspx>. Acesso em: 01 ago. 2016.

GONÇALVES FILHO, C. *et al.* Os impactos da responsabilidade social corporativa na reputação da empresa e nas intenções comportamentais das comunidades: estudo empírico. **Contextus**, [s.l.], v. 7, n. 1, 2009.

KHEMIR, S.; BACCOUCHE, C. Analysis of the determinants of corporate social responsibility disclosure in the annual reports of Tunisian listed firms. *In*: EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED. **Research in Accounting in Emerging Economies**. Vol. 10. Bingley: Emerald Group Publishing Limited, 2010, p. 119-144.

KLANN, R. C.; BEUREN, I. M. Características de empresas que influenciam o seu disclosure voluntário de indicadores de desempenho. **Brazilian Business Review**, [s.l.], v. 8, n. 2, p. 96-118, 2011.

MALACRIDA, M. J. C.; YAMAMOTO, M. M. Governança corporativa: nível de evidenciação das informações e sua relação com a volatilidade das ações do Ibovespa. **Revista Contabilidade e Finanças**, São Paulo, v. 17, p. 65-79, 2006.

MARTINS, G. A. **Estudo de caso**: uma estratégia de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2006.

MILNE, M. J.; PATTEN, D. M. Securing organizational legitimacy: an experimental decision case examining the impact of environmental disclosures. **Accounting, Auditing & Accountability Journal**, [s.l.], v. 15, n. 3, p. 372-405, 2002.

NOSSA, V. **Disclosure ambiental**: uma análise do conteúdo dos relatórios ambientais de empresas do setor de papel e celulose em nível internacional. 2002. Tese (Doutorado em Controladoria e Contabilidade: Contabilidade) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002.

OLIVEIRA, M. C.; ARAUJO JUNIOR, J. E.; PONTE, V. M. R.; RIBEIRO, M. S. Social disclosure of Brazilian and UK firms in light of Stakeholder Theory, Legitimacy Theory and Voluntary Disclosure Theory. *In: EUROPEAN INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY – EIBA. Proceedings...* Bremen: EIBA, 2013.

PENEDO, J.; PIMENTEL, L.; MAGRO, N.; TABUCHO, P. Contabilidade ambiental: divulgação de informação. *In: CONGRESSO DE CONTABILIDADE*, 10., 2004, Estoril. **Anais...** Portugal, 2004.

PONCHIROLLI, O. A teoria da complexidade e as organizações. **Revista Diálogo Educacional**, [s.l.], v. 7, n. 22, 2007.

YAMAGUCHI, C. K. *et al.* **Contabilidade ambiental nas organizações como instrumento de criação do conhecimento**. 2011. 260 f. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2011.

YAMAMOTO, M. M.; SALOTTI, B. M. **Informação contábil**: estudos sobre a sua divulgação no mercado de capitais. São Paulo: Atlas, 2006.

YIN, R. K. **Estudo de caso**: planejamento e métodos. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.

Capítulo 8

Práticas e Ações de Responsabilidade Socioambiental de Empresas Carboníferas

DOI: <http://dx.doi.org/10.18616/respon08>

Eduardo Netto Zanette

Sílvia Parodi Oliveira Camilo

INTRODUÇÃO

No cenário de economia globalizada, movida pela lógica do mercado e do lucro imediato, observam-se estratégias que expressam a preocupação das organizações com foco em uma economia diferenciada, mais participativa e engajada, buscando desenvolver práticas sociais e ambientalmente saudáveis. Os conceitos de responsabilidade social corporativa (RSC) e responsabilidade socioambiental emergem na busca para incorporar uma resposta a essas demandas efetivas.

As organizações buscam soluções para crises relacionadas aos novos tempos que se caracterizam por “[...] uma rígida postura dos clientes, voltada à expectativa de interagir com organizações que sejam éticas, com boa imagem institucional no mercado, e que atuem de forma ecologicamente responsável” (TACHIZAWA, 2017, p. 27). Schwartz e Carroll (2007) caracterizam a RSC associada à ética nos negócios, ao gerenciamento de partes interessadas, à sustentabilidade e à cidadania corporativa. Dos cinco constructos citados por Schwartz e Carroll (2007) no âmbito da sociedade e dos negócios, afirmam ser a RSC, provavelmente, o constructo mais usado há mais tempo como estrutura

Voltar ao Sumário

explícita para entender melhor a relação entre negócios e sociedade. Com foco original na redução de impactos sociais negativos, parecia mudar ao longo do tempo para a noção mais geral de “fazer o bem” para a sociedade.

Para Ponchirolli (2014), a RSC não é apenas um conceito, mas também um valor pessoal e coletivo, que reflete nas ações da empresa, tanto de seus dirigentes como de seus funcionários, e a situa em dimensões relacionadas à filantropia e cidadania empresarial. Essas preocupações emergem nos diversos setores econômicos, sociais e políticos, em especial no âmbito das indústrias minerárias, decorrentes de maior rigor da legislação ambiental, da conscientização sobre a importância da prevenção de dano, da recuperação e da proteção do meio ambiente.

Nos municípios onde está inserida, a mineração de carvão, considerada uma atividade econômica importante na matriz energética brasileira, contribui para o desenvolvimento socioeconômico. Considera-se que a RSC e a gestão ambiental das organizações se revelam importantes instrumentos gerenciais para prestarem contribuições à sociedade, atenuando, assim, os impactos decorrentes de suas atividades. Esse contexto motivou o presente estudo, que tem como objetivo analisar as práticas e as ações socioambientais de empresas carboníferas do sul de Santa Catarina (SC) e do Rio Grande do Sul (RS). O referencial teórico abrange a responsabilidade social corporativa e a responsabilidade socioambiental.

RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA

Históricamente, o conceito teórico de RSC data de longo período, mas os escritos a respeito do tema são, em sua maioria, do século XX, segundo Carroll (1999). Na década de 1950, o conceito que se originou nos Estados Unidos e na Europa é oriundo da preocupação dos pesquisadores com as questões éticas que envolviam a relação entre empresa e sociedade na filantropia empresarial (BORGER, 2013).

O Prêmio Nobel de Economia de 1976, Milton Friedman, segundo Ferrell, Fraedrich e Ferrell (2000) representa um dos principais autores que escreveram sobre RSC. Defendia a ideia de que as empresas socialmente responsáveis são aquelas que atendem primeiramente aos interesses de seus acionistas, buscando maximizar seus lucros. Entretanto, Carroll (1979, p.500), argumenta que, na atualidade, o conceito de RSC deve ser ampliado, abrangendo “as expectativas econômica, legal, ética e discricionária que a sociedade tem das organizações em um determinado ponto no tempo”. Reconhece a responsabilidade econômica (ser lucrativa) como fundamental e alicerce para as demais. Mas, além de gerar lucro com suas atividades, na produção e venda de bens e serviços que irão beneficiar os indivíduos dessa sociedade devem ter responsabilidade legal (no cumprimento das leis), responsabilidade ética (ser ética) e responsabilidade filantrópica que situa em ser cidadão (CARROLL, 1991).

A responsabilidade social no mundo dos negócios, segundo Ferrell, Fraedrich e Ferrell (2000), consiste na obrigação da empresa de maximizar seu impacto positivo sobre os *stakeholders* – indivíduos ou grupos que podem afetar ou ser afetados pelos objetivos da organização – e de minimizar o negativo no âmbito interno e externo. Assim, independentemente dos objetivos corporativos, é fundamental considerar os efeitos das ações da empresa sobre terceiros, entender os comportamentos, os valores, o passado e os contextos diversos.

Segundo Tachizawa (2017, p. 68), a RSC “[...] deve expressar compromisso com a adoção e difusão de valores, conduta e procedimentos que induzam e estimulem o contínuo aperfeiçoamento dos processos empresariais [...]”, de forma que promovam “[...] a preservação e melhoria da qualidade de vida da sociedade do ponto de vista ético, social e ambiental”. Ponchirulli (2014) também cita as estratégias organizacionais que caracterizam a RSC, vinculadas às políticas adotadas, aos programas e aos projetos desenvolvidos em favor do bem comum, usualmente na forma de filantropia e cidadania empresarial. Elas têm o intuito de promover o envolvimento mais ativo e participativo dos sujeitos, buscando atender às necessidades dos colaboradores e do público externo.

A filantropia estratégica é a abordagem mais efetiva da filantropia corporativa, porque integra uma perspectiva interna e externa. Nela, são aplicados os mesmos princípios de gestão profissional. Os esforços filantrópicos são alinhados com as principais competências da empresa, utilizando, assim, as suas habilidades únicas para beneficiar a sociedade. São consideradas as expectativas das partes interessadas e do mercado para que a empresa possa se beneficiar do efeito de suas atividades filantrópicas no mercado (BRUCH; WALTER, 2005).

Para Ponchirolli (2014), a dimensão inicial do exercício da responsabilidade social está associada às ações de filantropia, mas não se esgota nela. Nessa dimensão, a característica principal é a generosidade espontânea do empresário, que reflete em doações para entidades assistenciais e filantrópicas. A segunda dimensão do exercício da responsabilidade social está relacionada à cidadania empresarial e às ações sociais diretas com a comunidade. Nesses campos de atuação, as empresas socialmente responsáveis colocam a serviço da comunidade recursos financeiros, produtos, serviços, *know-how* da organização e de seus funcionários.

Assim, as atividades filantrópicas estratégicas devem ser gerenciadas como se fossem atividades-fim. Nela, são aplicados os mesmos princípios de gestão profissional, com planejamento, orçamentos, metas de curto e longo prazo e indicadores de desempenho adequados, além de serem observadas as questões econômicas e éticas (BRUCH; WALTER, 2005).

Os conceitos de ética e responsabilidade social nos negócios, segundo Ferrell, Fraedrich e Ferrell (2000, p. 68), são utilizados muitas vezes como sinônimos, mas as duas expressões têm significados diferentes: “A ética empresarial compreende princípios e padrões que orientam o comportamento no mundo dos negócios”. Para Ponchirolli (2014, p. 41), “[...] a ética nos negócios reflete os hábitos e as escolhas que os administradores fazem no que diz respeito às suas próprias atividades e às do restante da organização”.

Tomando por base as abordagens aqui apresentadas, observam-se enfoques e interpretações do conceito de RSC, que apesar de claro do ponto de

vista cognitivo, tem implicações complexas no que se refere à sua aplicação no dia a dia das atividades de uma empresa.

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

O desenvolvimento socioambiental, caracterizado por ações ou efeitos relacionados ao processo de crescimento, de evolução, relacionado às condicionantes sociais e ambientais – uma sociedade economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente sustentável – situa-se no princípio do desenvolvimento sustentável, que tem como elementos norteadores o crescimento econômico, a preservação ambiental e a equidade social.

No âmbito da legislação brasileira, o primeiro conceito legal de meio ambiente está disposto na Lei nº 6.938/81, que rege a Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), em seu art. 3º, inciso I, que o define como “[...] o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas” (BRASIL, 1981).

Em 1988, foi promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil, atual Carta Magna (BRASIL, 1988). Nela, foram determinadas novas medidas protetivas ao meio ambiente, passando ele a ser um bem tutelado no âmbito do Direito Ambiental.

As transformações e a influência ecológica nos negócios são observáveis de forma crescente e com efeitos econômicos cada vez mais profundos. Para Tachizawa (2017), decisões estratégicas integradas à questão ambiental e ecológica representam significativas vantagens competitivas para as organizações, com possibilidade de redução de custos e incremento nos lucros a médio e longo prazo. Nesse contexto, na contemporaneidade, a gestão ambiental e a responsabilidade social são instrumentos gerenciais importantes para as organizações, qualquer que seja seu segmento econômico.

Segundo Tachizawa (2017), o investimento em gestão ambiental e responsabilidade social é a resposta natural das empresas ao novo cliente, o

consumidor verde e ecologicamente correto. Essa pressão externa que sofrem as empresas para uma melhor qualidade de mercado é representada pelos certificados legais, como, por exemplo, ISO 14000¹ e ISO 14001, que tratam do Sistema de Gestão Ambiental (SGA).

Nesse norte, os fatores sociais e ambientais têm a capacidade de interferir na implantação dos planos de negócios das empresas de mineração que operam no Brasil. Assim, de forma gradativa, internalizam em seus processos decisórios os indicadores que, até então, não faziam parte deles. As empresas do setor têm ampliado a adoção de práticas de gestão com articulação de diferentes aspectos ambientais, econômicos e sociais, tendo em vista o escrutínio de partes interessadas, a evolução do quadro regulatório e a implantação de compromissos corporativos (DIAS; MANCIN; PIOLI, 2013).

Para Schwartz e Carroll (2007), vários quadros complementares parecem estar em competição pela preeminência no campo dos negócios e da sociedade. Citam a prevalência dos cinco quadros: (a) responsabilidade social corporativa; (b) ética nos negócios; (c) gerenciamento de partes interessadas; (d) sustentabilidade; (e) cidadania corporativa. Entretanto, afirmam que as “[...] dificuldades permanecem em entender o que cada constructo realmente significa, ou deveria significar, e como cada um pode se relacionar com os outros” (SCHWARTZ; CARROLL, 2007, p. 149). Assim, considera-se que o conceito de desenvolvimento socioambiental está relacionado à integração entre economia, sociedade e meio ambiente, de forma a obter-se crescimento econômico, com inclusão social e proteção ambiental.

METODOLOGIA DA PESQUISA

A pesquisa se configura como empírica e está amparada por uma abordagem qualitativa, pois parte do pressuposto de que o mundo é enten-

1 ISO 14000 – certificado obtido a partir do cumprimento de um conjunto de normas que determinam as diretrizes de gestão ambiental das empresas. São identificadas por Sistema de Gestão Ambiental (SGA), definido pela ISO (*International Organization for Standardization*).

didado a partir da percepção dos indivíduos inseridos nas situações estudadas. Possibilita ao pesquisador a utilização de estratégias diversas de investigação por meio da interpretação, flexibilização e ampliação de possibilidades de atuação, ao passo que agencia a transformação da realidade classificada empírica em ciência (CRESWELL, 2007).

A fundamentação teórica do estudo se sustenta nas óticas da responsabilidade social corporativa e da responsabilidade socioambiental. Do ponto de vista dos objetivos, a pesquisa se caracteriza como descritiva, pois pretendeu medir ou coletar informações de maneira independente ou conjunta sobre os conceitos ou as variáveis a que se referem. Possibilita expor, sistematicamente, atitudes e relações de um determinado problema.

Utilizou-se de análise documental e entrevistas como técnica de coleta de dados. Do ponto de vista da estratégia da investigação, ela se constitui um estudo de caso envolvendo duas empresas nacionais de capital privado, com destaque na sua área econômica: Carbonífera Catarinense Ltda (CCL) e COPELMI Mineração Ltda (CML). Ambas as empresas divulgam suas práticas socioambientais por meio de seus *websites*. São identificadas na pesquisa, respectivamente, como CARB 1 e CARB 2.

CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE MINERÁRIA

As reservas provadas de carvão mineral no mundo (75%) concentram-se em cinco países: Estados Unidos, Rússia, China, Austrália e Índia. As principais ocorrências de carvão mineral no Brasil estão localizadas na Região Sul (90%). Estendem-se desde o estado de São Paulo (0,02%), passando por Paraná (0,32%), Santa Catarina (10,41%) e Rio Grande do Sul (89,25%), que detêm a maioria das reservas nacionais. O carvão utilizado para geração elétrica é o carvão vapor, predominantemente de origem nacional. No Brasil, a capacidade instalada de geração de energia em usinas termelétricas é de 41.628MW, que representa 26,5% de participação na matriz energética brasileira (ARAÚJO, 2018).

Do volume total de reservas brasileiras, o estado do Rio Grande do Sul detém a maior reserva nacional de carvão mineral, que corresponde a 89,25%, de um total de 28,802 milhões de toneladas. A região carbonífera fica na área do Baixo Jacuí. Somente a Jazida de Candiota (RS) possui 38% de todo o carvão nacional (ABCM, 2018). Mas o minério é pobre do ponto de vista energético e não admite beneficiamento nem transporte em função do elevado teor de impurezas. Com isso, sua utilização é feita sem beneficiamento e na boca da mina.

Em Santa Catarina, atualmente, são detentoras da produção de carvão mineral seis empresas carboníferas (SIECESC, 2018). O processo de exploração das jazidas passou de modelo manual para automatizado na década de 1970, com o uso sistemático de explosivos. De forma gradativa, as empresas vêm substituindo os explosivos pelo minerador contínuo, operado por controle remoto. Com isso, permite que as paredes da mina se mantenham uniformes, evitando as quedas de lascas de carvão e reduzindo a presença de trabalhadores em subsolo.

Os avanços tecnológicos, os métodos inovadores e os equipamentos de última geração são utilizados atualmente na mineração de carvão. Oferecem mais segurança aos trabalhadores, com redução no impacto ambiental da atividade mineradora.

ANÁLISE DAS PRÁTICAS E AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS DAS EMPRESAS CARBONÍFERAS

A Carbonífera Catarinense Ltda está localizada em Santa Catarina, no município de Lauro Müller e iniciou suas atividades em 1999. Com duas unidades de mineração, é a maior geradora de empregos no município (CCL, 2018). Segundo dados da Confederação Nacional dos Municípios, a soma do PIB de Lauro Müller, em 2006, foi de aproximadamente R\$ 133 milhões, sendo a CCL responsável por cerca de 40% do PIB anual do município.

A COPELMI Mineração Ltda, localizada nos municípios da região do Baixo Jacuí e Candiota, no Rio Grande do Sul, atua na mineração do carvão desde 1998, mas se originou historicamente de outras empresas que datam do início da mineração no Rio Grande do Sul, em 1883 (WITKOWSKI, 2005). Maior mineradora privada de carvão no País, detém 80% do mercado industrial e 18% do total do mercado de carvão mineral nacional. A pesquisa foi desenvolvida na unidade de Butiá, localizada no município de nome, que foi até recentemente a maior unidade extrativista da empresa (CML, 2018).

Buscando conhecer mais acerca das principais práticas e ações que as empresas realizam no âmbito socioambiental, foram verificados os *websites* oficiais das empresas carboníferas, os registros históricos e os relatórios setoriais. Apresentam-se, a seguir, os principais projetos relacionados à RSC e socioambientais, identificados nas empresas CARB 1 e CARB 2, que impactam diretamente nas comunidades onde estão inseridas. Eles foram validados pelos gestores entrevistados e constam nos Quadros 1 e 2.

Na pesquisa, foram entrevistados dois gestores de cada carbonífera, indicados por suas diretorias e nomeados neste estudo entrevistados A1 e A2 da CARB 1 e C1 e C2 da CARB 2. Todos atuam na gestão dos seus respectivos setores. Apresenta-se, neste capítulo, um recorte da análise das entrevistas desenvolvidas com os gestores.

Quadro 1 – Projetos socioambientais e de RSC da CARB 1

Projeto	Objetivo	Participantes	Local
Associação Beneficente Anjos Mineiros.	Confeccionar enxovais de bebês, que são doados após palestras para gestantes em vulnerabilidade social.	Mulheres da comunidade.	Lauro Müller.
Atividades Comunitárias.	Promover campanhas solidárias, participar de eventos socioculturais, de comemorações natalinas e de festas como a de Santa Bárbara, padroeira dos mineiros.	Funcionários da empresa e pessoas da comunidade.	Lauro Müller.

Continua...

**RESPONSABILIDADE SOCIAL
E OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**
Conexões e Diálogos

Continuação.

Projeto	Objetivo	Participantes	Local
Coral Infanto-juvenil Anjos Mineiros.	Promover atividades educativas, culturais e de lazer, o que enriquece seus integrantes.	Crianças da comunidade.	Lauro Müller.
Visitas domiciliares.	Realizar atendimentos individualizados e visitas domiciliares aos colaboradores e seus familiares por acreditar que o apoio da empresa aliado à estrutura familiar é fundamental para mudanças na qualidade de vida das pessoas.	Departamento de Gestão de Pessoas, colaboradores e familiares.	Lauro Müller
Educação Ambiental.	Oportunizar formação continuada em educação ambiental nas escolas e na comunidade.	Funcionários da empresa e comunidade.	Lauro Müller

Fonte: Desenvolvido pelos autores (2019).

Outras ações promovidas pela CARB 1 na comunidade e no seu entorno são citadas: mais de 13.000 mudas de flores/árvores plantadas, mais de 2.000 consultas médias anuais, mais de 200 ações sociais realizadas pelos colaboradores da empresa com o envolvimento do Departamento Médico e do Setor de Segurança do Trabalho, mais de 100 visitas em domicílio anuais, e mais de 140 hectares reflorestados (CCL, 2018).

Quadro 2– Projetos socioambientais e de RSC da CARB 2

Projeto	Objetivo	Participantes	Local
Operação Natal.	Realizar em parceria o recolhimento das cartas enviadas pela comunidade ao Papai Noel, adquirir e encaminhar os presentes.	Parceria com empresas e comunidade	Arroio dos Ratos e Butiá.
Sorrindo para o Futuro.	Disponibilizar um profissional de odontologia para atendimento aos alunos das escolas públicas.	Funcionários e comunidade	B. São José.
Copelmi na Escola.	Incentivar a promoção da educação ambiental nas escolas participantes do projeto e nas comunidades onde estão inseridas, proporcionando uma reflexão acerca dos hábitos ambientais e uma possível mudança de atitudes.	Empresa e Comunidade	Arroio dos Ratos e Butiá.

Continua...

Continuação.

Projeto	Objetivo	Participantes	Local
Projeto Pescar.	Oportunizar aos jovens o convívio com a realidade de uma organização, com o intuito de possibilitar uma formação profissional e um crescimento como cidadãos.	Empresa e jovens da comunidade	Arroio dos Ratos e Butiá.
Museu Estadual do Carvão.	Contribuir para o acervo desse espaço cultural do museu através da doação de objetos com relevância histórica.	Empresa	Arroio dos Ratos.
Doações e Parcerias.	Investir na comunidade local, em projetos coerentes e com enfoque social, com doações mensais para programas, fundações e associações da região.	Empresa e comunidade	Arroio dos Ratos e Butiá.
Programa de Palestras de Educação Ambiental.	Promover a Educação Ambiental por meio de palestras de conscientização em escolas da região e do gerenciamento de resíduos; promover visitas guiadas na empresa; promover recuperação de áreas mineradas e incentivo ao plantio de mudas.	Empresa e comunidade	Arroio dos Ratos e Butiá.

Fonte: Desenvolvido pelos autores (2019).

Verificou-se que, na percepção dos entrevistados, a gestão ambiental e a responsabilidade social são importantes instrumentos de gerenciamento e competitividade nas duas empresas. “A questão ambiental para nós é muito forte! Esse é um dos tópicos que está dentro dos nossos valores. Nós, colaboradores, temos que estar conscientes sobre este tema e mostrar o mesmo para a comunidade” (Entrevistado A1). Certificada pela NBR ISO 14.001 desde 2005, a empresa CARB 1 é auditada anualmente, mantendo o compromisso com a melhoria contínua do Sistema de Gestão Ambiental, “[...] que abrange todo o complexo produtivo, desde a extração do carvão, passando pelo beneficiamento, até o seu transporte ao cliente final” (CCL, 2018, p. 1). Para o entrevistado C1 da CARB 2, a questão ambiental também é prioridade, no âmbito da prevenção e da recuperação das áreas mineradas, viabilizando seu uso futuro. Citou os estudos prévios de impacto ambiental (EIA) e o respectivo relatório de impacto ambiental (RIMA) para licenciamento ambiental no Rio Grande do Sul, desenvolvido pela empresa. Com o fechamento da mina e,

consequentemente, a recuperação das áreas mineradas, a empresa oportuniza o uso futuro desses espaços. “Hoje, nestes locais, tem fazendas com plantação de soja, pecuária” (Entrevistado C1).

Na política de gestão ambiental da CARB 2, que integra saúde e segurança do trabalho, também constam, entre outros objetivos, a identificação e o controle dos aspectos ambientais, com minimização dos impactos associados à atividade econômica e à recuperação ambiental das áreas mineradas. Também é certificada pela NBR ISO 14.001, que chancela o compromisso ambiental da empresa (CML, 2018). Na CARB 1, em relação à saúde dos trabalhadores e da comunidade, além de atender às normas de segurança do trabalho, a empresa tem “[...] um departamento médico bem atuante que dá suporte para todos os funcionários da empresa, inclusive aos terceiros” (Entrevistado A2). Além disso, “[...] são realizadas diversas campanhas como o outubro rosa, novembro azul, dezembro vermelho” (Entrevistado A2).

No âmbito da formação continuada, A2 citou que, na CARB 1, a capacitação dos funcionários tem relação direta com o incentivo por meio de bolsas para estudos, promoção de cursos internos da empresa – treinamentos, estágios internos e externos. Na CARB 2, a empresa investe “[...] de forma esporádica ou quando um funcionário vem com alguma demanda de curso e formação” (Entrevistado C1). Não há um programa relacionado a bolsas de estudos. Entretanto, ações pontuais de capacitação ocorrem quando há necessidades na empresa e interesse do funcionário, que busca na empresa o apoio.

Questionados sobre a interação das empresas com a comunidade na qual está inserida, os gestores das duas carboníferas afirmaram que elas interagem de forma efetiva nas comunidades. Como cita Ponchirolli (2014), as interações das empresas com as comunidades se caracterizam uma expressão da visibilidade da responsabilidade socioambiental dessas empresas. Sobre a forma como ocorre o processo de interação da empresa com a comunidade, emergiram situações diversas relacionadas à promoção de projetos e/ou de ações sociais pontuais em sua maioria. Na CARB 1, as ações estão relacionadas à promoção e manutenção de projetos e atividades pontuais de interesse da

comunidade: palestras, educação ambiental, doações, entre outros. Na CARB 2, a empresa “[...] interage na forma de doações, treinamentos, palestras, reuniões com a comunidade, explicando os processos da mina... Não existe um compromisso mensal. Vem a demanda e nós ajudamos” (Entrevistado C1). Desde ajuda em colégios, bancos de sangue, hospital, delegacia, entre outros, a partir da demanda dos pedidos (Entrevistado C1).

A justificativa para a manutenção desses projetos corrobora a preocupação das empresas na execução de ações que visam ao bem-estar dos funcionários e de seus familiares, que se caracterizam em objetivos das ações. A CARB 1, segundo o entrevistado A1, desenvolve a atividade minerária em uma comunidade pequena na qual reside grande parte de seus funcionários. Assim, a manutenção do coral infantil, citando como exemplo, busca envolver os filhos dos moradores da comunidade, que participam dos ensaios, dos festivais de dança, das missas mensais, entre outras. As ações de filantropia se estendem também no auxílio à APAE, nas campanhas beneficentes, na distribuição de cestas básicas e na doação de leite (mensal) pelos funcionários. Da mesma forma, a CARB 2 desenvolve ações relacionadas à filantropia e ações sociais nas diversas unidades de mineração. Uma das ações pontuais ocorre em forma de doação de alimentos (cesta básica) ou de recurso financeiro (Entrevistado C1).

Na análise do conteúdo das entrevistas com os gestores das empresas, verificou-se que as ações e os projetos relacionados às práticas socioambientais desenvolvidas por elas se relacionam fortemente com ações de filantropia que representam a dimensão inicial do exercício da responsabilidade social. Como citam Schwartz e Carroll (2007), a RSC, que originalmente focava a redução de impactos sociais negativos, ao longo do tempo, situa-se na noção mais geral de “fazer o bem” para a sociedade. A característica principal da filantropia é a generosidade espontânea do empresário em doações para entidades assistenciais e filantrópicas, como cita Ponchirolli (2014). Entretanto, emergem também elementos da segunda dimensão, que se relacionam com as ações sociais diretas com a comunidade, as quais compõem a segunda dimensão do exercício da responsabilidade social. Nesta dimensão, as empresas disponibilizam à

comunidade os recursos financeiros, os produtos e os serviços da organização e de seus funcionários.

O que motiva as empresas a interagir com a comunidade, na percepção dos gestores, relaciona-se ao histórico de ações sociais e filantropia dos acionistas na CARB 1 e na preocupação com a boa imagem da empresa na comunidade na CARB 2. Entretanto, no decorrer das entrevistas, emergiram situações similares relatadas pelos gestores das duas empresas. A maioria das empresas vê a filantropia corporativa como um meio para melhor se posicionar dentro de seu ambiente competitivo para a melhoria da sua reputação a fim de estimular a demanda do cliente por seus produtos e serviços para melhorar a sua capacidade de atrair e reter funcionários qualificados ou desfrutar de um controle público e regulamentar diminuído (BRUSCH; WALTER, 2005).

A busca estratégica por um melhor desempenho das empresas, a preocupação com o desenvolvimento dos municípios onde estão inseridas, além das ações sociais e filantrópicas emergiram na justificativa sobre o objetivo das empresas na adoção dessas boas práticas, as quais foram citadas pelos entrevistados A1 e C1. O objetivo das ações na comunidade “[...] é ter uma boa relação entre vizinhos. É não ter uma imagem negativa junto ao município” (Entrevistado C1). Para o entrevistado C1, sem as ações socioambientais, a empresa teria dificuldade de desenvolver suas atividades econômicas na região, que ocorrem pela boa aceitação da comunidade e pelos benefícios concedidos aos funcionários.

São motivações não tão facilmente tangíveis que podem ser expressas na preocupação com a reputação, legitimidade, imagem e licença social para operar. Nesse contexto, a ética empresarial citada por Ferrell, Fraedrich e Ferrell (2000), que compreende os princípios e padrões, orienta o comportamento dos gestores das empresas no âmbito da RSC e socioambiental.

CONCLUSÃO

O presente trabalho buscou como objetivo geral analisar práticas e ações socioambientais de empresas carboníferas do sul de Santa Catarina (SC) e do Rio Grande do Sul (RS) a partir dos constructos teóricos da Responsabilidade Social Corporativa e do Desenvolvimento Socioambiental. Na consulta aos dados constantes dos *websites* das empresas investigadas – Carbonífera Catarinense Ltda, localizada em Santa Catarina, e COPELMI Mineração Ltda, localizada no Rio Grande do Sul – e durante a realização das entrevistas com os gestores das duas empresas, observou-se que as principais práticas realizadas ocorrem na esfera social e estão associadas diretamente com a região em que as minas estavam instaladas. Vislumbrou-se, também, que o setor da extração de carvão mineral, historicamente, possuiu e ainda possui grande importância para o desenvolvimento da região sul do Brasil, mantendo-se como importante segmento econômico regional.

No que diz respeito às questões de pesquisa do estudo, observou-se que as ações socioambientais realizadas pelas carboníferas são de natureza filantrópica e estão fortemente relacionadas aos valores pessoais e às crenças de seus gestores. Conclui-se que os principais fatores determinantes para a realização de ações socioambientais por parte das empresas carboníferas estão associados à boa imagem das empresas e ao desenvolvimento da comunidade onde as unidades produtivas estão inseridas. As ações realizadas pelas carboníferas apresentam estratégias para melhorar a imagem da empresa perante a comunidade, buscando um retorno do capital investido.

Os movimentos relacionados à filantropia e à capacitação dos sujeitos envolvidos na comunidade visando ao desenvolvimento pessoal, profissional e da comunidade estão interligados à RSC. Entretanto, a presente pesquisa também revelou que o nível de comprometimento entre as carboníferas e a comunidade onde estão inseridas demonstrou-se limitado à disponibilidade da empresa e não às necessidades da comunidade.

As evidências do desenvolvimento socioambiental emergiram nas percepções dos gestores das empresas sobre a melhoria da qualidade do ambiente de vida nas empresas e nas comunidades. As ações citadas pelos gestores caracterizam a responsabilidade de cada empresa com a comunidade e o meio ambiente. Elas devem ir além das obrigações legais e econômicas, de forma a promover o desenvolvimento nas regiões onde ocorrer. Entretanto, mesmo observando que as ações sociais e ambientais contribuem para a busca de soluções de problemáticas socioambientais, elas ainda são pontuais e isoladas, necessitando de reflexões mais aprofundadas para mudanças efetivas.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, L. P. O. Carvão Mineral. Sumário Mineral 2016 – DNPM-RS. *In*: BRASIL. Departamento Nacional de Produção Mineral. **Sumário Mineral 2016**. Brasília: DNPM, 2018, p. 38-39.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CARVÃO MINERAL - ABCM. **A História do Carvão no Brasil**. 2018. Disponível em: encurtador.com.br/xOTX4. Acesso em: 9 set. 2018.

BORGER, F. G. Responsabilidade social empresarial e sustentabilidade para a gestão empresarial. **Instituto Ethos**, 2013. Disponível em: <https://www.ethos.org.br/cedoc/responsabilidade-social-empresarial-e-sustentabilidade-para-a-gestao-empresarial/>. Acesso em: set. 2021.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: encurtador.com.br/knoG9. Acesso: 01 jun. 2018.

BRASIL. Lei nº 6.938/81, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. **Diário Oficial**. Brasília, DF, 02 set. 1981.

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm. Acesso: 12 nov. 2018.

BRUCH, H.; WALTER, F. The Keys to Rethinking Corporate Philanthropy. *In: MIT Sloan Management Review*, St. Gallen, v. 47, n. 1, p. 49-55, 2005. Disponível em: encurtador.com.br/bsEF8. Acesso em: 12 nov. 2018.

CARBONÍFERA CATARINENSE LTDA - CCL. **Responsabilidade Social**. 2018. Disponível em: <http://www.carboniferacatarinense.com.br/>. Acesso em: 02 dez. 2018.

CARROLL, A. B. A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance. *Academy of Management Review*, [s.l.], v. 4, n. 4, p. 497-505, oct. 1979.

CARROLL, A. B. Corporate social responsibility: Evolution of a definition-al construct. *Business & Society*, [s.l.], v. 38, n. 3, p. 268-295, sept. 1999. Disponível em: encurtador.com.br/muY35. Acesso em: 19 jun. 2018.

CARROLL, A. B. The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders. *Business Horizons*, [s.l.], v. 34, n. 4, p. 39-48. jul./aug. 1991.

COPLMI MINERAÇÃO LTDA - CML. **Sustentabilidade**. 2018. Disponível em: <http://www.carboniferacatarinense.com.br/>. Acesso em: 14 dez. 2018.

CRESWELL, J. W. **Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto**. Trad. De Luciana de Oliveira da Rocha. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 248 p.

DIAS, C. F. S.; MANCIN, R. C.; PIOLI, M. S. M. B. (Orgs.). **Gestão para a sustentabilidade na mineração: 20 anos de história**. 1. ed. Brasília: IBRAM, 2013.

FERRELL, O. C.; FRAEDRICH, J.; FERRELL, L. **Ética empresarial: dilemas, tomadas de decisões e casos**. Rio de Janeiro: Reichmann & Affonso, 2000.

PONCHIROLLI, O. **Ética e responsabilidade social empresarial**. 6. ed. Curitiba: Juruá Editora, 2014.

SCHWARTZ, M. S.; CARROLL, A. B. Integrating and unifying competing and complementary frameworks: The search for a common core in the business and society field. **Business & Society**, [s.l.], p.148-186, 2007.

SINDICATO DA INDÚSTRIA DE EXTRAÇÃO DE CARVÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - SIECESC. **Carvão Mineral: Dados Estatísticos – Ano: 2017**. Criciúma, 2018. Disponível em: http://www.siecesc.com.br/dados_estatisticos. Acesso em: 15 out. 2018.

TACHIZAWA, T. **Gestão socioambiental e Responsabilidade Social Corporativa: estratégias de negócios focados na realidade brasileira**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

WITKOWSKI, A. A fundação do “Sindicato dos Mineiros” de Butiá. **Cadernos FAPA**, Porto Alegre, n. 2, 2º sem. 2005.

Capítulo 9

Responsabilidade Social Universitária no Brasil: Perspectivas para o Século XXI

DOI: <http://dx.doi.org/10.18616/respon09>

Fernando Locks Machado

Kelly Gianezini

INTRODUÇÃO

Nascida na década de 1950, a Responsabilidade Social (RS)¹ surgiu como um conceito estritamente empresarial, sendo inculcada no seio das organizações daquela época a fim de reorientar o processo de tomada de decisão. Em outras palavras, pretendia que as escolhas feitas pelos líderes empresariais fossem mais compatíveis com os novos valores estabelecidos pela sociedade e menos direcionadas aos interesses individuais da companhia ou do próprio dirigente.

Décadas mais tarde, com o fortalecimento das práticas organizacionais voltadas à RS, tornou-se crescente a preocupação das universidades com o tema. No Brasil, tal movimento ascendente se fortaleceu a partir de 2004, quando houve a criação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Isso porque foi com a instituição desse sistema que a RS

1 Serão apresentadas, ao longo do capítulo, a Responsabilidade Social (RS) e duas de suas vertentes: a Responsabilidade Social Empresarial (RSE) e a Responsabilidade Social Universitária (RSU). Esta última voltada ao âmbito universitário e aquela às questões corporativas empresariais.

passou a ser um parâmetro de avaliação da qualidade institucional, tanto do seu ensino quanto da pesquisa e da extensão.

Disso, portanto, despontou a seguinte questão: após pouco mais de uma década do estabelecimento do SINAES, quais as perspectivas para a Responsabilidade Social Universitária (RSU) nas Instituições de Educação Superior (IES) brasileiras no século XXI?

Com o intuito de atender à situação-problema posta acima, deu-se origem à presente revisão de bibliografia, com abordagem qualitativa, pertinente ao desenvolvimento da RS nas universidades brasileiras, a qual está estruturada em seis partes. Na primeira, que é esta introdução, são revelados o objetivo, a problematização, os procedimentos metodológicos e a forma como foi organizada. Na segunda e na terceira parte, é abordada a trajetória histórica das IES brasileiras e as origens e definições da RS. Nas partes seguintes, são apresentados os resultados das investigações sobre a RS nas universidades instituídas no País e as perspectivas para a RS dentro delas. Por fim, na última parte, são apresentadas as constatações dos principais conflitos que limitam o desempenho integral das IES na realização de suas práticas voltadas à RS.

Tais resultados foram obtidos com a aplicação dos procedimentos metodológicos que concernem à pesquisa bibliográfica, com base em dados secundários, os quais serviram de apoio à construção da revisão e posterior argumentação sobre as perspectivas da RS nas IES fundadas no Brasil, permitindo delinear possíveis características marcantes na consolidação da RS em tais instituições neste século.

O ENSINO SUPERIOR NO BRASIL: DAS ORIGENS À CONTEMPORANEIDADE

Antes de tratar propriamente da Responsabilidade Social, é imprescindível que se contextualize a trajetória das IES no Brasil. Faz-se mister relembrar as suas origens e as dificuldades encontradas em terras brasileiras

para o nascimento das primeiras universidades, justamente porque os entraves encontrados para a consecução dos projetos de ensino superior tiveram como consequência o retardamento do desenvolvimento das IES no País.

Mais de duas dezenas de propostas para a criação de universidades no Brasil foram apresentadas desde o período colonial até a República, mas todas sem sucesso. Projetos que não floresceram devido à resistência imposta pela Coroa de Portugal, além do estigma de que os mais nobres deveriam frequentar universidades europeias como a de Coimbra a fim de educarem-se adequadamente (MOACYR, 1937; GIANEZINI, 2014).

Em meados do século XVI, esforços jesuíticos travaram o primeiro embate para a implantação de uma universidade no País. Barrados pela Coroa portuguesa, os jesuítas continuaram restritos a lecionar os Cursos de Letras e Artes no Colégio Central da Bahia (GIANEZINI, 2014). Ainda assim, não satisfeito com a restrição, o Padre Marçal Belisário empreendeu esforços no sentido de melhorar os títulos concedidos na Colônia. Novamente sem êxito, foi impedido por seu confrade, Padre Pero Rodrigues, que considerou necessário, primeiramente, elevar o colégio ao patamar de universidade – algo inviável para aquele momento (FÁVERO, 2000).

Séculos mais tarde, com o despontar da Inconfidência Mineira, reascendeu-se o debate em torno da questão, estendendo-o pelos próximos séculos, até a transferência da sede da Monarquia para o Brasil. Naquela ocasião, o comércio baiano se ofereceu para a construção do palácio real, tendo em vista a instalação do governo ali, além de disponibilizar recursos para a fundação da primeira universidade. O Príncipe, entretanto, negou ambas as propostas e seguiu para o Rio de Janeiro (SOUZA CAMPOS, 1940).

Todos esses empecilhos enfrentados pelos proponentes de um projeto educacional maior para o País resultaram em um profundo descompasso em relação aos países vizinhos, pois neles as universidades surgiram já no primeiro século de colonização espanhola. Isso ressalta o atraso brasileiro na construção de instituições voltadas ao ensino superior, logrando êxito apenas

na primeira década do século XX, com o nascimento da Universidade de Manaus, em 1909 (SGUISSARDI, 2006).

Apesar de ser o primeiro e importante passo, a consolidação do ideal de um sistema nacional para o ensino superior ocorreu somente a partir da década de 1930, com a tomada de consciência no setor educacional. Francisco Campos, o Primeiro-Ministro da Educação e Saúde do Estado Novo, elaborou, em 1931, o Estatuto das Universidades Brasileiras, materializando a organização didática e administrativa do ensino superior no Brasil, dando forma a um corpo universitário nacional de fato (FÁVERO, 2000).

Nos anos seguintes, as barreiras enfrentadas foram menos severas, mas, ainda assim, impactantes na caracterização de um modelo universitário adequado. Escapando dos protótipos profissionalizantes, passou-se a traçar o objetivo principal das universidades, que, além do ensino, abarcariam a pesquisa e a extensão como resultado da discussão em voga na Constituinte sobre a impossibilidade de se dissociar esses três elementos (SGUISSARDI, 2006).

Hoje, é notória a busca das IES brasileiras por uma identidade. Isso porque, desde o seu início, os modelos impostos eram reproduções, a começar pelo que se propunha a partir dos moldes da Universidade de Coimbra. O reflexo dessa falta de um modelo previamente definido é sentido no contributo que as universidades têm oferecido ao formarem novos profissionais. Estão os estudantes das universidades levando consigo conhecimento? Ou são apenas portadores de diploma de bacharelado e licenciatura? (BOTTONI; SARDANO; COSTA FILHO, 2013). Sobre isso, Franco (2008) afirma que há uma distância considerável entre a educação superior corrente e a que efetivamente se necessita para que as universidades consigam contemplar a consolidação do conhecimento e o fortalecimento de sua função social. Ressalta também que o aumento do número de instituições de ensino superior requer cada vez mais esforços para que se estabeleçam padrões de funcionamento e investimento, na tentativa de preservar a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e exigindo assim o estabelecimento da identidade pedagógica, administrativa e institucional das universidades.

Com percalços, atrasos e hiatos na sua construção, as universidades brasileiras têm lutado para a consecução de seus objetivos acadêmicos. Apesar disso, ainda há que se repensar a sua conformação e que se traçarem novos rumos na expectativa de que cumpram um papel de protagonismo nas transformações sociais (GIANEZINI, 2014).

Além da contextualização histórica das universidades, é conveniente que se trate também da definição do termo Responsabilidade Social. A fim de que se estabeleça uma conceituação a qual sirva de base para a avaliação da RS no decorrer deste capítulo, o tópico a seguir tratará das origens e das definições do termo.

RESPONSABILIDADE SOCIAL: ORIGENS E DEFINIÇÕES

Ainda que sua origem possa ser traçada a partir de movimentos norte-americanos do século XVI, a definição concreta do termo RS teve origem na conscientização de indivíduos. Deparados com a decadência de grandes centros urbanos e o aumento dos problemas ambientais, decidiram elevar as discussões sobre a responsabilidade das empresas com relação às questões sociais e do meio ambiente (KORTEN, 1996).

Sua conceituação transitou entre as áreas do conhecimento, sendo tratada de forma mais objetiva por Bowen (1957) como a obrigação de homens de negócios de implantar ações que sejam orientadas pelos fins e valores da sociedade onde os indivíduos se encontram. Para tal definição, cabe destacar que se tinha como sinônimos a Responsabilidade Pública e a Obrigação Social.

Na década de 1970, a expressão foi definida academicamente, ainda que tenha sido ressaltado o caráter ambíguo do termo. Isso ocorreu porque, embora vaga, a conceituação apresentada demonstrou dificuldade em delimitar o tema, já que ele permeia desde a ideia de obrigação ou coerção até a conscientização da empresa por vontade própria (REIS; MEDEIROS, 2007).

Carroll (1999) ressalta que a partir da década de 1980 surgiram novos conceitos e definições originais para a RS, com novas tentativas de se medir e conduzir pesquisas nessa área. Alguns autores receberam maior destaque, como Jones, Drucker, Wartick e Cochran e Epstein, esboçando os primeiros traços do que viria a ser a Responsabilidade Social Empresarial (RSE).

RSE diz respeito ao olhar de uma organização, que vai além dos seus interesses individuais, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade. Tal definição atribui certo altruísmo às organizações. Contudo, pode favorecer a imagem da empresa na comunidade e proporcionar a ela, em longo prazo, um aumento nos lucros (NICHEL; WOOD, 1999).

E não apenas fora das organizações, mas em seus quadros internos, a RS se relaciona com a ampliação do bem-estar de empregados, de seus familiares e da comunidade a ela atrelada. Desse modo, valorizar práticas voltadas à RS é favorecer o aperfeiçoamento de condições dos colaboradores, devolvendo recíproca e continuamente os benefícios gerados por eles mesmos em colaboração com a companhia (ASHLEY, 2002).

Com a chegada da década de 1990, a Responsabilidade Social começou a transitar entre temas, como a teoria dos *stakeholders*, da ética nos negócios e da cidadania corporativa. Nesse período, os conceitos principais de Responsabilidade Social não foram rejeitados pelos autores, tampouco ocorreram novas contribuições significativas à bibliografia concernente ao tema (CARROLL, 1999).

Já no início dos anos 2000, a RS passou a compreender, de forma mais estrita do que anteriormente, responsabilidades econômicas, legais, éticas e filantrópicas, sendo então uma obrigação das organizações perante a sociedade para amplificar os resultados positivos e mitigar os negativos (FERRELL, 2001).

E de conceituações mais específicas como essa de Ferrell (2001) é que se pode então delinear o objetivo da implantação da Responsabilidade Social e identificar para quem ela pode servir. O referido autor, contudo, não subjugou a missão básica das empresas, que é produzir para obter lucro e assim oferecer

sua contribuição máxima à sociedade. Para ele, isso, conseqüentemente, também a torna socialmente responsável.

Com o desenvolvimento da literatura contemporânea, no entanto, tanto o público interno quanto o externo (os *stakeholders*, por exemplo) passaram a receber destaque. Por consequência, todas as partes interessadas – investidores, acionistas, empregados, clientes e fornecedores – devem ser beneficiadas com a aplicação de políticas de RS (DAFT, 1999). Assim, a RS é definida e destinada à avaliação do relacionamento entre pessoas, organizações e comunidade, sendo ainda uma maneira de unir interesses fragmentados em objetivos convergentes. Deve servir a todos aqueles que, direta ou indiretamente, são dependentes ou afetados pelo papel da empresa e na tomada de decisão de seus líderes.

Posto isso, aprofundar-se-á, a seguir, o reconhecimento da RS como elemento necessário para uma nova conformação dos modelos universitários.

A RESPONSABILIDADE SOCIAL NAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS

Com a consolidação dos conceitos sobre RSE, a compreensão de que um olhar voltado somente ao lucro não mais atendia às exigências dos avanços sociais se tornou evidente. A preservação do meio ambiente e o incentivo à educação, além da conseqüente redução de outros entraves sociais, receberam destaque e modificaram os moldes organizacionais das companhias com vistas a tais aspectos (SERPA; FOURNEAU, 2007).

Esse tipo de influência, então, passou a atuar igualmente nas IES a partir da década de 1960, orientando-as a exercer um papel social. Isso ampliou o ensino voltado às preocupações sociais e aos desdobramentos políticos, incentivando, assim, o compromisso com os problemas nacionais e internacionais (SANTOS, 1999).

Com o decorrer das décadas seguintes, passou-se a delinear, portanto, uma nova visão sobre o comprometimento universitário. O objetivo foi oferecer, além de conhecimento aos estudantes para uma formação profissional adequada, informações pertinentes ao combate à desigualdade social e às dificuldades locais ou regionais (OLIVEIRA, 2012).

No século XXI, a ideia de RS tornou a receber destaque nas universidades, despontando, assim, a Responsabilidade Social Universitária (RSU). A ênfase dessa ascensão é dada àquelas IES interessadas em examinar profundamente os novos impasses envolvendo as dinâmicas sociais e ambientais do novo século, entendendo os impactos dessa mudança de cultura para a sociedade (BROWN; CLOKE, 2019).

Seguindo essa consecução de fatos e voltando-se mais especificamente ao Brasil, há que se destacar o momento de maior notoriedade em relação à RS nas universidades brasileiras: a instituição do SINAES e a adoção da RS como parâmetro de análise da qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão nas IES do País.

O SINAES, instituído em 14 de abril de 2004 pela Lei nº 10.861 (BRASIL, 2004), tem como objetivo a promoção da qualidade da educação superior brasileira, a expansão da sua oferta, a eficácia institucional permanente, a efetividade acadêmica e social e o aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais. Busca alcançar essas conquistas por meio de processos avaliativos das IES brasileiras, analisando seus cursos e o desempenho acadêmico de seus discentes (POLIDORI; MARINHO-ARAUJO; BARREYRO, 2006).

Todavia, ainda que tal ferramenta tenha sido implantada em 2004, foi apenas em 2009, após a Conferência Mundial sobre Ensino Superior, promovida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), que os debates gerados pelas propostas do SINAES tomaram forma e evidenciaram os primeiros resultados nas IES. Isso sucedeu devido às considerações levantadas na referida Conferência reiterarem a importância da

RS como instrumento de promoção da interação entre universidade e sociedade (CALDERÓN; GOMES; BORGES, 2016).

Na subseção seguinte, será apresentada, enfim, a delimitação das perspectivas para a RSU nas IES brasileiras, que é o objetivo geral deste capítulo.

PERSPECTIVAS PARA A RESPONSABILIDADE SOCIAL DENTRO DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS

Apesar dos avanços proporcionados pelo SINAES, que contribuíram para a inserção de novas diretrizes nas universidades – como a RS –, ainda existem obstáculos a serem enfrentados pelas IES. O aumento exponencial da concorrência entre aqueles que prestam vestibular, a transformação da educação em uma *commodity*, além da dificuldade de acompanhar a rápida evolução tecnológica e sua consequente obsolescência do conhecimento são exemplos de desafios a serem superados (WAGENBERG, 2006).

Isso, para Wagenberg (2006), revela uma certa decadência do ensino universitário, do qual emergem questionamentos sobre o papel da universidade na preservação da identidade e da cultura de uma nação. Diminuíram os cursos voltados para as humanidades e aumentaram as faculdades direcionadas a carreiras em administração e direito. Tal panorama, segundo o autor, é o mesmo em todo o continente americano. Esse tipo de barreira limita a formação de planos institucionais que priorizem o trabalho acadêmico e científico. Como consequência, incentivam a conformação de estruturas curriculares compostas por disciplinas preponderantemente orientadas ao mercado de trabalho (CALDERÓN; GOMES; BORGES, 2016).

Ainda assim, as universidades laboriosamente se esforçam no sentido de implementar cursos e pesquisas orientados ao saber acadêmico e humano e, por consequência, a temas como a RS. Nada obstante, há um dilema enfrentado pelo(a) estudante, que vê nessas disciplinas simples propostas. Entende que a aplicação de decisões fundamentadas nos princípios éticos e de RS depende

mais da sua disposição em aumentar sua própria renda ou de sua empresa do que da preocupação com o socioambiental inerente ao tema. Em outras palavras, os(as) discentes são expostos(as) a explicações sobre preservação do meio ambiente e reciclagem, por exemplo – e isso tanto na universidade como nas empresas –, mas as próprias instituições não obedecem aos critérios que apregoam em sala de aula (WAGENBERG, 2006).

Para Carrizo (2006), há dois lados a serem encarados: em um deles, estão os desafios gerados pela globalização; no outro, as necessidades dos países pobres da América Latina, África e Ásia, em especial na busca pela erradicação da injustiça social, da pobreza e da desigualdade.

Diante de tal cenário, destaca-se a relevância do conceito de desenvolvimento como fundamental para o debate. Como ressalta Kliksberg (2006), em 1989, a Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou uma resolução que estipulou a garantia do direito ao desenvolvimento a todo ser humano. Calderón, Gomes e Borges (2016) vão além e questionam, levando-se em consideração que as teorias do desenvolvimento foram profundamente debatidas décadas atrás, sendo consideradas ultrapassadas, por que haveria de se dar origem a uma nova teoria do desenvolvimento? Ou, ainda, de qual desenvolvimento se está tratando?

Por suposto que não há um modelo definitivo, o qual deva ser seguido por todos e que preconize responder a tais questões. O caminho ainda está para ser traçado e deve ser definido pelas próprias IES, com a criação de políticas sociais e o fomento da divulgação do balanço social (PEREIRA, 2003).

É notório o “desabrochar” de temáticas sociais nas salas de aula das IES brasileiras, ainda que, como já destacado, as disciplinas sejam sobejamente orientadas para o desenvolvimento de acadêmicos(as) direcionados(as) ao mercado de trabalho (WAGENBERG, 2006). Mesmo assim, o engajamento emergente de questões mais humanísticas com a RS pode, potencialmente, oferecer uma nova estrutura, mesmo que limitada. E a partir dela, talvez, será possível ressaltar as preocupações latentes sobre os impactos da

mercantilização, sua contraposição às práticas de RS e as reais funções e aspirações das universidades brasileiras neste século.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento socioeconômico de uma sociedade está intimamente relacionado à promoção do conhecimento nessa localidade. Não apenas o conhecimento técnico ou o estudo das humanidades, mas também o aprendizado como forma de exercitar as habilidades técnicas apropriadas para a realização de ações sociais que apontem para um fortalecimento de práticas socialmente responsáveis (PIMENTA, 1994).

Isto posto, ao estar atento ao exposto no decorrer deste texto, considera-se pertinente ponderar que ao buscar atender à pergunta proposta e levantar novos questionamentos capazes de instigar futuras pesquisas neste segmento foi possível destacar aquilo que tem impedido a evolução constante das práticas sustentáveis na gestão das Instituições de Ensino Superior, com destaque para o Brasil, como (i) o surgimento de mais IES, gerando desafios em termos avaliativos quanto à qualidade da educação; (ii) a concorrência entre vestibulandos e a conseqüente comercialização da educação; e (iii) as barreiras existentes entre a evolução da tecnologia e sua participação na construção do conhecimento.

Sem embargo, certos avanços – ainda que incipientes – também são percebidos, como a conquista de políticas educacionais, não mais restritas a um estrato social determinado, estabelecendo certa democratização da educação superior. Além disso, os debates em torno das universidades e do ensino superior têm se intensificado nos últimos anos, na tentativa de fortalecer o sistema educacional brasileiro, considerando-se também a sua articulação com a educação básica.

Por meio dos resultados obtidos, portanto, torna-se possível uma reflexão sobre a reformulação de práticas que tenham se constituído obstácu-

los para a Responsabilidade Social Universitária, bem como a manutenção de políticas institucionais que têm mostrado resultados positivos nesse sentido. Percebe-se que não apenas ensinar a teoria, por exemplo, como também, do mesmo modo, incentivar o espírito de RSU passam a ser importantes para que se possa aliar teoria e prática no cotidiano dos(as) acadêmicos(as).

Essa forma de explicitar e atestar o seu anseio em se aproximar das questões sociais locais não é uma tarefa fácil, porém precisa ser levada adiante. Isso porque o futuro da educação – e também da sociedade como um todo – depende essencialmente da consolidação desse tipo de prática social.

REFERÊNCIAS

ASHLEY, Patrícia. **Ética e responsabilidade social nos negócios**. São Paulo: Saraiva, 2002.

BOTTONI, Andrea; SARDANO, Edécio de J.; COSTA FILHO, Galileu B. da. Uma breve história da universidade no Brasil: de Dom João a Lula e os desafios atuais. In: COLOMBO, Sonia S. (Org.). **Gestão universitária: os caminhos para a excelência**. Porto Alegre: Penso, 2013, p. 19-42. Disponível em: http://srvd.grupoa.com.br/uploads/imagensExtra/legado/C/COLOMBO_Sonia_Simoies/Gestao_Univers_Caminhos_Excelencia/Lib/Cap_01.pdf. Acesso em: 23 jun. 2021.

BOWEN, Howard R. **Responsabilidade social dos homens de negócios**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1957.

BRASIL. Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004. Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES e dá outras providências. **Diário Oficial da União**. Brasília, DF: 15 de abril de 2004. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm. Acesso em: 04 jul. 2021.

BROWN, Ed; CLOKE, Jonathan. Corporate Social Responsibility in Higher Education. **ACME An International Journal for Critical Geographies**, Prince George, v. 8, n. 3, p. 474-483, mar. 2019. Disponível em: <https://www.acme-journal.org/index.php/acme/article/view/845>. Acesso em: 26 jun. 2021.

CALDERÓN, Adolfo I.; GOMES, Cleber F.; BORGES, Regilson M. Responsabilidade social da educação superior: mapeamento e tendências temáticas da produção científica brasileira (1990-2011). **Revista Brasileira de Educação**, Rio de Janeiro, v. 21, n. 66, p. 653-679, jul./set. 2016. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v21n66/1413-2478-rbedu-21-66-0653.pdf>. Acesso em: 26 jun. 2021.

CARRIZO, Luís. Conhecimento e responsabilidade social: ameaças e desafios para a universidade transdisciplinar. **Revista Estudos**, Brasília/DF, v. 24, n. 36, p. 75-90, jun. 2006. Disponível em: <https://abmes.org.br/arquivos/publicacoes/Estudos36.pdf>. Acesso em: 30 jun. 2021.

CARROLL, Archie B. Corporate social responsibility: evolution of a definitional construct. **Business & Society**, v. 38, n. 3, p. 268-295, set. 1999. Disponível em: https://www.academia.edu/419517/Corporate_Social_Responsibility_Evolution_of_a_Definitional_Construct?auto=download. Acesso em: 25 jun. 2021.

DAFT, Richard L. **Administração**. Rio de Janeiro: LTC, 1999.

FÁVERO, Maria de L. de A. **Universidade do Brasil: das origens à construção**. Rio de Janeiro: Editora UFRJ/Inep, 2000.

FERRELL, Fraedrich. **Ética empresarial: dilema, tomadas de decisão e caos**. Rio de Janeiro: Reichmann & Affonso, 2001.

FRANCO, Alexandre de P. Ensino superior no Brasil: cenário, avanços e contradições. **Jornal de Políticas Educacionais**, Curitiba, v. 2, n. 4, p. 53-63, jul./dez. 2008. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/jpe/article/view/15028/10076>. Acesso em: 14 set. 2021.

GIANEZINI, Kelly. **Educação e sociedade**: a expansão do ensino superior jurídico e o acesso de minorias étnicas. 2014. 300f. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2014.

KLIKSBERG, Bernardo. A ética e a responsabilidade social da universidade. **Revista Estudos**, Brasília/DF, v. 24, n. 36, p. 23-26, mar. 2006. Disponível em: <https://abmes.org.br/arquivos/publicacoes/Estudos36.pdf>. Acesso em: 30 jun. 2021.

KORTEN, David C. **Quando as corporações regem o mundo**. São Paulo: Futura, 1996.

MOACYR, Primitivo. **A instrução e o império**. Subsídios para a história da educação no Brasil: 1850-1887. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1937.

NICHELS, William G.; WOOD, Mariah B. **Marketing**: relacionamento, qualidade, valor. Rio de Janeiro: LTC, 1999.

OLIVEIRA, Gláucia C. B. **Ensino superior, responsabilidade social e impactos comunitários**: estudo de caso da Faculdade de Ciências Gerenciais de São Joaquim da Barra-SP. 2012. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional) - Centro Universitário de Franca, Franca, 2012. Disponível em: http://pos.unifacef.com.br/wp-content/uploads/2015/12/GI%C3%A1ucia-Coutinho-Buccioli-Oliveira_Disserta%C3%A7%C3%A3o.pdf. Acesso em: 25 jun. 2021.

PEREIRA, Raquel da S. **Responsabilidade social na universidade**: estudo de caso da Faculdade de Ciências Sociais da PUC-SP. 2003. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: <http://repositorio.usjal.org/handle/20.500.12032/454255?show=full>. Acesso em: 04 jul. 2021.

PIMENTA, Selma G. **O estágio na formação de professores**: unidade, teoria e prática? São Paulo: Cortez, 1994.

POLIDORI, Marlis M.; MARINHO-ARAÚJO, Claisy M.; BARREYRO, Gladys B. SINAES: perspectivas e desafios na avaliação da educação superior brasileira. **Ensaio: Aval. Pol. Públ. Educ.** [online], [s.l.], v. 14, n. 53, p. 425-436, 2006.

REIS, Carlos N.; MEDEIROS, Luiz E. **Responsabilidade social das empresas e balanço social:** meios propulsores do desenvolvimento econômico e social. São Paulo: Atlas, 2007.

SANTOS, Boaventura de S. **Pela mão de Alice:** o social e o político na pós-modernidade. São Paulo: Cortez, 1999.

SERPA, Daniela A. F.; FOURNEAU, Lucelena F. Responsabilidade social corporativa: uma investigação sobre a percepção do consumidor. **Revista de Administração Contemporânea**, Maringá, v. 11, n. 3, p. 83-103, jul./set. 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rac/v11n3/a05v11n3.pdf>. Acesso em: 25 jun. 2021.

SGUISSARDI, Valdemar. Universidade no Brasil: dos modelos clássicos aos modelos de ocasião? In: MOROSINI, Marília (Org.). **A universidade no Brasil:** concepções e modelos. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2006, p. 351-370.

SOUZA CAMPOS, Ernesto de. **Educação Superior no Brasil.** Rio de Janeiro: Serviço Gráfico do Ministério da Educação, 1940.

WAGENBERG, Alan. A urgência da responsabilidade social universitária. **Revista Estudos**, Brasília/DF, v. 24, n. 36, p. 27-34, jun. 2006. Disponível em: <https://abmes.org.br/arquivos/publicacoes/Estudos36.pdf>. Acesso em: 30 jun. 2021.

SOBRE OS(AS) AUTORES(AS)

Ana Paula Costa

Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC).

André Afonso Tavares

Graduado em Direito e em Ciências Contábeis pela UNISUL. Graduando em Engenharia de *Software* pela UNICESUMAR. Mestrando em Direito pelo PPG da UNESC. Pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Política, Estado e Direito (NUPED). Temas de interesse: Democracia Participativa Digital, Governo e governança digital, Controle social digital, Transparência e portais digitais, Direito digital, Programação aplicada ao Direito, Cidades inteligentes e Proteção de Dados sensíveis, Inteligência Artificial, *Machine Learning*, *Big data*, *Business Intelligence*, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário e Direito Previdenciário.

Arnaldo Fabiano Fenner

Bacharel em Direito pelas Faculdades Integradas Machado de Assis (FEMA). Advogado, Professor de Direito e Legislação, Sociologia e História na Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Sul e ministra formações, capacitações, palestras e conferências para professores da rede pública em diversos municípios do Rio Grande do Sul.

Camila de Bona

Mestra em Direito (UNESC-2019), com pesquisa relacionada à desigualdade de gênero e inclusão socioeconômica. Especialista em Direito Processual

Voltar ao Sumário

Penal (UNIVALI-2008). Graduada em Direito (UNISUL-2003). Integrante do Núcleo de Estudos em Estado, Política e Direito (NUPED/UNESC) e do grupo de pesquisas Direito e Inclusão Socioeconômica (DISE/UNESC). Foi professora nos cursos de graduação em direito na UNISUL (*campus* Araranguá) e Unibave (Orleans). Advogada Licenciada (OAB/SC 21.211). Assistente de Promotoria do Ministério Público de Santa Catarina (2ª Promotoria de Justiça de Criciúma – área criminal). Detém experiência em áreas específicas do Direito, com ênfase em Direito Penal e Processual Penal.

Caroline da Graça Jacques

Doutora em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina (2015). Mestre em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina (2010). Possui graduação (Bacharelado e Licenciatura) em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa Catarina (2007). Tem experiência na área de Sociologia Política, com ênfase em Teoria Sociológica, Sociologia do Trabalho e Sociologia Econômica, nos temas Economia Solidária, Responsabilidade Social das Organizações, Cadeias Produtivas Globais, Precarização e Trabalho Decente. Fez Doutorado Sanduíche no *Socius*, Instituto Superior de Economia e Gestão, Universidade de Lisboa. Pós-Doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioeconômico da Universidade do Extremo Sul Catarinense (PPGDS-UNESC). Atualmente é Professora na Universidade do Extremo Sul Catarinense, em Criciúma. Atua como Assessora Pedagógica do Setor de Educação a Distância (SEAD-Unesc) e Coordenadora do Polo Rincão de EAD.

Dimas de Oliveira Estevam

Bacharel em Economia, mestre em Administração e doutor em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina (2009). Realizou pós-doutoramento pelo Centro de Investigação em Sociologia Econômica e das Organizações (SOCIOUS) vinculado ao Instituto Superior de Economia e

Gestão (ISEG) da Universidade de Lisboa (ULisboa). Desenvolve suas atividades como Pesquisador e Docente Permanente (Mestrado e Doutorado) do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioeconômico (PPGDS/UNESC). No âmbito da Educação Superior, tem experiência como Gestor de IES. Editor-Chefe da EdiUnesc e Presidente do Conselho Editorial da Editora da Universidade do Extremo Sul Catarinense – EdiUnesc, além de Professor do Curso de Graduação em Ciências Econômicas da Unesc, Coordenador do Programa de Ações em Economia Solidária (Paes/Unesc). Líder do Grupo de Pesquisa Interdisciplinar em Desenvolvimento Socioeconômico, Agricultura Familiar e Educação do Campo (GIDAFEC). Foi Presidente da Associação de Pesquisadores em Economia Catarinense (APEC) entre 2013 a 2017. Tem experiência na área de Economia, com ênfase nos seguintes temas: agricultura familiar, economia solidária, cooperativismo, políticas públicas e desenvolvimento rural. Orcid 0000-0002-8116-2209.

Eduardo Netto Zanette

Possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2013) e mestrado em Desenvolvimento Socioeconômico pela Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC). Atualmente é advogado júnior da Indústria Carbonífera Rio Deserto Ltda. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Civil e Direito Ambiental.

Fernando Locks Machado

Mestre em Desenvolvimento Socioeconômico pela Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC). Bacharel em Administração de Empresas também pela UNESC (2017). Atua principalmente nos seguintes temas: desenvolvimento socioeconômico, administração de empresas, responsabilidade social e comércio exterior. Técnico Extensionista do Programa de Qualificação para Exportação – PEIEX (Núcleo Operacional PEIEX Criciúma). Membro do

Grupo de Pesquisa Gestão e Estratégia em Negócios Internacionais (GENINT/UNESC). Membro do Grupo de Estudos sobre Universidade (GEU/UNESC).

Fernando Miguel Seabra

Doutor em Gestão (Universidade de Évora), Mestre em Ciências Empresariais e Licenciado em Organização e Gestão de Empresas (Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa). Professor Adjunto do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa (ISCAL) do Instituto Politécnico de Lisboa. Investigador integrado do Instituto Jurídico Portucalense. É membro efetivo da Ordem dos Economistas. Colabora e participa em diversos projetos e iniciativas no âmbito do tema responsabilidade social. Autor e coautor de diversas comunicações e artigos. Tem participado também na organização de livros e de conferências. É Embaixador da ALIANÇA ODS PORTUGAL – ODS 4 (Objetivo de Desenvolvimento Sustentável) – Educação de Qualidade. Orcid.org/0000-0002-0999-8714

Jamile Garcia De Lucca

Possui graduação em Direito pela Universidade do Extremo Sul Catarinense (2012). Especialista em Direito de Família e Sucessões pelo Complexo de Ensino Damásio de Jesus. Docente do Curso de Direito pela Universidade do Extremo Sul Catarinense, na linha Direitos Humanos, Cidadania e Novos Direitos. Dedicar-se a pesquisar, principalmente, Conflito, Diretoria Colaborativa, Práticas Colaborativas e Mediação. Advogada colaboradora e mediadora.

Kelly Gianezini

É pós-doutora pela Universidade de Coimbra (UC, Portugal). Doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com estágio de doutorado sanduíche pela *University of California Los Angeles* (UCLA).

Possui mestrado em Sociologia e em Direito, bacharelado em Ciências Sociais, licenciatura em Sociologia e bacharelado em Direito. É Professora Permanente do PPG em Desenvolvimento Socioeconômico e do curso de Direito da UNESC. É avaliadora *ad hoc* do BASIS pelo INEP/MEC. É Líder do Grupo de Estudos sobre Universidade (GEU) registrado no CNPq, o qual integra a Rede de pesquisadores GEU. Em 2020, na *University of Florida* (UF), em Gainesville e em 2013 foi *Visiting Graduate Researcher* na UCLA.

Macon Marques Frasson

Possui graduação em história pela Universidade do Extremo Sul Catarinense (2012) e Especialização em Arqueologia e Patrimônio pela Faculdade Futura (2019). Tem experiência na área de história, com ênfase em história ambiental, atuando, principalmente, nos seguintes temas: ambiente, imprensa, história ambiental, desastres socioambientais, políticas públicas e educação.

Maria João Santos

Doutoranda em Sociologia Econômica e das Organizações, Professora Auxiliar com Agregação no Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa (ISEG-UL) e Investigadora Integrada do Centro de Investigação em Sociologia Econômica e das Organizações (SOCIUS-ISEG/UL). Coordena o Mestrado em Gestão e Recursos Humanos e integrou a Comissão Científica do Programa de Doutoramento em Sociologia Econômica e das Organizações, ambos do ISEG-UL. Coordenou vários projetos de investigação no âmbito do desenvolvimento sustentável e da responsabilidade social das organizações e dispõe de várias publicações nesses domínios científicos. É autora e coautora de vários livros, bem como de artigos científicos publicados em revistas internacionais. Recebeu vários prêmios internacionais, nomeadamente o *Emerald Literati Network 2011 Awards for Excellence*.

Mayara Pereira de Souza

Mestra em Desenvolvimento Socioeconômico pela Universidade do Extremo Sul Catarinense. Graduada em Ciências Econômicas pela Universidade do Extremo Sul Catarinense (2017). Pós-Graduada em MBA Executivo: Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas (2019). Tem experiência nas áreas: métodos quantitativos, matemática financeira, estatística econômica e matemática aplicada à economia.

Reginaldo de Souza Vieira

Possui graduação em Direito pela Universidade do Sul de Santa Catarina (1995) e mestrado em Direito pelo PPGD da Universidade Federal de Santa Catarina (2002). É Doutor em Direito pelo PPGD da Universidade Federal de Santa Catarina (2013). Atualmente é professor titular da Universidade do Extremo Sul Catarinense, atuando no curso de Direito. Professor, pesquisador e Coordenador Adjunto do Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD/UNESC). Professor permanente e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioeconômico (PPGDS/UNESC). É coordenador do Núcleo de Estudos em Estado, Política e Direito (NUPED/UNESC) e do Laboratório de Direito Sanitário e Saúde Coletiva (LADSSC/UNESC). Foi Assessor Acadêmico de Extensão da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da Unesc (2013/2017). Membro do Conselho Gestor do Programa de Extensão Território Paulo Freire – Unesc. Editor Associado da Revista de Extensão da Unesc. Membro do Conselho Editorial da EdiUnesc. Membro titular da Rede Ibero-Americana de Direito Sanitário. Tem experiência na área do Direito, com ênfase em Teoria do Estado, Direito Constitucional, Direito Eleitoral, Direito Partidário e Direito Sanitário, atuando principalmente nos seguintes temas: democracia, cidadania, saúde pública e coletiva, democracia participativa, democracia em saúde, controle social, políticas públicas, partidos políticos e extensão universitária e políticas públicas.

Samuel Henrique Colombo da Luz

Mestre em Desenvolvimento Socioeconômico pela Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC). Bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC). Atualmente é gerente de relacionamento (Banco Votorantim). Tem experiência na área de Economia, com ênfase em História Econômica. Membro do Grupo de Pesquisa História Econômica e Social de Santa Catarina (GRUPHESC).

Sérgio Mendonça da Silva

Graduado em Ciências Contábeis, Especialista em Gestão Empresarial e Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioeconômico da Unesc. Vivência profissional (corporativa) de aproximadamente vinte e cinco anos (25). Atualmente, integra o corpo docente do curso de Ciências Contábeis da Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), como professor das disciplinas de Estágio de Práticas Contábeis I e II, Elaboração do Projeto de TCC (Artigo), Estrutura e Análise das Demonstrações Contábeis, Contabilidade e Governança Corporativa nas Empresas e coordenação do PIO II (Programa Interdisciplinar Orientado).

Sílvio Parodi Oliveira Camilo

Pós-doutorado em Ciências Contábeis-PPGC-UFSC. Doutorado em Administração e Turismo pela Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). Mestrado em Administração e Negócios, com ênfase em estratégia empresarial (PUC/RS). Pós-graduação em Finanças das Empresas, em nível de especialização (UFRGS). Graduação em Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Ciências Jurídicas e Sociais, Ciências Econômicas (UNISUL). Líder do Grupo de Pesquisa Estratégia e Competitividade (GECOMD) da UNESC. Professor de Pós-graduação do Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento Socioeconômico (PPGDS) da UNESC.

O livro *Responsabilidade Social e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável* é proveniente de trabalhos submetidos e aprovados durante o IV Congresso Ibero-Americano de Responsabilidade Social (CRIARS), realizado na Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) em 2019. Compartilha o interesse comum de seus(uas) autores(as) quanto à Responsabilidade Social (RS) e ao Desenvolvimento Sustentável (DS). Nesse sentido, constitui-se uma reflexão sobre os aspectos da RS e como ela tem sido exercida nas organizações, promovendo um debate em torno de estratégias de atuação alternativas como forma de superação dos limitados resultados alcançados, bem como uma reflexão sobre os fatores que estão na origem das limitações existentes e como potencial os efeitos da RS para se obter maiores níveis de sustentabilidade global. Coloca em debate a necessidade de haver uma maior articulação com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e suas possíveis conexões e diálogos.

